ORDEN DEL DÍA
SESIÓN DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2017

- 1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum inicial.
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
- 3.- Lectura, en su caso, y aprobación de las actas de las sesiones de los días 03, 04, 05, 06 y 18 de abril de 2017.
- 4.- Correspondencia.
- 5.- Iniciativa que presentan los diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, con proyecto de Decreto que reforma el Artículo Primero del Decreto que Aprueba las Propuestas de Planos y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y construcción, presentadas por diversos Ayuntamientos del Estado para el Ejercicio Fiscal del Año 2017.
- 6.- Iniciativa que presentan los diputados integrantes de la Comisión Especial Río Sonora, con punto de Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve exhortar, respetuosamente, a la empresa minera Grupo México y a la Fundación Grupo México A.C., para que dentro de las actividades que se realizan en el marco del programa Día del Voluntario de Fundación Grupo México, se incluyan a los municipios de Bacoachi, Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures.
- 7.- Iniciativa que presentan los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora.
- 8.- Iniciativa que presentan las diputadas Lina Acosta Cid, Lisette López Godínez y Célida Teresa López Cárdenas, con proyecto de Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado de Sonora.
- 9.- Iniciativa que presenta la diputada Sandra Mercedes Hernández Barajas, con punto de Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve exhortar, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Hacienda, para que en el próximo presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, se incluya una partida presupuestal suficiente para apoyar e impulsar el desarrollo de la preparatoria municipal Omar Osvaldo Romo Covarrubias en la ciudad de Nogales, Sonora y con ello garantizar la continuidad y permanencia de la paramunicipal, dado el impacto social y económico que representa la misma para la población nogalense.

- 10.- Dictamen que presenta la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora.
- 11.- Propuesta de la Presidencia de la Mesa Directiva, a efecto de que el Pleno de este Poder Legislativo, habilite para sesionar, días distintos a los ordinariamente establecidos por la Ley.
- 12.- Elección y nombramiento de la Mesa Directiva del mes de noviembre de 2017.
- 13.- Clausura de la sesión y citatorio para la próxima.

-LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las doce horas con diecinueve minutos del día tres de abril de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos del Congreso del Estado de Sonora, los ciudadanos diputados Acosta Cid Lina, Acuña Arredondo Rodrigo, Ayala Robles Linares Flor, Buelna Clark Rafael, Castillo Godínez José Luis, Dagnino Escobosa Javier, Díaz Brown Ojeda Karmen Aída, Díaz Nieblas Ramón Antonio, Fu Salcido Carlos Manuel, Gomez Reyna Moisés, Guillén Partida Omar Alberto, Gutiérrez Jiménez José Armando, Gutiérrez Mazón María Cristina Margarita, Hernández Barajas Sandra Mercedes, Lam Angulo Juan José, Lara Moreno Rosario Carolina, León García Carlos Alberto, López Cárdenas Célida Teresa, López Godínez Lisette, Márquez Cázares Jorge Luis, Ochoa Bazúa Emeterio, Olivares Ochoa Teresa María, Palafox Celaya David Homero, Payán García Angélica María, Rochín López José Ángel, Salido Pavlovich Jesús Epifanio, Sánchez Chiu Iris Fernanda, Serrato Castell Luis Gerardo, Trujillo Fuentes Fermín, Valdés Avilés Ana María Luisa, Villarreal Gámez Javier y Villegas Rodríguez Manuel; existiendo quórum legal, la presidencia declaró abierta la sesión.

Posteriormente, solicitó al diputado Trujillo Fuentes, secretario, diera lectura a la orden del día; y puesta a consideración de la Asamblea, fue aprobada, por unanimidad, en votación económica.

Seguidamente, informó de la correspondencia:

Escrito de los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, por medio del cual remite para conocimiento y, en su caso, adhesión de esta Soberanía, Acuerdo con el que hacen un amplio reconocimiento a las

Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano por el apoyo prestado a los cuerpos policiacos de Seguridad Pública de los Municipios del país. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se remite a la Comisión del Seguridad Pública”.

Escrito del Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, por medio del cual remite a esta Soberanía, Acuerdo por el que se gira exhorto respetuoso a las Entidades de la República, para que, de así considerarlo, se adhieran al acuerdo remitido al Presidente de México, solicitando la creación de la Secretaría del Deporte. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se remite a la Comisión del Deporte”.

Escrito del Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, por medio del cual remite a este Poder Legislativo, el oficio suscrito por el Director General de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde al exhorto que ésta Soberanía le dirige al Secretario de Economía, entre otras autoridades, para que de considerarlo procedente, lleve a cabo de manera coordinada las acciones necesarias, dentro de sus respectivas facultades, para resolver las problemáticas relacionadas con la circulación de “carros chuecos” en la entidad, iniciando con el empadronamiento de vehículos usados de procedencia extranjera que circulan de manera ilegal en el estado, para después proceder a realizar el proceso de regularización e importación definitiva de dichos vehículos en el estado de Sonora. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se acumula al expediente del acuerdo 210, aprobado por este Poder Legislativo, el día 18 de octubre de 2016”.

Escrito del Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, dirigido al Subsecretario de Gobierno de esa misma dependencia, con copia para este Poder Legislativo, por medio del cual le hace del conocimiento del exhorto al Delegado Federal de esa Secretaría, a intensificar el cabildeo para que haga cumplir los acuerdos comprometidos de manera inmediata, así como la elaboración de un Plan Regional de Desarrollo que pueda ser empatado al que exige el

contenido de la Ley que crea la Zona Económica Especial Río Sonora. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se acumula al expediente del acuerdo 291, aprobado por este Poder Legislativo, el día 07 de marzo de 2017”.

Escrito del Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, dirigido al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con copia para este Poder Legislativo, por medio del cual le hace del conocimiento del exhorto al Presidente del Fideicomiso Río Sonora, a efecto de que cumpla los acuerdos referentes a la construcción y operación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (UVEAS) y la instalación y operación de las 28 plantas potabilizadoras equipadas con alta tecnología para suministrar agua potable a la población afectada de dicha zona. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se acumula al expediente del acuerdo 291, aprobado por este Poder Legislativo, el día 07 de marzo de 2017”.

Escrito del Presidente Municipal de Bácum, Sonora, por medio del cual solicita a este Poder Legislativo, la asignación de los recursos económicos para ese municipio aprobado por esta LXI Legislatura en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, estipulado en el artículo 77, inciso V, que a su redacción describe Asignación para un programa integral para la realización de actividades culturales, cívicas, deportivas y de esparcimiento en el municipio en mención por la cantidad de \$6,000,000 (seis millones de pesos 00/100 M.N.), según el capítulo quinto y único de las reasignaciones de recursos del Estado de Sonora. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se remite a las Comisiones Primera y Segunda de Hacienda en forma unida”.

Escrito del Subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora, por medio del cual remite oficio y anexos signado por el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, a través del cual da respuesta al Acuerdo donde se exhorta a solicitar el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE). El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se

acumula al expediente del acuerdo 107, aprobado por este Poder Legislativo, el día 05 de abril de 2016”.

Escrito de la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, por medio del cual da contestación al exhorto de este Poder Legislativo, dirigido a los 72 Ayuntamientos del Estado de Sonora, para que remitan a este Congreso, iniciativas que contengan programas de descuentos en el pago del impuesto predial, como medida a favor de la economía de los sonorenses, para cual informa que dicho ayuntamiento, actualmente se encuentra atendiendo lo exhortado. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se acumula al expediente del acuerdo 282, aprobado por este Poder Legislativo, el día 28 de febrero de 2017”.

Escrito del Presidente Municipal y del Secretario del Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora, por medio del cual da contestación al exhorto de este Poder Legislativo, dirigido a los 72 Ayuntamientos y a diversas autoridades del Estado de Sonora, con el fin de tomar las medidas necesarias para que se dé cumplimiento a las disposiciones de la Ley para la Protección, Conservación y Fomento del Árbol en las Zonas Urbanas del Estado de Sonora. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se acumula al expediente del acuerdo 296, aprobado por este Poder Legislativo, el día 16 de marzo de 2017”.

Escrito del ciudadano Manuel Bernal, por medio del cual realiza diversas denuncias en relación al cobro por consumo de agua potable en el Municipio de Hermosillo, donde se están cargando los conceptos de saneamiento y drenaje, solicitando sea revisada esta nueva imposición, al igual que la iniciativa del Presidente Municipal de Hermosillo. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se turna a la Comisión de Examen Previo y Procedencia Legislativa”.

En cumplimiento al punto 4 de la orden del día, la diputada Gutiérrez Mazón dio lectura a su iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona diversas

disposiciones a la Ley de Hacienda del Estado, resolviendo la presidencia turnarla para su estudio y dictamen, a la Comisión Primera de Hacienda.

Asentado el trámite, la diputada Hernández Barajas la felicitó, y agregó que ha sido un tema a pulso para esta Legislatura, y del cual está pendiente porque aún no han erogado ese recurso, y es una exigencia presentada por el Cuerpo de Bomberos; y aunque no es integrante de la Comisión de Hacienda, le gustaría participar y saber de qué manera se les podrá favorecer, toda vez que no todos tienen las mismas condiciones ni la población para ser erogado de una manera justa.

En cumplimiento al punto 5 de la orden del día, la diputada López Godínez antes de dar lectura a la iniciativa presentada en unión con el diputado Fu Salcido, solicitó autorización para el uso de las pantallas, siendo concedido por la presidencia. Seguidamente, dio lectura al proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Regula el Funcionamiento y Operación de los Yunques y Recicladoras para el Estado de Sonora, resolviendo la presidencia turnarla para su estudio y dictamen, a la Comisión Primera de Hacienda.

Posteriormente, dio lectura al punto de: “**ACUERDO: PRIMERO.-** El Congreso del Estado de Sonora, resuelve exhortar, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Hacienda del Ejecutivo Estatal, a efecto de que informe a esta Soberanía, respecto al cumplimiento de la Ley que Regula el Funcionamiento y Operación de Yunques y Recicladoras del Estado de Sonora y, en caso de ser necesario, que realice las previsiones presupuestales para operar la misma y realizar su incorporación en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal de 2018. **SEGUNDO.-** El Congreso del Estado de Sonora, resuelve exhortar, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Hacienda del Ejecutivo Estatal, a efecto de que evalúe la posibilidad de realizar un operativo, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado de Sonora y los ayuntamientos de nuestra demarcación territorial, a efecto de garantizar que los Yunques y Recicladoras que operan al margen de la Ley, sean incorporadas al régimen de su ordenamiento”.

Finalizada la lectura, la presidencia puso a consideración de la Asamblea la solicitud para declarar el asunto con el carácter de urgente y obvia resolución, y la dispensa al trámite de Comisión, y fue aprobado por unanimidad, en votación económica. Siguiendo el protocolo, puso a discusión el Acuerdo en lo general, he hizo uso de la voz el diputado Palafox Celaya para decir textualmente:

“Comentar sobre este tema, hay veces que si me llama mucho la atención la creatividad de algunos compañeros diputados, en el sentido de que estos temas como muchos otros, hay veces que se están trabajando de una manera tan transparente, tan abierta a la ciudadanía, con conocimiento de todos los involucrados en el Congreso del Estado, no nada más los diputados, sino también la dirección jurídica y que de buenas a primeras simple y sencillamente no tomen en cuenta a quien está trabajando de cara a la ciudadanía, involucrando a los actores directos de estos temas, como son los yunqueros, como son los recicladores, como son las casas de empeño que en este caso no se está mencionando, pero con los tres sectores, con las tres áreas de actividad comercial que estamos ahorita mencionando, he estado en reuniones no nada más una sino varias veces aquí en el Congreso del Estado.

Hemos partido de una agenda de trabajo, una agenda de trabajo que ellos han llevado a cabo de manera puntual, yéndonos con las diferentes dependencias federales y estatales para sacar el mejor provecho de esta problemática que existe de los robos, del alto índice criminal en temas de robos a casa-habitación, transeúntes, autopartes, etc., y que ellos han sido señalados y que a final de cuentas en este diálogo constructivo que hemos tenido con ellos, se han llegado curiosamente a varias de estas propuestas que están mencionando ahorita, y que muchas de ellas han sido trabajadas por su servidor y hasta planteadas por su servidor a ellos; y que han sido socializadas en los medios de comunicación.

Este tema en particular es mucho más trascendente o mucho más importante de solamente reformar sus ordenamientos legales, porque estamos queriendo atacar de fondo la problemática de los delitos que hemos mencionado, curiosamente de haber presentado la iniciativa de adicionar un artículo al Código Penal para sancionar más fuerte, y sobre todo involucrar a los dueños, propietarios, dependientes, colaboradores de casas de empeño, recicladoras y yunques, surgió toda esta dinámica de trabajo para que mejoremos los ordenamientos legales de las casas de empeño, pero también como ahorita se mencionó lo de los yunques y recicladoras.

Es un tema que hemos trabajado, que lo hemos socializado, de hecho la diputada Kiki Díaz Brown a petición mía, igual el diputado Jorge Márquez ya han estado reuniéndose en sus diferentes municipios, porque ellos se han interesado, para platicar estos temas, les he dado las minutas de las reuniones que hemos tenido a cabo aquí, para que optimicemos tiempo de yo ir o platicar eso, sino que ellos también hagan lo propio en cada municipio, y estamos en la retroalimentación de todo ello, todavía tenemos agenda, mucha agenda que transitar para lograr precisamente hacer estas iniciativas o presentar iniciativas que mejoren estos

ordenamientos legales, no lo he hecho antes, aun con conocimiento de causa de la Dirección General Jurídica de este Congreso, no lo había hecho antes porque precisamente he estado trabajando de manera concienzuda por decirlo así, con los actores involucrados en el día a día, todos los días estoy comunicándome con ellos, y que de buenas a primeras vengan aquí a la Sesión y suban hasta mis propias ideas que hemos estado planteando y socializando en redes sociales y medios de comunicación, no se me hace tan correcto.

Creo yo que nosotros como Congreso debemos de cuidar mucho las formas y la Cricp pues tendrá que formular de qué manera mantengamos nuestro orden o nuestra organización aquí en el Congreso del Estado, no es un tema de egos, que quede claro, es un tema de trabajo, es un tema de beneficio a los sonorenses, que bueno Lisette, yo sé que no lo haces de mala fe ni tu ni Carlos, porque los conozco bien, pero hay que tener cuidado, porque así como está nos podemos pisar en otras más, y sobre todo quien se ve afectado no somos nosotros, son los sonorenses, lo único que yo aquí solicito es que haya más orden y que haya más respeto entre nosotros los diputados sobre temas en particular.

Yo estoy defendiendo este caso, si ha habido otros casos en el pasado, han tenido su oportunidad, el micrófono y el cabildeo para hacerlo, yo estoy haciendo lo propio porque ante todo también estoy cuidando el respeto que se le ha dado a todos esos yunqueros, recicladores y dueños de casas de empeño que han confiado en su servidor, y que llevamos una minuta, una agenda de trabajo en beneficio de los sonorenses”.

En respuesta, el diputado Fu Salcido dijo:

“Diputado Palafox yo creo que lejos de entorpecer esto, el trabajo que usted está realizando por lo cual lo felicito, lo viene a enriquecer, nosotros hemos analizado la problemática desde la ciudadanía.

En lo particular me fueron a visitar en Agua Prieta algún grupo de yunqueros planteándome la situación, que si se fija y lo comentó la diputada Lisette López, viene desde otra perspectiva también, nosotros no queremos regularizar, no tanto regularizar, no queremos imponer más regulación a los yunques, no mencionamos las casas de empeño, pero cabe aquí usted lo dijo, y ponerles más normas a los que ya están registrados.

Lo que queremos por ejemplo en Agua Prieta, el caso particular de Agua Prieta hay 24 yunques, cuatro de ellos solamente están registrados y los otros 20 no, entonces la situación es que queremos que todos entren o que les podamos ayudar a que se regularicen, porque no es una competencia leal, o es una competencia desleal lo que está pasando, aparte de que los yunqueros que están regularizados pueden vender partes de automóviles hasta cierto año, los no regularizados venden automóviles nuevos, y esta situación no se puede permitir, y yo creo que esto también es un llamado de atención a las autoridades correspondientes para que hagan el trabajo que les corresponde, porque no se vale que haya personas que están pagando impuestos y que sean a los primeros que se les revise y a los demás pues no se les toca, y están operando y están desguzando automóviles en la vía pública, contaminando el subsuelo también.

Entonces yo creo que esto viene a enriquecer, porque pues Sonora no es nada más Hermosillo, yo creo que en todas partes hay problemas y desde esa óptica queremos contribuir a que esta propuesta esté bien amarrada y que se tome en cuenta cada una de las situaciones que están pasando en cada uno de los municipios, que puede ser diferente o pueden ser parecidas, y yo voy más por regularizar a los que no están pagando y no tanto atacar a los que ya están pagando, si controlarlos, trabajar con ellos, pero irnos sobre aquellos que no están cumpliendo con la ley, para que no haya una competencia desleal y de esa manera la base gravada pueda crecer, y no tener que estarle pegando a aquellos que siempre pagan impuestos.

Entonces tiene muchas vértices, yo creo que esto enriquece, por supuesto que celebramos el trabajo que está haciendo usted, mi reconocimiento, de igual manera las diferentes ópticas son importantes, yo entré a este tema precisamente porque los ciudadanos de Agua Prieta me lo solicitaron, y escuché a la diputada Lisette, que ya traía un trabajo anterior con algunas organizaciones y por supuesto también con las autoridades correspondientes, entonces pues yo no veo ningún problema de que un tema se pueda enriquecer y que se pueda tratar de una manera más profunda, para ir a un fondo que la verdad es una situación que está afectando mucho, es una realidad, es un problema que tenemos en todos los municipios y que tenemos que dar nuestra óptica y contribuir con nuestro granito de arena”.

A su vez, el diputado Palafox Celaya respondió:

“Volver a comentar, que bueno y hay que ver esto como una área de oportunidad o una ventana para mejorar nuestro trabajo legislativo, yo entiendo que lo hacen de buena fe, y que al final de cuentas Sonora es muy amplio, por eso la importancia de tener esta comunicación constante y de que nuestro órgano rector aquí en el Congreso esté muy atento a todo ello, y a lo cual yo, digo de entrada reconozco que ha trabajado muy bien durante toda esta Legislatura, nomás seguir trabajando, que no haya este tipo de situaciones que en un momento dado cree fricciones entre nosotros, sino todo lo contrario.

Yo por eso siempre valoro la buena comunicación que he tenido con el diputado Carlos Fú, igual que con Lisette, aquí hay un tema y voy a profundizar en lo que ahorita es el fondo del asunto, cuando nos hemos reunido con todos estos establecimientos o propietarios de establecimientos, ellos han mencionado, hay un común denominador, que de entrada no están organizados como gremio, lo primero que se les ha solicitado es que se constituyan legalmente como una asociación o como una confederación aquí en el Estado, aquí en el municipio y que busquen a los demás en los demás municipios, de tal manera que puedan hacer frente a aquellos que dicen estar en lo correcto, hacer frente a aquellos vicios que en un momento dado se están presentando por algunas dependencias y hasta en ayuntamientos en los diferentes ayuntamientos.

Aquí lo importante que hay que ver es que todos los que estamos en diferentes municipios, San Luis Rio Colorado, Etchojoa, Navojoa, Peñasco, Empalme y demás, tomemos esta bandera y empecemos a reunirnos con los que nos corresponde, de esa manera le saquemos realmente provecho a esto, que haya un consenso mayoritario y que logremos que ellos

mismos, los establecimientos, lo que se dedican a estas actividades comerciales estén conscientes de que ya están siendo más vigilados también por nosotros, y que nosotros también vamos a estar esperando sus inquietudes o sus comentarios de cómo ven el trabajo gubernamental en su inspección o regulación hacia ellos.

No le veo ningún problema, vamos a trabajar y si quieren luego nos reunimos Carlos y Lisette para la minuta que ya hemos trabajado nosotros la conozcan bien ustedes, y tanto los diferentes grupos parlamentarios hagamos una ruta crítica de cómo avanzar en los diferentes municipios y que todos estemos inmersos en este tema, es un tema prioritario, el tema de los robos a casa-habitación nos está pegando a todo Sonora, a todo México, pero ahorita estamos preocupados y es lo que nos corresponde a nosotros, nada más quería comentar eso y verlo como una ventana de oportunidad para mejorar nuestro trabajo legislativo”.

Posteriormente, el diputado León García agregó:

“Creo que son dos temas aquí distintos, uno es lo que han propuesto los compañeros que yo veo valioso que se puedan sumar voces a una iniciativa que aún no se ha discutido en Comisión y que entre todos podemos construir.

Yo creo que aquí no son nuestros temas o nuestras ideas, sino lo temas de los ciudadanos y qué bueno que las fuerzas parlamentarias podamos discutirlo, ese es un tema lo de casas de empeños y yunques, pero también está el otro tema; la Ley Orgánica dice que podemos hacer las propuestas todas las fuerzas parlamentarias y ha sucedido con lo que se acabe el dinero para los políticos, todas las fuerzas parlamentarias en el Congreso, el tema del fuero en Jalisco cinco o seis fuerzas parlamentarias lo hicieron.

Entonces yo si veo valioso que podamos hacer eso y que no limitemos, en su caso que se haga la propuesta de que no se repita y cambiamos, si así lo queremos todos, la manera de que no se pueda repetir, pero la Ley Orgánica lo permite, entonces yo no quisiera que siempre cuando se va a repetir algo exista esta discusión de que yo lo propuse, yo quisiera que en la del fuero la propusieran todos y la aprobáramos todos, entonces yo quisiera que los temas que yo veo interesantes y que ha sido exigencia ciudadana pues otra gente también lo propusiera.

El tema del yunque lo veo bien, quiero recordarles también que yo hice una propuesta o sea como evitamos el robo antes de evitar que hacen con las cosas robadas, entonces yo hice la propuesta de allanamiento de casa-habitación y prisión por robo que aún no se han discutido compañeros, yo creo que primero tenemos que atacar el robo y luego que se hace con las cosas que se roban”.

Y sin que se presentaren más participaciones, fue aprobado el Acuerdo en lo general, por unanimidad, en votación económica. Siguiendo el protocolo, la presidencia puso a discusión el Acuerdo en lo particular; sin que se presentare participación

alguna, fue aprobado por unanimidad, en votación económica, dictándose el trámite de: “Aprobado el Acuerdo, y comuníquese”.

En cumplimiento al punto 6 de la orden del día, el diputado Díaz Nieblas dio lectura a su iniciativa con punto de: “**ACUERDO: ÚNICO.-** El Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar a la titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que atienda las inquietudes sociales de los ciudadanos del Municipio de Granados”.

Finalizada la lectura, la presidencia puso a consideración de la Asamblea la solicitud para declarar el asunto con el carácter de urgente y obvia resolución, y la dispensa al trámite de Comisión, y fue aprobado por unanimidad, en votación económica. Siguiendo el protocolo, puso a discusión el Acuerdo en lo general y en lo particular; sin que se presentare objeción alguna, fue aprobado por unanimidad, en votación económica, dictándose el trámite de: “Aprobado el Acuerdo, y comuníquese”

En cumplimiento al punto 7 de la orden del día, el diputado Dagnino Escobosa, dio lectura al posicionamiento presentado por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con motivo del operativo de desalojo contra ciudadanos de la Comisaría Miguel Alemán en la carretera a Bahía de Kino, kilómetro 48, en el municipio de Hermosillo, el cual dice textualmente:

“Una vez que un gobierno se apega al principio de silenciar la voz de los CIUDADANOS; sólo le queda un camino que recorrer y éste es ir a través de medidas represivas que se incrementan hasta que se convierte en una fuente de terror para todos sus habitantes y crea un estado donde todos tienen miedo” HARRY S. TRUMAN

El pasado viernes 31 de marzo un grupo de ciudadanos de la Comisaría Miguel Alemán que se manifestaba bloqueando la carretera número 100 rumbo a Bahía de Kino, fue desalojado mediante un uso excesivo, brutal e inhumano de la fuerza pública estatal y municipal.

Sin valorar que entre los manifestantes estaban presentes niños, estudiantes menores de edad, personas de la tercera edad, socorristas y periodistas, los policías municipales y estatales procedieron al desalojo empleando gritos, insultos, golpes, disparos con balas de goma y gases lacrimógenos.

Un crudo testimonio de ese exceso de fuerza son las imágenes de un elemento policial que encañona con una escopeta a socorristas de la Cruz Roja, padres de familia y niños que

levantaban las manos o corrían llenos de terror. Estas imágenes han causado una enorme indignación entre los sonorenses y dieron la vuelta al país a través de diversos medios de comunicación.

De las actuaciones de las autoridades de Seguridad Pública del Gobierno del Estado y del H. Ayuntamiento de Hermosillo, pareciera que en Sonora hay ciudadanos de primera y de segunda, pues, por un lado, en lo que respecta al bloqueo a la carretera federal México 15 a la altura de la localidad de Vícam se sostuvo un diálogo por un periodo superior a los dos años, y nunca se consideró por parte de las autoridades en ese momento que se hubiese dialogado lo suficiente; pues nunca se levanto dicho bloqueo empleando violencia, por lo que resulta muy irresponsable e incongruente que se pretenda argumentar y justificar que el operativo de desalojo al que me refiero, se dio en virtud de haberse “AGOTADO” el diálogo y negociación con quienes en el ejercicio de sus garantías constitucionales se manifestaron por lo que a su consideración son medidas ilegales e injustas de parte de la autoridad estatal.

Más indignación causan este tipo de atropellos de parte de las autoridades encargadas de la seguridad pública, cuando es evidente que la delincuencia hace de las suyas a diestra y siniestra en las calles de Hermosillo, al grado que se han disparado los índices delictivos en el último año y medio, a los cuales nos hemos referido en esta tribuna en diversas ocasiones y lo padecen los hermosillenses día con día.

Es nuestro deber señalar que la brutalidad policial utilizada en el desalojo del pasado viernes es simplemente injustificable e imperdonable.

El diálogo y la conciliación deben ser las principales herramientas que se utilicen para atender a ciudadanos que se manifiesten de manera pacífica y quienes únicamente buscan una pronta solución de sus problemas por parte de la autoridad.

Las fuerzas policiales están para proteger y servir a los ciudadanos, y no deben convertirse en un brazo represor de las manifestaciones y las expresiones que son desfavorables para el Estado.

La Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora establece en su artículo 154, fracción quinta, que los integrantes de las instituciones policiales deben tener un trato respetuoso hacia los ciudadanos, debiendo abstenerse de ejecutar actos arbitrarios o limitar indebidamente las manifestaciones, que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico, realice la población.

Adicionalmente la fracción cuarenta y nueve señala que los elementos no pueden realizar disparos con armas de fuego sin orden o causa justificada.

Por su parte, el artículo 172, en su fracción quinta, indica que es causal de remoción de los integrantes de las instituciones policiales el que se ponga en peligro a particulares a causa de imprudencia, descuido, negligencia o abandono del servicio.

Por todo esto, es que hacemos un enérgico llamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado y al Presidente Municipal de Hermosillo, para que cese de sus funciones no sólo al elemento o elementos que encañonaron a los ciudadanos durante el desalojo como ya fue anunciado el pasado sábado 1 de Abril, sino también, al funcionario o funcionarios responsables del operativo ejecutado en contra ciudadanos de la Comisaría de Miguel Alemán.

Adicionalmente, quienes integramos el Grupo Parlamentario del PAN hacemos un llamado a todos los integrantes de esta Honorable Asamblea, para que a la brevedad aprobemos la iniciativa que se presentó en octubre de 2016 por parte del diputado Luis Serrato Castell para crear la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública de las Instituciones Policiales del Estado de Sonora.

En esa iniciativa se busca precisamente dar seguridad y certidumbre a los ciudadanos y a los propios agentes sobre el manejo de fuerzas públicas, armonizando las leyes estatales con parámetros internacionales y con las reformas constitucionales en materia de seguridad pública y justicia penal.

Además, plantea capacitación constante para los cuerpos policiales, sanciones para los elementos que incurran en malas acciones e indemnizaciones para los ciudadanos que sufran un trato inadecuado de la fuerza policial, como fue el caso del desalojo del pasado viernes 31 de marzo.

La aprobación de esta iniciativa, con los cambios que esta Asamblea considere pertinentes, se hace indispensable luego de que recientemente ya son varios los casos en los que se ha hecho un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza pública estatal.

En este año, además del incidente del pasado viernes sobre la carretera a Bahía de Kino, durante enero pasado policías estatales realizaron disparos de arma de fuego para dispersar a un contingente de manifestantes que protestaban contra el “gasolinazo” en Nogales y que habían tomado las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria en esa ciudad fronteriza.

En abril del año pasado también se “viralizaron” en las redes sociales las imágenes de la detención del maestro José Luis Portillo Liera, líder magisterial en Guaymas y Empalme y opositor a la Reforma Educativa, quien fue inmovilizado con fuerza excesiva por elementos estatales frente a sus alumnos y padres de familia de la escuela donde impartía clases.

También en febrero de 2016, enfermeras y médicos del Hospital “Dr. Ignacio Chávez” del Isssteson de Hermosillo quienes protestaban bloqueando el bulevar Abelardo Rodríguez tras haber sido despedidos de forma injustificada, fueron retirado de forma violenta con jaloneos, gritos y golpes por elementos estatales y municipales.

Todos estos casos, sumados al desalojo del viernes en la carretera a Bahía de Kino tienen el común denominador en el actuar de las autoridades policiales en Sonora: un uso excesivo y arbitrario de la fuerza pública, que denigra la dignidad humana y pone en peligro la

integridad y la vida de manifestantes, socorristas, periodistas y hasta de los propios elementos policiales que participan en los operativos.

Estas imágenes, que como vemos han sido recurrentes en el último año y medio, no deben repetirse. No existe justificación y si un incidente de esta naturaleza vuelve ocurrir en nuestro estado, quedaría claro que el actuar de las fuerzas policiales no es producto del momento ni del azar, sino de una orden superior que busca reprimir de manera sistemática las manifestaciones y expresiones que no concuerdan con los puntos de vista oficiales. Esto no debe repetirse.

Por lo anterior expuesto consideramos necesario y prudente que se solicite la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública estatal y del Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal ante esta soberanía, para que podamos conocer los motivos y razones por el que se autorizó un operativo de este tipo que violenta los Derechos Humanos y la dignidad de los pobladores de la Comisaría Miguel Alemán de esta ciudad de Hermosillo”.

En cumplimiento al punto 8 de la orden del día, la diputada Sánchez Chiu dio lectura al posicionamiento presentado por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación al bloqueo carretero ocurrido en la carretera 100 a Bahía de Kino, el cual dice textualmente:

“Digamos las cosas como son sin rodeos, siempre, siempre, siempre voy a estar con mi gente de la Costa, del respeto a sus derechos, pero también siempre voy a estar del lado del diálogo y de la ley.

Una cosa no contradice a la otra, por supuesto que estoy molesta por las imágenes que circularon en medios y en redes sociales, el exceso en que pudo haber incurrido un elemento o elementos de seguridad al momento de proceder a la liberación de la carretera no tiene justificación y debe ser castigado, por eso exigimos a la autoridad una investigación a fondo y en caso de determinarse algún exceso se aplique la mayor sanción posible.

A mi gente de la Costa yo les digo, desde luego que nuestros amigos concesionarios tienen derecho de expresarse, pero también tienen derecho los habitantes de Miguel Alemán, de Bahía de Kino, de la Costa de Hermosillo, a trasladarse cuando ellos así lo deseen.

No es engañando, ni manipulando como se resuelven nuestras diferencias, es dialogando, consensando y sobre todo respetándonos todos, como se solucionan los problemas.

¿Qué hay detrás del bloqueo de la carretera que conduce a Miguel Alemán?

¿Cuál es el problema de fondo?

¿Qué intereses perversos hay en los hechos del pasado fin de semana?

La administración del hoy imputado por diversos delitos Guillermo Padrés, otorgó 21 concesiones de transporte suburbano para que operen en el área de Miguel Alemán. Necesarias o no, justificadas o no, esas concesiones fueron expedidas por la Dirección General de Transporte de la pasada administración padrecista.

Todos tenemos derecho a dedicarnos a cualquier trabajo lícito. Es nuestro derecho Constitucional. Pero no hay que olvidar que no hay derecho sin obligación.

Aquí no hubo albazo... o Madrugete...

No se trató de un acto arbitrario, se trató de un procedimiento legal que inició desde el año 2016 y que culminó con una resolución de revocación de las concesiones, que incluso se publicó en el Boletín Oficial del Estado.

Procedimiento donde los concesionarios fueron debidamente notificados, donde tuvieron en todo momento el derecho de expresar lo que a su favor convenga, donde pudieron ofrecer pruebas, donde pudieron alegar y argumentar a su favor. Tuvieron en todo momento el derecho y la oportunidad de defenderse Y curiosamente, ahí donde deben defenderse, es donde no se defendieron.

Quizá No lo hicieron porque varios de esos concesionarios tienen NO Solo UNA, SINO DOS O MÁS CONCESIONES, por lo que no puede hablarse de una “Consigna Política” cuando se les revocó sólo una de dichas concesiones. Y donde el enfoque fue, el retiro la concesión irregular, no la o las personas que tienen la concesión.

De hecho, los concesionarios aún tienen el derecho de impugnar la resolución de revocación de sus concesiones ante el Tribunal Administrativo y, en caso de no obtener un fallo favorable, acudir a los tribunales federales para intentar dejar sin efecto la indicada revocación.

Aquí no se trata de consigna política. Se trata de que todos debemos respetar la ley, y que ésta se aplique sin distinciones, de manera igual para todos.

En el caso concreto de estas concesiones de transporte público, como es el caso de todas las concesiones de esta naturaleza, el concesionario no obtiene solamente el derecho de explotar esta concesión, también acepta ciertas obligaciones que están relacionadas principalmente con la seguridad y la integridad física de los usuarios del servicio de transporte público.

De acuerdo con información de la propia autoridad del transporte, los 21 concesionarios están obligados, entre otros aspectos, a establecer centrales o terminales propias o utilizar alguna de las autorizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Incumplir con esta obligación es causa para iniciar un procedimiento de revocación de la concesión correspondiente.

Derivado de diversas inspecciones practicadas desde el año pasado por la autoridad del transporte, se determinó el incumplimiento de esta obligación, llevando como consecuencia el inicio del procedimiento de revocación correspondiente.

En Sonora no hay ciudadanos de primera ni de segunda. ¿O que acaso esos 21 concesionarios están liberados de cumplir la Ley?

¿O qué acaso esos 21 concesionarios tienen privilegios en relación con el resto de los concesionarios del Estado?

En un estado de derecho, donde la ley del talión y la ley de la selva o del más fuerte no tienen cabida, es en el cauce institucional donde deben resolverse las diferencias. Para eso están los tribunales.

Pero no es engañando ni manipulando como se resuelven nuestras diferencias. Ni mucho menos perjudicando a terceros mediante actos de provocación como el bloqueo de una carretera, impidiendo el libre tránsito de las personas.

NO SE DEBE CONFUNDIR A LA GENTE.

El derecho de uno termina, donde empieza el derecho de otro.

Bloquear una carretera implica la afectación de terceros que tienen el derecho de transitar por esas carreteras de manera libre, es decir, no se les debe impedir transitar sobre ellas; además de que un acto de tal naturaleza conlleva la comisión de un delito por obstaculizar dolosamente el tránsito por una vía estatal de comunicación terrestre o de una vía pública.

El bloqueo de una carretera es además moralmente reprochable, si no es que también ilegal, cuando para ello se utilizan a mujeres y niños como escudos para esconder sus verdaderas intenciones.

Hablemos claro!

Lo anterior no justifica ningún exceso, ya que nada ni nadie, mucho menos un elemento de seguridad, tienen el derecho de violentar los derechos humanos al proceder a la liberación de la carretera.

Exigimos a la autoridad una investigación a fondo y, en caso de determinarse algún exceso, se apliquen las sanciones que resulten conducentes.

Todos somos sonorenses.

Todos tenemos derechos.

Desde luego que nuestros amigos concesionarios tienen derecho de expresarse. Pero también tiene derechos nuestra gente de Miguel Alemán, de Bahía de Kino y de la Costa de

Hermosillo que deben transitar por esa carretera diariamente. También tienen derecho nuestros enfermos a recibir atención médica oportuna en Hermosillo, para lo cual deben circular por la carretera.

Esta intransigencia de parte de quienes tomaron la carretera, este ánimo de rechazar el diálogo, hace evidente que se trata de gente que no quiere resolver el problema y que sólo intentan generar inestabilidad en lugar de ver por las necesidades reales de nuestra gente de la Costa de Hermosillo.

Tal pareciera, porque así lo deja ver la evidencia documental y fotográfica, que en los hechos del viernes participó gente ligada o simpatizante de un partido político que más allá de ver por la solución del problema, deja entrever que lo único que se busca es agrandar o al menos que el conflicto subsista.

Nuestra gente, mi gente de Miguel Alemán, de Bahía de Kino y de la Costa de Hermosillo, son gente sencilla, gente trabajadora, productiva, gente que aporta; gente que día a día se pone la camiseta y se gana con el sudor de su frente los alimentos que ponen en la mesa.

Nuestra gente es más que 21 concesionarios. Son cientos, son miles de familias que luchan por salir adelante y que no quieren conflictos, quieren paz, quieren tranquilidad, quieren mejores condiciones de trabajo y de vida. Ese ha sido, es y será mi compromiso.

Los invito a que todos, juntos, unifiquemos esfuerzos para lograrlo.

Y lo ratifico. NO ES ENGAÑANDO NI MANIPULANDO COMO SE RESUELVEN NUESTRAS DIFERENCIAS.

Los invito a que seamos partidarios SIEMPRE del DIALOGO, del CONSENSO y sobre todo del RESPETO, como el camino para solucionar los problemas”.

En cumplimiento al punto 9 de la orden del día, el diputado Rochín López dio lectura a su posicionamiento en relación al violento desalojo de manifestantes en la Carretera Número 100 a Bahía de Kino, el cual dice textualmente:

“Al Pueblo de Sonora:

A la Opinión Pública:

Honorable Asamblea:

El pasado viernes 31 de marzo, entre las 14:00 y 17:00 horas, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, llevaron a cabo el desalojo de manifestantes que tenían bloqueada la carretera número 100 a Bahía de Kino.

La causa: la cancelación de concesiones de servicio de transporte público. Un tema bastante delicado que debe ser discutido en otro momento.

Sin embargo, independientemente de los grupos políticos en disputa, de las formas de la protesta o la justificación que se tenga para llevar a cabo el desalojo, es reprobable la forma en la que se condujeron los mandos policíacos y, particularmente, sus agentes.

Las imágenes del uso excesivo de la fuerza, que incluyó golpes, insultos, gas lacrimógeno, y hasta armamento que puede ser letal para mujeres y niños, está dando la vuelta al mundo, lo cual nos debe poner a reflexionar sobre lo sucedido en este lamentable hecho, para que en un futuro, esto no vuelva a ocurrir. La falta de habilidades políticas para una negociación, si es que se llevaron a cabo con verdadera voluntad de diálogo, fueron insuficientes.

En Morena, somos partidarios de resolver nuestros conflictos por la vía de la legalidad y la negociación, nunca a través de la fuerza. Tenemos la firme convicción de que cuando las autoridades utilizan la fuerza pública es porque no se tiene la razón ni los argumentos para convencer a los ciudadanos.

He visto con atención las imágenes y videos de los sucesos que han sido viralizados por todo el País y en particular, como representante popular, estoy indignado con el trato tan déspota que se usó contra mujeres y niños, con un lenguaje arrabalero propio de agentes que no recibieron la educación básica ni la formación policíaca apropiada.

Yo no sé qué piensen ustedes compañeros Diputados, pero después de lo ocurrido y, de este comportamiento tan deleznable de la autoridad, sin duda alguien debe renunciar o ser cesado de manera inmediata.

Compañeros diputados, Sonora no es un Estado, en donde se impone la Ley del más fuerte. En donde autoridades policíacas sin criterio alguno, imponen sus reglas a los más débiles. Sonora debe ser un territorio en donde impere el Estado de derecho y, esto no fue así, y se debe hacer algo al respecto.

Convoco a las autoridades encargadas de velar por los derechos de los ciudadanos a deslindar responsabilidades:

* Al Ciudadano Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena, Procurador General de Justicia a investigar el probable delito de abuso de autoridad y los que resulten.

* Al Ciudadano Arturo Raúl Arturo Ramírez Ramírez, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por la probable violación a los derechos humanos.

* Al Ciudadano Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General, por las probables faltas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Estado de Sonora y sus Municipios cometidos por policías y sus superiores jerárquicos.

Finalmente, exigimos a las autoridades estatales correspondientes la liberación inmediata de los detenidos de manera arbitraria y sin el procedimiento legal correspondiente y en algunos casos en flagrante violación al orden constitucional.

Los militantes de Morena en Sonora no queremos que la violencia generada por autoridades policiacas sea el camino para el progreso. Consideramos que el oficio de la política debe ser la vía idónea para una verdadera transformación de nuestro estado y una nueva relación entre el Gobierno y sus ciudadanos”.

Acto seguido, el diputado León García dijo:

“Hace unos años en la administración anterior los ciudadanos fueron reprimidos por manifestarse en contra del impuesto a la tenencia; apenas en febrero del año pasado personal médico y enfermería del Isssteson despedidos fueron reprimidos por manifestarse. Otra represión se registró en enero de este año en la Ciudad de Nogales con ciudadanos que se manifestaron en contra del alza de la gasolina, y en los últimos días el tema ha sido la represión que sufrieron manifestantes del Poblado Miguel Alemán, por bloquear la carretera que conduce hasta Bahía de Kino por la cancelación de concesiones de transporte público, perjudicando la movilidad de los usuarios entre ellos muchos estudiantes y al concesionario.

Históricamente en Sonora ante el descontento ciudadano es constante el uso de la fuerza pública del bajo nivel de tolerancia para el diálogo, en Movimiento Ciudadano lamentamos que el sistema de seguridad pública no esté actuando de acuerdo con los protocolos internacionales para disolver conflictos, el cual debe manejarse 7 niveles de control por parte de la autoridad y que deben ser proporcionales a los 7 niveles de resistencia ciudadana.

En Movimiento Ciudadano también lamentamos que en el transcurso de los últimos años el descontento social se interprete por el gobierno en turno siempre como una pugna entre el PAN y el PRI, y no se resuelvan los problemas de fondo de los ciudadanos, como diputado solicito también se autorice por el Pleno del Congreso una comparecencia del secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora, Adolfo García Morales, para que rinda un informe a este Poder Legislativo sobre las acciones que se utilizaron para resolver los conflictos antes señalados, conocer tales acciones ayudará a este Poder Legislativo a llevar a cabo la legislación necesaria para establecer y reglamentar y el uso de protocolos para atender las protestas sociales con una reforma policial en Sonora, también para exigir como representantes de los ciudadanos, que el Gobierno del Estado de Sonora tome acciones pertinentes que permitan salvaguardar el derecho de libre manifestación de los ciudadanos así como su seguridad”.

También el diputado Lam Angulo hizo uso de la voz para decir:

“Hace un año nos vimos en hechos igual de lamentables, pero fue contra los maestros y como que ya se nos está haciendo costumbre y como que ya tiende a hacerse vicio aplicar

estos métodos y es muy peligroso, tenemos que prevenir una tragedia, esto apunta para tragedias.

Ya se siente por parte de los ciudadanos, de la sociedad en general mucho coraje, mucho hartazgo por los mecanismos que se están implementando en este tipo de situaciones, ya no es una, dos, tres, son más de cuatro, ciudadanos solos también han sido agredidos por la fuerza pública, hay videos de un invidente que lo someten a la fuerza también, que ese se omitió aquí y hay otros hechos aislados en municipios.

Hace un año mencionamos que cuando un gobierno que usa la fuerza para imponer su dominio enseña a los oprimidos a usar la fuerza para defenderse, esto hace bastante que lo mencionó Nelson Mandela, esta frase mencionamos hace un año con toda la intención y el sincero deseo de que fuera un solo evento de ese tipo y ya parar porque apunta para tragedia.

Ya en muchos sexenios de nuestros gobiernos mexicanos se ha aplicado este método y ha terminado en matanzas, tenemos muchas en la historia de nuestro país, no lleguemos a eso en nuestro Estado de Sonora, tenemos que prevenir eso, porque al rato con lamentar la tragedia que se pueda presentar no vamos a resolver nada, aquí hemos llorado tragedias juntos, todos los 33 diputados y diputadas, las hemos lamentado mucho, tragedias provocadas por la pobreza en que viven las comunidades y muchas familias de esta capital, entonces convoco a que las autoridades, los responsables de estos cuerpos policiacos a que hagan un profundo acto de conciencia y se revise la condición que guardan sus cuerpos policiacos también, ningún elemento se manda solo.

Entonces sí coincido con los posicionamientos que hace el Grupo Parlamentario del PAN y el representante parlamentario de Morena de que deben de comparecer los representantes de Seguridad Pública ante el Congreso del Estado, y sí hago un llamado también a la conciencia del Congreso en Pleno de esta Legislatura a que hagamos un alto, provoquemos que se logre un alto al fuego, evitemos una tragedia que pueda lastimar a todos los sonorenses”.

A su vez, el diputado Ochoa Bazúa expresó:

“Yo quiero comentar aquí ante todo el Pleno, a todas las fuerzas políticas de este Congreso la gran oportunidad que tenemos de cada vez que propongamos alguna situación, lo hagamos acompañados de la congruencia, de la congruencia en lo que decimos, en lo que hacemos y en lo que pensamos, y en lo que hemos venido haciendo.

Nosotros somos y fuimos testigos reales, actores de diversos eventos que lamentablemente sucedieron en la pasada administración del Gobierno del Estado, y puedo hablar no solamente excesos de las mismas corporaciones policiacas que se usaban, que se usaron para reprimir, sino también de mismos ciudadanos que usaron para hacerle frente a diversas auténticas manifestaciones que florecieron en todos los temas, en temas del transporte, en

temas de la salud, en temas de proyectos hídricos, en temas diversos de todas las dependencias que tienen que ver con el Estado.

Y puedo hablarles del caso de Vícam en donde hubo disparos, en donde hubo violencia, puedo hablarles del caso de Hermosillo con los mal nacidos que usaron ciudadanos, no solamente elementos policiales, el caso de Cajeme cuando sucedió aquel acontecimiento en la notaría del licenciado Manjarrez, en donde también hubo uso de la violencia contra ciudadanos y muchos otros eventos, sin mencionar que también metieron a la cárcel, inventaron delitos por manifestarse ante una auténtica necesidad.

Reprobamos todo exceso que genere violencia contra un ciudadano que se manifieste, apoyamos el estado de derecho, pero también reprobamos cada vez que exista un exceso, porque lo hemos hecho antes y lo estamos haciendo ahora, independientemente de quien gobierne y cual sea el color que tenga el estandarte arriba, nosotros en lo particular hemos vivido esas situaciones y no podemos permitir que volvamos a tener ese Estado polarizado que tuvimos en el sexenio anterior.

Hoy tenemos la gran oportunidad de sacar adelante este tema, de que prevalezca el estado de derecho y que podamos permitirle a la sociedad en general que se pueda manifestar pacíficamente sin dañar a la gente, como se hizo gravemente en el sexenio anterior, yo lo que quiero hacer es un llamado a la congruencia, cada vez que tomemos la palabra en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos”.

Posteriormente, la diputada Acosta Cid dijo:

“Estamos convencidos de que el hablar del pasado y el querer dar una justificación no pedida, pues da por antemano la culpabilidad manifiesta, que lástima que nuestros compañeros del Grupo Parlamentario del PRI se dirijan exclusivamente a la posición que el Grupo Parlamentario del PAN ha dado, cuando tanto los compañeros de Morena y de nuestro compañero “*Charlie*” León de Movimiento Ciudadano y del PRD también nos están dando su punto de vista que es el punto de vista de los ciudadanos; el fondo y el origen de este tema es la represión, el abuso del poder de las fuerzas policíacas.

Que no nos confundan, todos los mexicanos tenemos el derecho de manifestarnos, ese derecho está no solamente en la Constitución, sino también si estamos hablando de legalidad tenemos que decir que en el caso de las corporaciones de seguridad pública que tienen muy claro que deben de proteger al ciudadano, de prevenir, pero nunca de atentar contra la paz social, pero sobre todo contra la seguridad de los propios ciudadanos, queremos hablar de un estado social y democrático de derecho donde la represión es la carta de presentación, yo creo que en Sonora estamos lo suficientemente maduros como ciudadanos para manifestarnos cuando creemos que las causas son justas.

¿Queremos hablar de legalidad en el tema del transporte? Los he invitado e invito a que vayan a San Luis Río Colorado para ver si se está cumpliendo la Ley de Transporte, también los invitamos para que cualquier situación que no puedan dialogar podamos nosotros intervenir, porque veo que no hay capacidad de diálogo.

¿Siete horas se les hace suficiente? Si sabemos que en el asunto de Vícam duramos dos años, que poquita paciencia, no aguantan nada, yo creo que la parte fundamental es el derecho a la libre manifestación, y vamos a seguir siempre del lado de los ciudadanos cuando quieran reprimir de manera tan frontal a mujeres, a niños, a socorristas, a gente que no tiene nada que ver con partidos políticos, vamos a estar siempre de su lado y siempre vamos a estar alzando la voz cuando con un acto de ilegalidad total las corporaciones que están para proteger nos quieren venir a reprimir, esta tribuna va a seguir de lado de los ciudadanos y vamos a seguir diciéndoles cuando se equivoquen, también hay que admitir cuando se equivocan”.

También el diputado Trujillo Fuentes dijo:

“Por reiteración de la estrategia que se ha seguido en el debate de los posicionamientos es que hago uso de la tribuna, aprovecho pues ser un grupo parlamentario, y aprovecho ser diputado para también mostrar un poco de estrategia y hablar de un tema que podía haberse quedado en una manifestación, pero se ha reiterado posiciones por lo tanto queda claro que una y otra argumentan de diferente manera y soportan de diferente manera los argumentos, y cuando se hace eso no queda más que a la apelación de la razón en quien la tenga, y me parece que ahí es donde se juega con lumbré en la política y es donde empezamos nosotros a ver los quiebres de los tiempos electorales.

El cierre de ojo que nos hacen los temas como seguridad y arreciar contra el gobierno constituido con lo menor que pueda suceder, es parte también de la aceptación que ahorita se está haciendo en la dinámica que estamos siguiendo y la acepto, apruebo pues que como dimos un paso más a un estilo que a la mejor dure un tiempo y vamos a tener que ir mostrando posiciones y eso vale la pena también, simplemente que hay que estar atentos de lo que se va haciendo.

Primero, no puede ser un punto de Acuerdo porque es un posicionamiento a que se convoque a las autoridades y si en todo caso los proponentes del posicionamiento van a hacer que esto sucede, pues lo sometan a votación del Pleno y no se use un posicionamiento para decir que se solicitó, pero no se aprobó, no puede ser aprobado en un posicionamiento.

Segundo, en particular a nosotros, voy a tratar de explicarme en un escenario, las redes son mucho más democráticas que lo que pasaron en las imágenes ahorita y vaya que esas si llegan a fondo, y en esas redes sociales mostraron algo que también la sociedad asoma ya, una madre de familia con un hijo que con el nuevo Sistema de Justicia Penal, sale a pesar de llevar nueve delitos y con una madre que a sus hijos los ha educado con todos los esfuerzos del mundo y que sus hijos están en la escuela, acuden, tienen amigos, hacen sociedad, crean ciudadanía y cómo les reclama la madre de familia de los niños que están bien formados a la madre que está batallando con su hijo por novena ocasión.

Cómo es que los derechos humanos nos empiezan también a revolver y a enredar en la sociedad, hay que tener mucho cuidado con la convocatoria que hacemos de los derechos humanos y de las libertades que tenemos, no creo que alguien, algún diputado vaya a venir

aquí en contra de la libre manifestación, no creo que ese sea el tema, sino los motivos que llevan a la manifestación, y ahí es donde está la razón o no de quienes decidieron irse a la manifestación, que antecede un diálogo profundo, porque si no entonces a nosotros, a los que estamos sindicalizados, a los que tenemos una relación obrero-patronal, a los que creemos en la libre manifestación, a los que creemos en el derecho de huelga, pues nos van a pervertir un término tan hermoso de una actitud y derecho que es la libre manifestación con razones, no sin razones.

Y me parece que aquí hay mucho mas de *felling* político, de aprovechamiento de un escenario, que ojalá no nos lleve insisto a un derrotero equivocado y a dificultades aquí en el Pleno, la razón la vamos a tener en los próximos días y es muy interesante saberla, porque hay que socializarla ante el público que nos escucha, para poder ir realmente definiendo si hay simplemente una estrategia electoral o hay simplemente una manifestación social que no entendió la fuerza policial, no la entendió porque ha sido claro ni coaligado en su posicionamiento, porque si no la entendió pues simplemente va a ser la justicia la que le dé su derecho y su posición y su estatus, pero si también nos equivocamos en las estrategias entonces lo que vamos a hacer es polarizar a la ciudadanía sonorenses.

Yo y como Nueva Alianza, como Grupo Parlamentario de Nueva Alianza rescato el derecho a la manifestación, el derecho a huelga lo rescato, lo cuido, lo protejo, pero jamás tampoco me vendría aquí, y vaya que lo hicimos cuando los maestros defendimos a lo maestros, jamás la hemos utilizado mal, además en mi vida he tenido que llegar a la manifestación porque siempre en el diálogo he encontrado la solución a los conflictos, siempre, la manifestación siempre convoca a otras cosas, ojalá y sea este un punto de encuentro y no de quiebre”.

La última intervención en este punto, fue en la voz del diputado Acuña Arredondo, quien respecto de los posicionamientos presentados, rescata dos cosas con las que tiene coincidencias como diputados, y dijo que él no toma la palabra para polarizar el tema, porque es incorrecto. En ese tenor, agregó que es inadmisibles el exceso de la fuerza pública en una manifestación ciudadana, y en esto coincide esta Asamblea; ni tampoco están de acuerdo que en las últimas tres décadas en Sonora, el servicio público urbano, sub urbano y el rural no ha sido digno, y en esto deben trabajar, pues no ha sido un buen servicio para los ciudadanos, siendo un problema de fondo, por lo que deben trabajar en mejores políticas públicas en el transporte, porque a la gente de Sonora le urge un transporte público digno en todo el Estado.

En cumplimiento al punto 10 de la orden del día, el diputado Lam Angulo dio lectura a su posicionamiento, donde reconoce el esfuerzo de las mujeres

sonorenses, respecto a las labores de propuestas e integración del Instituto Sonorense de la Mujer, el cual dice textualmente:

“En Sonora, el acceso a los Derechos de Igualdad entre Mujeres y Hombres, no ha sido nada fácil, sino hubiese existido acciones de demandas legítimas manifestadas por décadas, mediante distintas voces de Organizaciones, Asociaciones o Colectivos de Mujeres, basados en tratados Internacionales, así como en derechos constitucionales y humanos, los cuales, se han hecho realidad en las Leyes Sonorenses, en temas, como: violencia de todo tipo que vulnera el desarrollo de las Mujeres y sus Hijos; Madres Jefas de Familia; Delito de Femicidio; Igualdad en candidaturas para elección popular, entre otros derechos.

La Iniciativa de Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres de fecha del 16 de Marzo de este año, que presento la C. Gobernadora del Estado Lic. Claudia Pavlovich, ante esta Soberanía, y desde luego también con la suma de propuestas de observaciones del contenido de tan importante creación de un Instituto con patrimonio y personalidad jurídica propia respectivamente, es un real avance hacia la atención con verdaderas políticas públicas para beneficio de las Mujeres Sonorenses.

La competencia constitucional de legislar, es para generar beneficios, en este caso hacia la Población de Mujeres Sonorenses, que día a día, libran batallas, para subsistir ante adversidades de la vida, y junto con ello los derechos que tanto en la Ley o en la aplicación de la misma, no las alcanza a cubrir.

Las instancias de representatividad públicas de organismos gubernamentales, tanto ejecutivas, judiciales, legislativas y de los ayuntamientos, debemos seguir coordinadamente la aplicación de los Derechos de las Mujeres en nuestro Estado, cada quien de acuerdo a los alcances y competencias respectivas, sin dejar la convicción firme, de servir.

Es de reconocerse esta valiosa aportación legislativa para ampliar y aplicar los derechos que por décadas no están claramente plasmados en la Ley que próximamente este Pleno de la Asamblea analizaremos y aprobaremos”.

Finalizada su lectura, reconoció también a estos colectivos, a mujeres que de manera cotidiana han estado muy pendientes de que se avance en el tema de equidad en Sonora; y lo que sigue es hacer letra viva esta ley aprobada desde el 2008, la Ley de Protección a Jefas Madres de Familia, para honrar el trabajo de todas estas mujeres que pertenecen a los organismos señalados, y pidió un aplauso para ellas, que colaboran día a día, para que se enriquezca la ley y el trato hacia las mujeres en Sonora.

En cumplimiento al punto 11 de la orden del día, el diputado Fu Salcido dio lectura al informe presentado por los diputados que asistieron a diversas reuniones con legisladores de Arizona, en días pasados, el cual dice textualmente:

“Muy contentos de haber regresado de la reunión en la Ciudad de Phoenix, Arizona, con el Congreso de Arizona, en donde nos recibieron muy bien y la verdad antes de pasar a la lectura quiero decirles que ha sido un ejercicio muy interesante, histórico en donde la importancia que tiene este se suscribe a la buena intención que hay de parte del Gobierno de Arizona, de parte de los legisladores y de parte nuestra también por crear una agenda propia alejada de Washington y alejada de México, D.F.

Yo creo que como región vamos a poder avanzar mucho más, somos los que vivimos y conocemos los temas importantes de la región y sabemos que la colaboración entre nosotros es lo único que nos va a sacar adelante, como región podemos competir a nivel internacional, podemos trabajar en lo particular en una agenda que nos lleve a aprovechar las ventajas competitivas que tenemos, como lo he dicho siempre y lo repito, convertir nuestras ventajas competitivas estáticas en ventajas competitivas dinámicas, y lo platicamos ahí y lo aceptaron y lo aceptaron muy bien.

Decirles que el déficit que tiene Estados Unidos con México, pues hay que hablarlo como es, la mayor parte de las empresas de México que están exportando a Estados Unidos son norteamericanas, entonces más que un mal les hacemos un bien al volverlos competitivos, y al platicar con los legisladores de Arizona aceptan esta situación y lo ven como una ventaja competitiva el estar en esta región, hablamos de muchos temas pero paso a la lectura para que tengan ustedes conocimiento y poderles compartir ya en detalle lo que hicimos, pero les anticipo el buen resultado, el buen diálogo y sobre todo también reconocer el trabajo de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano con el gobernador Ducey, un trabajo muy importante, un esfuerzo que están haciendo los dos para que esto se dé, yo creo que lo que hay que reconocer hay que hacerlo de frente y sobre todo por el bien de los ciudadanos.

Comercio.

Históricamente, las relaciones comerciales entre Sonora y Arizona han sido sólidas, constantes y beneficiosas para ambos estados.

Los intercambios de productos y servicios entre nuestros estados han alcanzado niveles récord en los últimos años y para muestra un botón: en 2015 se produjeron exportaciones de Arizona a México por USD \$8,622,985,765 e importaciones de Arizona desde México por USD \$7,304,609,761.

Por ello, los integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos de este Congreso Estatal no dudamos en atender la invitación formulada por legisladores locales de Arizona para llevar a cabo reuniones de trabajo en la sede del Poder Legislativo de dicha entidad tendientes, entre otras cosas, a implementar estrategias para el fortalecimiento de nuestros lazos comerciales.

Desde nuestro arribo a Phoenix, no recibimos más que buenas atenciones de parte de nuestros anfitriones.

En todo momento nos hicieron ver lo mucho que Arizona valora a Sonora y su intención de mantenerlo como aliado comercial permanente a pesar de las dificultades por las que atraviesa la relación binacional entre Estados Unidos y México.

Se concluye, como resultado de los diálogos y reuniones de trabajo que sostuvimos, que los legisladores de Arizona tienen una preocupación por el impacto que está causando la posibilidad de la construcción de un muro que divida a nuestros países, y los percibimos con la clara intención de excluir a Sonora y Arizona de esta problemática y buscar que, en vez de alejarnos, nos acerquemos a través de estrategias de trabajo conjunto en los diversos niveles de Gobierno, por ello impulsaron este Primer Encuentro de Legisladores Fronterizos que tuvo buenos resultados y un entendimiento claro de lo que debemos hacer para cuidar la frontera común.

Como resultado de los trabajos interparlamentarios, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Arizona proveerá orientación y fondos para organizaciones con fines no lucrativos orientadas a otorgar créditos para el desarrollo de negocios en la megaregión, siendo el criterio para el otorgamiento de dicha proveeduría: a) los esfuerzos generales de las organizaciones, b) el éxito de las organizaciones en la implementación de sus programas, c) incluir a organizaciones con objetivos similares a las de Arizona y d) establecer el liderazgo de una organización que asesore a las demás.

El objetivo es ayudar a emprendedores y empresas de nueva creación, así como el desarrollo binacional de negocios.

2. En un esfuerzo por atraer capital, promover inversiones y negocios en Arizona y Sonora, para lo cual ambos parlamentos se asociarán con fundaciones orientadas al desarrollo de proyectos binacionales. Los gobiernos de ambas entidades apoyarán organizaciones como CPLC (Chicanos por la Causa).
3. Apoyar el acuerdo CPLC con la UNAM y promover acuerdos similares con Universidades Sonorenses para beneficiar la región Sonora – Arizona.
4. Apoyar a CPLC en el proceso para que pueda constituirse como una empresa inversionista de pequeños negocios en los Estados Unidos, el cual habrá de concluir en 2017. Con la ayuda del Congreso de Arizona, los fondos aportados por CPLC podrán ser igualados por el Gobierno de Arizona en proyectos para la megaregión.
5. Ayudar en la preparación de nuestros jóvenes estudiantes sonorenses, para que obtengan educación y capacitación en áreas de tecnología y de desarrollo de códigos

dentro del campo de la alta tecnología, a efecto de mejorar el posicionamiento de Sonora en tales áreas.

6. Integrar un Sub-Comité en la Legislatura de Arizona con miembros del Congreso Sonorense para determinar puntos estratégicos que la región puede presentar y/o discutir frente a las eminentes renegociaciones del TLCAN. La manera en que las propuestas deberán realizarse deberán incluir los puntos de vista de ambos estados. Los temas a tratar serán seguridad virtual y tecnología, pasos para obtener la legal residencia, modernizar los procedimientos de visas y como detener las actividades ilegales y el tráfico en la frontera.
7. Definir los programas que las legislaturas de Sonora y Arizona pueden implementar para ayudar a los empleados a convertirse en emprendedores.
8. Iniciar negociaciones para el mejoramiento de la descarga de aguas residuales desde Nogales, México hacia Nogales, Arizona.
9. Desarrollar el Parque Tecnológico de la Universidad de Sonora en colaboración con la iniciativa privada.
10. Que México y Estados Unidos trabajen conjuntamente para el aumento de la productividad y el fortalecimiento de la competitividad de la megaregión.

Como podrán apreciar, nos espera un arduo trabajo para honrar los acuerdos adoptados con nuestros pares del hermano Estado de Arizona.

No obstante, debemos cumplirlos, por el bien de Sonora, por el bien de Arizona, por el bien de la megaregión.

Construyamos puentes en donde otros pretenden construir muros.

Promocionemos la unión y no el enfrentamiento entre estados fronterizos”.

Finalizada su lectura, agregó:

“Fueron muchos los resultados del trabajo, sería mucho tiempo enumerarlos todos, pero decirles que hay muchas organizaciones como *“Chicanos por la causa”*, que está colaborando para generar empleos y generar empresas en nuestra región y sería muy interesante que pudiésemos nosotros acceder a financiamientos menores al 5%.

Imagínense lo bueno que sería eso para nuestras empresas, también el poder vincular de alguna manera las fortalezas que tenemos y preparar más a nuestros jóvenes en el tema de educación; platicamos ahí de cambiar la mentalidad que también lo ha dicho y le reconozco también al diputado Guillen que lo comentó, el poder lograr crear esa clase empresarial industrial, lo digo yo, pero empresarial en general en donde le cambiemos la mentalidad a nuestros estudiantes y no preparemos solamente empleados sino que preparemos empresarios.

Yo creo que esa visión si lo hacemos de una manera estratégica entre los dos Estados nos dará muchos frutos, como estos son un sinnúmero de números y de ventajas que hicimos pero lo más importante aquí, lo platicaba con los coordinadores, es poder crear un sub comité que en un momento determinado lo vamos a plantear en el marco de la Comisión de Asuntos Fronterizos y en colaboración con economía también y los participantes que fueron los de educación, en donde podamos transitar en lo particular en temas que nos lleven a lograr un avance tangible a la brevedad.

Yo creo que son muchos los temas, se vale soñar como lo dijimos, iniciamos una plática de imagina donde podemos llegar con esta relación, pero si tenemos que lograr establecer esa visión compartida a largo plazo en donde nos permita ver un escenario sin barreras, en donde nuestros estudiantes tengan la ventaja de poder ir a estudiar, en donde se eleve el nivel de inglés, tanto el inglés aquí en Sonora, como el español en Arizona, en donde los Congresos podamos crear ese marco jurídico que se empate en muchas leyes y no exista ese choque cultural y legislativo que tenemos.

Yo creo que más allá de dos países tenemos que pugnar por el desarrollo regional que nos haga competir en el contexto mundial, estamos trabajando en eso, tuvimos muy buenos resultados, les anticipo que está muy lejos de la sensación que se tiene a nivel nacional, la sensación que existe en Arizona para con los sonorenses, es una muy buena relación, fue un muy buen evento y creo que esto es el principio de algo muy grande y reconocer de nuevo a la gobernadora y al gobernador Ducey por el trabajo que han estado haciendo y que ya era hora, porque yo lo comenté que el Legislativo también interviniera en este tipo de reuniones para crear esos marcos jurídicos correspondientes”.

En ese tenor, la diputada Hernández Barajas dijo:

“Comentarles, yo quiero felicitar a los compañeros que fuimos de la Comisión de Asuntos Fronterizos, a Carlos Fu, a David Palafox, a Rodrigo Acuña que estuvo conmigo compartiendo la mesa de educación, a Omar Guillén, a "pano" Salido, a Luis Gerardo Serrato y al diputado Armando Gutiérrez, nosotros fuimos representando prácticamente a toda la Legislatura, esa fue nuestra función, nuestra camiseta fue para defender los temas que estábamos haciendo los legisladores aquí junto con ellos, ¿porque? porque se tiene a veces una impresión de que nosotros no estamos legislando en función de lo que les convenga a nuestros connacionales.

Si lo estamos haciendo y la prueba de eso fue que desde el pasado 31 que nosotros estuvimos ahí integrados, en la Casa de los Representantes, así se le llama al Congreso ahí a ellos, pero un día anterior en un encuentro informal se dieron los mecanismos de cómo íbamos a trabajar las Comisiones.

De manera personal yo les comento, creíamos que íbamos a unas mesas de trabajo, sencillos, nada más a comentar algunos temas, se le dio una formalidad realmente histórica a esto, nosotros asistimos al Pleno prácticamente, nos fuimos a Comisiones, lo que nosotros hacemos aquí y tuvimos la palabra completa y ahí nos favoreció porque ya íbamos nosotros preparados en que temas íbamos a empatar con ellos para poder hacer nuestro trabajo legislativo bien.

Coincidimos en que son muchos y muy antiguos los lazos que nos unen, y que los gobiernos son pasajeros y que aunque nos pudieran distanciar, algunas de las políticas que manejan ellos pues es difícil, porque la gente está defendiendo más el corazón que un dato estadístico, eso fue algo muy importante, nos dejaron en claro que la clase política de Arizona, visualiza a Sonora como un aliado indispensable para su desarrollo y bienestar económico, en pocas palabras si les convenimos y eso es evidente.

También nos expresaron reiteradamente que la voluntad de sus líderes es la de continuar colaborando con nuestro Estado en cuestiones educativas y culturales, en la mesa que asistimos Rodrigo Acuña y yo hicimos algunas propuestas en el tema educativo que favorecieran obviamente a nuestros estudiantes que se van para allá, que se puedan extender las becas, que se pudieran facilitar los trámites al cruzar la zona fronteriza, que la documentación de nuestros niños que son deportados fueran aseguradas, que eso es un problema que tenemos, que los ingresamos a las escuelas y no tenemos documentos.

Entonces ahí se le pidió a la senadora tener un enlace que fue una de las propuestas que hizo el diputado Rodrigo, y pues yo pedí que se extendieran los programas reticulares a los que ya existen, porque ellos comentaron que no es atractivo México para los estudiantes de ellos para venirse a estudiar, entonces le digo: *“bueno es que no es atractivo porque no lo hemos hecho a la mejor atractivo, a la retícula académica nosotros tenemos que integrarle programas extracurriculares para hacerlo atractivo”*. ¿Como cuáles? como el visitar a nuestras comunidades indígenas, tenemos una riqueza en gastronomía, tenemos una riqueza en turismo, tenemos una riqueza en artesanía, porque no agregar a la retícula que ya tienen ellos originalmente en su programa técnico, en su programa académico, pues métele eso para que lo hagas atractivo, entonces les gustó y lo agregaron.

Entre otras cosas también pidieron ellos mejores oportunidades para primaria y secundaria, no era nada más para universitarios, irnos a la primaria, irnos a la secundaria también para poder lograr algunos intercambios ahí con nuestros estudiantes y que se optimice el sistema educativo para ellos, generar mayores oportunidades para los estudiantes que participan en programas de intercambio, las becas se consideran por parte de ellos que son limitadas por parte de nuestro gobierno y que no hay muchas oportunidades para muchos estudiantes para ir, entonces el compromiso fue favorecer ahí los presupuestos para las becas para estos jóvenes, también proveer opciones a nuestros maestros.

Aquí viene un tema bien importante, hablamos de intercambios académicos entre estudiantes, ¿porque no hacer intercambios académicos entre maestros? que los maestros también se vayan a una beca y los maestros de ellos que puedan venirse acá, nosotros enseñarles español y ellos que nos enseñen inglés, y nos pareció muy buena también, se compartió información, ideas de los estudiantes de preparatoria para que cursen diplomados o programas avanzados para favorecer las instituciones de beneficencia tanto en Arizona como en Sonora, algo así como un tipo servicio social, que también podamos nosotros apoyarnos en ese tema, crear becas y programas de financiamiento que permitan que participen nuestros estudiantes en programas avanzados, que les favorezcan a los dos Estados.

También se pidió que se creara un programa de enseñanza de inglés centralizado, que provea herramientas en línea para ayudar a nuestros maestros de dicho idioma y para favorecer y mejorar la comunicación en ambos lados de la frontera, nos piden un programa en línea en la enseñanza del idioma y que esos maestros estén conectados con ellos para que puedan ellos tener comunicación y se nos hizo también muy interesante, promover eventos culturales binacionales y proveer las oportunidades para Arizona y Sonora, crear y mejorar organizaciones conjuntas y consorcios para incrementar la movilidad y los intercambios en ambos lados.

Aquí yo quiero resaltar y felicitar al expositor que fue por parte de educación, enviado aquí por el gobierno del Estado, el licenciado Sergio López, la verdad que muy profesional en su exposición, en lo que estamos haciendo nosotros aquí en los temas académicos y que fue tan explícito que hasta la misma senadora y los diputados le pidieron toda esa información que desconocían, incluso yo también la desconocía; también se acordó combinar esfuerzos para implementar futuros programas tanto en Arizona como en Sonora, que permitan a nuestros estudiantes recibir reconocimientos en sus países a la conclusión de los mismos, no hay equivalencia de estudios, cuando un estudiante se viene a estudiar acá, es una situación burocrática para que se les haga la revalidaciones de estudios, igual los de aquí que se vayan para atrás porque no están empatados los grados y los niveles, entonces ahí también se refirió a eso.

A final de cuentas los compromisos que adoptamos nosotros de la Comisión pues obviamente es para trabajar, para que alcancemos los objetivos con la ayuda de los diferentes poderes y niveles de gobierno, lo reitero nuevamente la representación que nosotros hicimos aunque era de la Comisión de Asuntos Fronterizos, nosotros fuimos representando una Legislatura y es por eso que nosotros les pedimos el compromiso también a ustedes para que nos apoyen en esto, y obviamente por el bien de nuestra región, queremos impulsar, nos quedó claro para ambos Estados que queremos impulsar una educación bilingüe y bicultural, que nos pueda permitir aprovechar las ventajas competitivas que nuestra geografía nos proporciona.

Siempre decimos Sonora es rico en esto, Sonora tiene todo, sí lo sabemos, ahora necesitamos hacer acuerdos, necesitamos hacer convenios y consorcios con ellos para demostrar que lo somos y aun así ser más atractivos; hemos dado un paso importante para la consolidación de las relaciones entre los poderes locales legislativos de Sonora y Arizona en una época en la que más se necesita, en la que se viven momentos de adversidad y de incertidumbre respecto del curso que habrán de tomar las relaciones binacionales, y aquí

me estoy refiriendo a los presidentes de la República de ambos países, las políticas de Washington y de la Ciudad de México podrán no coincidir, pero las de Arizona y Sonora siempre habrán de hacerlo porque los vínculos que nos unen son demasiado fuertes”.

El diputado Acuña Arredondo dijo:

“En el tema de turismo como hace muchos años los sonorenses visitamos el Estado de Arizona con fines recreativos, y lo mismo hacen los ciudadanos de Arizona para visitar al Estado de Sonora, esa actividad representa por supuesto y es muy importante, como fuente de ingresos para ambos Estados Fronterizos, de acuerdo con datos de investigación del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad de Arizona, en 2016 se registraron 22.6 millones de visitantes de mexicanos a Arizona, de los cuales el 98% de esos visitantes son sonorenses.

Estas visitas generaron a favor del comercio de Arizona un gasto casi de 3 mil millones de dólares, de lo cual dependen también alrededor de 30 mil trabajadores en ese Estado de Arizona, entonces para ellos si tiene mucha importancia que nosotros visitemos su Estado, desde el punto de vista turístico-comercial.

En 2016 la Universidad de Arizona estimó que ampliar la zona fronteriza a todo el Estado de Arizona para facilitar el ingreso de los mexicanos a ciudades como Phoenix, elevaría en 181 millones de dólares el gasto de los mexicanos en Arizona, y con ello se podría generar alrededor de 2179 nuevos empleos para ellos mismos, entonces sí es muy importante ese intercambio comercial-turístico de los mexicanos en Arizona, no obstante el panorama para el 2017 no parece tan favorecedor dada la fluctuación del peso mexicano frente al dólar norteamericano.

De nuestra parte, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, en 2015 arribaron a Sonora 2.4 millones de turistas, de los cuales 115,370 eran de origen extranjero, es decir solamente un 5% de extranjeros nos visitaron en 2015 en Sonora, en contraste en el 2013 llegaron al Estado 2.3 millones de turistas, pero 176 692 eran extranjeros, es decir el 8% del total, de esta forma el arribo de turistas extranjeros a Sonora cayó en un 35% del 2013 al 2015, pero en particular el arribo de turistas extranjeros se desplomó en un 82% en Guaymas y San Carlos, y un 29% Hermosillo y un 33% en el resto de los municipios del Estado.

Debemos revertir dicha tendencia, debemos encontrar el origen y trabajar conjuntamente con los diferentes poderes y niveles de gobierno para su superación, por ello los integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Congreso del Estado, como bien dice Sandra, decidimos hacer efectiva la invitación que nos fue formulada por los legisladores de Arizona para explorar posibles acciones encaminadas a mejorar el turismo entre ambos Estados y lógicamente se vieron temas de educación y se vieron temas de comercio.

Así el 31 del mes pasado acudimos a la sede del Poder Legislativo de Arizona para sostener reuniones de trabajo en las que participaron no solo legisladores de ambos Estados, sino también expertos en turismo y catedráticos de las Universidades de Arizona y Sonora, en

las que se expuso la situación actual y en las diferentes áreas de oportunidad, los norteamericanos son conscientes de la importancia del turismo mexicano, particularmente del turismo de compras, también se encuentran ávidos de conocer las diferentes opciones turísticas de Sonora, que presentan una infraestructura importante como lo son Puerto Peñasco, San Carlos y Álamos, como resultado del encuentro los legisladores participantes adoptamos los siguientes acuerdos en el tema de turismo:

- 1.- Incrementar la promoción de Arizona en las diferentes opciones turísticas de Sonora, o sea promover más en Arizona lo que nosotros tenemos como opción turística en Sonora.
- 2.- Analizar con el Ejecutivo Estatal la posibilidad de extender en programa *Only Sonora* a todo el Estado para facilitar el turismo norteamericano más allá de Guaymas, algo que nosotros hemos estado comentando acá, pero algo que también ellos desean.
- 3.- Exhortar a las autoridades federales de ambas naciones para implementar programas de facilidades en el cruce fronterizo para residentes de Sonora y Arizona.
- 4.- Favorecer nuevos tipos de turismo como podrían ser la ruta del Bacanora, y como puede ser el turismo agropecuario, que es el turismo rural y el turismo cinegético que creció mucho en la primera década del siglo XXI, pero que se ha reducido mucho por el tema de inseguridad en esta última década.

Compañeros diputados en ese sentido nosotros los convocamos a que trabajemos en alcanzar los acuerdos adoptados con nuestros pares de Sonora, aprovechemos las bondades que nuestra geografía sonorenses brinda para el Estado de Arizona y fortalezcamos esos lazos en el tema de turismo y fortalezcamos el turismo estatal para la generación de oportunidades y empleos en beneficio de sonorenses, en beneficio de las actividades productivas, y en beneficio del desarrollo de los sonorenses”.

Seguidamente, el diputado Guillén Partida felicitó a la Comisión por sus trabajos en el Estado de Arizona, e informó a la mesa directiva de la importancia de estas reuniones entre Sonora y Arizona, estados con una derrama económica de 16 billones de dólares, que fortalece la relación en esta mega región que viene impulsando la gobernadora Claudia Pavlovich; 16 billones de dólares anuales, en ese famoso turismo de compras que comentó el diputado Acuña Arredondo se generan 7 mil millones de dólares al año, y ellos tienen una pérdida ya evaluada de cerca de 3 mil millones de dólares. En ese tenor, agregó que vieron una gran preocupación por parte de los congresistas de Arizona y una gran determinación para llegar a acuerdos con Sonora, porque uno de los principales temas que ellos pusieron sobre la mesa, es el tema de la seguridad en la frontera; ellos hablaron del tráfico de droga y esta Comisión habló del tráfico de armas llegando a la

conclusión que deben revisar en las mesas de trabajo cómo generar mayor seguridad, y están seguros que pueden ponerse de acuerdo, que no debe existir un muro, o que no deben hacer declaraciones incendiarias para que dos pueblos lleguen a un diálogo y puedan trabajar en fortalecer sus economías, y la fortaleza que se tiene con los estudiantes y con los empresarios. Finalizó diciendo que fue una gran reunión, y están listos para la siguiente en octubre, la cual propusieron fuese aquí en Hermosillo.

La última intervención en este punto, fue en la voz del diputado Gutiérrez Jiménez, quien dijo:

“Primero yo quiero agradecer a todos los compañeros que tuvieron a bien asistir al evento allá en Phoenix, yo creo que dejamos bien en claro que somos dos países vecinos, dos Estados vecinos en el cual debemos estrechar esa relación que hemos tenido durante muchísimos años y que no sean los muros los que nos dividan, sino la relación que tenemos, porque ahí algunos de los congresistas de Estados Unidos hacían mención exactamente de lo que era Phoenix y sus alrededores, cómo fue poco a poco creciendo y ellos mencionaban mucho que la relación originaria de ellos es de mexicanos.

Yo creo que eso es lo que debemos resaltar, que debe unirnos, pero yo creo que después de haber asistido allá y ver nuestro sistema de carreteras, hay una enorme diferencia, yo creo que tenemos que hacer algo mucho más nosotros aquí en nuestro Sonora para que tengamos un lugar de acceso digno, si bien es cierto yo hacía mención y se los mencionaba ahí a ellos, que probablemente hay congresistas y diputados muy jóvenes, yo les hacía mención como antes se hacían grandes filas, vamos a hablar en este tiempo en el *spring break*, pero en los meses de noviembre, diciembre, enero, como venían los pájaros de la nieve a gastar sus recursos en sus estancias de cuando allá es invierno, como se venían a la primavera aquí a nuestro Estado.

Hoy vemos con tristeza como día tras días son menos los que vienen, y esto hago mención porque creo que el día de hoy o el día de ayer falleció en San Carlos, Nuevo Guaymas, un nogalense que fue el impulsor de ese centro recreativo que es Nuevo Guaymas San Carlos, el señor Rafael Caballero, un pionero precisamente de mi región que vino a hacer ese negocio acá. Yo quiero felicitarlos a todos porque en la exposición de motivos fue muy importante y quiero muy en especial a mi compañero diputado Carlos Fu, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos que hayamos tenido esa relación, de veras son más las coincidencias que nos unen que las diferencias, y bien lo dijeron ellos mismos, que fueron más enfáticos, les interesan nuestros paisanos ciudadanos al abrir el Estado de Arizona para que vayamos a gastar nuestros recursos, decía, ah caray si en otros lugares nos consideran como un país tercermundista, ¿porque nos quieren tanto en Arizona? por la derrama económica que ya mencionaban otros compañeros anteriormente, de veras los felicito a todos y ojalá esto sea una plática para que ellos vayan y le digan a su presidente de su nación que no necesitamos muros, que necesitamos puentes entre los dos países y entre los dos Estados”.

Y sin que hubiere más asuntos por desahogar, la presidencia clausuró la sesión a las catorce horas con cincuenta y siete minutos, y citó a una próxima a desarrollarse el día martes, cuatro de abril de dos mil diecisiete, a las once horas.

Se hace constar en la presente Acta, la no asistencia de la diputada Jaime Montoya Brenda Elizabeth, con justificación de la Mesa Directiva.

DIP. LINA ACOSTA CID
PRESIDENTE

DIP. IRIS FERNANDA SANCHEZ CHIU
SECRETARIA

DIP. TERESA MARIA OLIVARES OCHOA
SECRETARIA

-LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL DÍA 4 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las diez horas con veintiocho minutos del día cuatro de abril de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos del Congreso del Estado de Sonora, los ciudadanos diputados Acosta Cid Lina, Acuña Arredondo Rodrigo, Ayala Robles Linares Flor, Buelna Clark Rafael, Castillo Godínez José Luis, Dagnino Escobosa Javier, Díaz Brown Ojeda Karmen Aída, Díaz Nieblas Ramón Antonio, Fu Salcido Carlos Manuel, Gomez Reyna Moisés, Guillén Partida Omar Alberto, Gutiérrez Jiménez José Armando, Gutiérrez Mazón María Cristina Margarita, Hernández Barajas Sandra Mercedes, Lam Angulo Juan José, Lara Moreno Rosario Carolina, León García Carlos Alberto, López Cárdenas Célida Teresa, López Godínez Lisette, Márquez Cázares Jorge Luis, Ochoa Bazúa Emeterio, Olivares Ochoa Teresa María, Palafox Celaya David Homero, Payán García Angélica María, Rochín López José Ángel, Salido Pavlovich Jesús Epifanio, Sánchez Chiu Iris Fernanda, Serrato Castell Luis Gerardo, Trujillo Fuentes Fermín, Valdés Avilés Ana María Luisa, Villarreal Gámez Javier y Villegas Rodríguez Manuel; existiendo quórum legal, la presidencia declaró abierta la sesión.

Posteriormente, solicitó al diputado Trujillo Fuentes, secretario, diera lectura a la orden del día; y puesta a consideración de la Asamblea, fue aprobada, por unanimidad, en votación económica.

Seguidamente, informó de la correspondencia:

Escrito del Secretario General del Congreso del Estado de Nayarit, por medio del cual remite a este Poder Legislativo, Acuerdo por el que se emite un respetuoso exhorto a las legislaturas de las entidades federativas que aún no lo hayan

hecho, para que establezcan en sus respectivos marcos jurídicos locales, disposiciones tendientes a impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con trastornos generalizados del desarrollo. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se remite a la Comisión Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad”.

Escrito de la Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por medio del cual acusan recibo del exhorto de este Poder Legislativo, para que, en ejercicio de sus facultades y responsabilidades constitucionales, auspicien el Dialogo Social entre los diferentes sectores de México, para profundizar en el diagnóstico de los problemas políticos, económicos y sociales causantes del malestar social, identificar en que se avanza o retrocede, crear opciones a corto, mediano y largo plazos y culminar en la construcción de un Gran Acuerdo Nacional capaz de reencausar el rumbo del país, con la participación del Estado Mexicano, los trabajadores y empresarios, investigadores, académicos, Partidos Políticos y sociedad en General; sobre el cual informa que dicho asunto se remitió a la Comisión de Junta de Coordinación Política, para su conocimiento. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se acumula al expediente del acuerdo 300, aprobado por este Poder Legislativo, el día 21 de marzo de 2017”.

Escrito del Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, por medio del cual remiten a este Poder Legislativo, el Acuerdo por el que envían una iniciativa a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo sexto al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; exhortando a esta Soberanía, así como al resto de los Congresos Estatales y al de la Ciudad de México, para que, de considerarlo, se adhieran a dicha propuesta. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se remite a la Comisión del Agua”.

Escrito del Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, por medio del cual da respuesta a este Poder Legislativo, en relación al exhorto para que se analice la viabilidad de eliminar el cobro por la revalidación de

placas para este ejercicio fiscal 2017, como una medida de racionalidad para apoyar a la economía de los sonorenses. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se acumula al expediente del acuerdo 286, aprobado por este Poder Legislativo, el día 02 de marzo de 2017”.

Escrito del diputado Juan José Lam Angulo, con proyecto de Ley que adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Sonora, en materia indígena. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales”.

En cumplimiento al punto 4 de la orden del día, el diputado Márquez Cázares dio lectura a la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, y de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, resolviendo la presidencia turnarla para su estudio y dictamen, a las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y Gobernación y Puntos Constitucionales, en forma unida.

En cumplimiento al punto 5 de la orden del día, el diputado Gutiérrez Jiménez hizo una remembranza del señor Rafael Caballero Corral, originario del Estado de Chihuahua, quien llegó a Nogales a principios de los años 60's, donde funda las colonias Chula Vista y Lomas de Fátima; a inicios de los 70's se trasladó a Guaymas donde aportó lo propio para construir San Carlos Nuevo Guaymas, y fue nogalense por adopción, con una gran visión empresarial. Seguidamente, solicitó autorización para proyectar un video relacionado con su iniciativa, con punto de: “**ACUERDO: ÚNICO.-** El Congreso del Estado de Sonora, resuelve exhortar a la titular del Ejecutivo Estatal para que, en el ejercicio de sus atribuciones, instruya al Director General del Transporte del Estado, para que gestione el cambio, ampliación y modernización de la flotilla de camiones del transporte público para el municipio de Nogales, para atender la problemática de servicio a los usuarios de dicha ciudad de Sonora”.

Finalizada la lectura, la presidencia puso a consideración de la Asamblea la solicitud para declarar el asunto con el carácter de urgente y obvia resolución, y la dispensa al trámite de Comisión, y fue aprobado por unanimidad, en votación económica. Siguiendo el protocolo, puso a discusión el Acuerdo en lo general, y en lo particular; sin que se presentare objeción alguna, fue aprobado por unanimidad, en votación económica, dictándose el trámite de: “Aprobado el Acuerdo, y comuníquese”.

En cumplimiento al punto 6 de la orden del día, el diputado Rochín López dio lectura a su iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un artículo 113 Bis a la Ley de Salud para el Estado de Sonora, resolviendo la presidencia turnarla para su estudio y dictamen, a la Comisión de Salud.

En cumplimiento al punto 7 de la orden del día, la diputada Payán García dijo que este día es muy importante para las mujeres del Estado, pues después de un arduo trabajo donde se ponderó el diálogo constructivo, hoy se cristaliza el esfuerzo del colectivo de mujeres, el esfuerzo de la Red Feminista Sonorense, el esfuerzo de la directora del Instituto Sonorense de la Mujer, el acompañamiento del secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, y el de esta Sexagésima Primera Legislatura; y hoy presentan ante el Pleno la:

“LEY

DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y de observancia general en todo el Estado de Sonora, en materia de igualdad sustantiva y no discriminación entre mujeres y hombres en los términos previstos en los artículos 1° y 4°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de Sonora.

ARTÍCULO 2.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley todas las mujeres que se encuentren en el territorio del Estado de Sonora, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, sin importar origen étnico, edad, estado civil, idioma, cultura, condición social, discapacidad, religión o dogma y orientación sexual, quienes podrán

participar en los programas, servicios y acciones que se prevén en el presente ordenamiento.

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I.- Acciones Afirmativas: Las medidas especiales de carácter temporal, correctivo, complementario y de promoción encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, aplicables en tanto subsista la desigualdad del trato;

II.- Agenda de Mujeres: El plan propositivo que sugiere acciones inmediatas y que contiene los temas de las mujeres sobre los que es necesario generar políticas públicas, teniendo como marco de referencia los instrumentos internacionales;

III.- Consejo Consultivo: El Consejo Consultivo del Instituto Sonorense de las Mujeres;

IV.- Consejo Social: El Consejo Social del Instituto Sonorense de las Mujeres;

V.- Coordinadora Ejecutiva: La Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres;

VI.- Igualdad Sustantiva: El concepto referido al principio conforme al que mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida: económico, social, cultural, familiar y político;

VII.- Género: El concepto que refiere a las características, relaciones y comportamientos sociales de las mujeres y hombres en la sociedad; su origen y su evolución, destacando la existencia real del género femenino y masculino, sin dominio en uno sobre el otro, sin jerarquías y sin desigualdades;

VIII.- Junta de Gobierno: El órgano de gobierno del Instituto Sonorense de las Mujeres; y

IX.- Perspectiva de Género: El concepto que se refiere a la metodología y mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de igualdad sustantiva.

ARTÍCULO 4.- El Instituto Sonorense de las Mujeres aplicará, en la formulación y conducción de las políticas públicas en materia de igualdad sustantiva, los siguientes principios y criterios:

I.- Transversalidad en las políticas públicas, con perspectiva de género en las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a partir de la ejecución de los programas y acciones coordinadas en conjunto en el Estado y los municipios; y

II.- Fortalecimiento de vínculo con los poderes Legislativo y Judicial tanto federal como estatal, así como con los municipios del estado.

CAPÍTULO II DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

ARTÍCULO 5.- Se crea el Instituto Sonorense de las Mujeres como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Gobierno, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de su objeto.

El domicilio legal del Instituto Sonorense de las Mujeres será la ciudad de Hermosillo, Sonora, sin perjuicio de que pueda establecer oficinas en cualquier parte del Estado, las que deberán preverse en el Reglamento Interior del Instituto Sonorense de las Mujeres.

ARTÍCULO 6.- El Instituto tendrá por objeto establecer las políticas y acciones que propicien y faciliten la plena incorporación de las mujeres en la vida económica, política, cultural y social, alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión competentes, y promoviendo ante las dependencias y entidades de las administraciones públicas estatal y municipales los mecanismos necesarios para la transversalización en la políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas.

ARTÍCULO 7.- Para el cumplimiento de su objeto el Instituto Sonorense de las Mujeres tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Apoyar la formulación de políticas públicas gubernamentales e impulsar las de la sociedad, para alcanzar la equidad de género y la igualdad sustantiva;

II.- Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación estatal del desarrollo, programación y presupuesto de egresos del estado;

III.- Proponer, en el marco del Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Estatal para la Igualdad de Género y, evaluar periódica y sistemáticamente la ejecución del mismo;

IV.- Promover, difundir, vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los tratados internacionales ratificados por México, en particular de los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres; en la Constitución Política del Estado de Sonora, y en los demás ordenamientos jurídicos de la materia;

V.- Establecer relaciones permanentes con las autoridades responsables de la Procuración de Justicia y de la Seguridad Pública, para proponer medidas de prevención contra cualquier forma de discriminación con forme al objeto de esta Ley;

VI.- Establecer vínculos de colaboración con las instancias administrativas estatales y municipales, para promover y apoyar, en su caso, las políticas, programas y acciones en materia de igualdad sustantiva y no discriminación;

VII.- Estimular y apoyar la participación activa de las organizaciones y actores sociales que actúan en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, en el establecimiento de la agenda de las mujeres y en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y acciones públicas orientadas a estimular el avance de las mujeres;

VIII.- Fungir como enlace y representante permanente del o la representante del Poder Ejecutivo del Estado en materia de derechos de las mujeres ante el Instituto Nacional de las Mujeres, dependencias y entidades de las administraciones públicas federal, estatal y municipales, así como ante organizaciones sociales y privadas y organismos nacionales e internacionales;

IX.- Servir como organismo de enlace y asesor, con organizaciones privadas y sociales, estatales, nacionales e internacionales que apoyen proyectos dirigidos a las mujeres para lograr la captación y distribución adecuada de recursos técnicos y financieros;

X.- Promover y gestionar aportaciones de recursos provenientes de instituciones públicas, organizaciones privadas y sociales, organismos nacionales e internacionales, así como de particulares interesados en apoyar el logro de la igualdad sustantiva;

XI.- Promover la cultura de la no violencia, de la no discriminación y de la igualdad sustantiva para el fortalecimiento de las personas, así como prevenir, atender y ejecutar acciones para erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas y manifestaciones;

XII.- Promover e impulsar la cultura de la denuncia ante autoridades competentes por la violación de los derechos humanos de las mujeres;

XIII.- Promover e incentivar estudios e investigaciones para instrumentar un sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad en el Estado;

XIV.- Elaborar y mantener actualizado un diagnóstico de la situación de las mujeres en el Estado que permita conocer sus necesidades y problemáticas, utilizando sus resultados para el diseño, implementación y evaluación de políticas, programas y acciones dirigidos al cumplimiento del objeto de esta Ley;

XV.- Promover ante las autoridades competentes que se garantice el acceso y se aliente la permanencia de las mujeres en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, favoreciendo a través del proceso enseñanza-aprendizaje la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres;

XVI.- Promover la ejecución de acciones para el reconocimiento y la visibilidad pública de las mujeres, así como para la difusión de las actividades que las benefician;

XVII.- Implementar y coordinar la ejecución de programas de difusión e información para las mujeres de carácter gratuito y alcance estatal que se desarrollen en materia de derechos de las mujeres y de los procedimientos de impartición de justicia; así como aquéllos que proporcionen orientación sobre las políticas públicas, programas de gobierno y de organismos no gubernamentales y privados para la igualdad sustantiva;

XVIII.- Establecer vínculos de colaboración con el Congreso del Estado para impulsar acciones legislativas que garanticen el acceso equitativo y no discriminatorio al desarrollo y la tutela de los derechos humanos;

XIX.- Celebrar convenios de coordinación con las dependencias y entidades de las administraciones públicas federal, estatal y municipales, así como convenios de concertación y colaboración con organismos de los sectores social y privado, nacionales o internacionales para el cumplimiento de su objeto;

XX.- Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, y de los organismos de los sectores social y privado, en materia de igualdad de oportunidades para las mujeres, cuando así lo requieran;

XXI.- Apoyar con recursos, de conformidad con los programas federales para tal efecto, el desarrollo de programas y proyectos de instituciones y organizaciones sociales no gubernamentales e individuales que promuevan la igualdad sustantiva;

XXII.- Brindar asesoría a las mujeres para potenciar sus capacidades, que les permita acceder y aprovechar los programas que las benefician;

XXIII.- Promover el desarrollo de metodologías y estrategias para la capacitación y el adiestramiento laboral dirigido a mujeres, así como propiciar la profesionalización del personal femenino dentro de la administración pública;

XXIV.- Promover y fomentar acciones con perspectiva de género para la prevención de la violencia contra las mujeres, priorizando a las mujeres en situación de vulnerabilidad por pobreza, marginación y exclusión, especialmente aquéllas que se encuentran en el medio rural e indígena y con ello contribuir a la prevención de la violencia;

XXV.- Promover ante las autoridades municipales competentes, la instauración de una instancia que atienda la problemática de igualdad de género en sus municipios quién fungirá como enlace institucional en esta materia;

XXVI.- Brindar asesoría y apoyo a los municipios del Estado en la elaboración de sus programas de trabajo de las instancias municipales de las mujeres; y

XXVII.- Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables, y las que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

CAPÍTULO III DEL PATRIMONIO Y DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

ARTÍCULO 8.- El patrimonio del Instituto Sonorense de las Mujeres se constituirá por:

I.- Las aportaciones, bienes muebles e inmuebles y demás ingresos que los gobiernos federal, estatal y municipal le otorguen o destinen;

II.- El subsidio que anualmente le señale el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, que deberá no ser menor al autorizado en el año inmediato anterior;

III.- Las aportaciones, legados, donaciones y demás liberalidades que reciba de las personas de los sectores social y privado;

IV.- Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que les generen sus bienes, operaciones, actividades o eventos que realice; y

V.- En general, con los ingresos que obtenga por cualquier otro título legal.

El Instituto gozará respecto de su patrimonio de las franquicias y prerrogativas concebidas a los fondos y bienes del Estado. Dichos bienes, así como los actos y contratos que celebre el Instituto Sonorense de las Mujeres quedarán exentos de toda clase de impuestos y derechos estatales, en los términos que establezcan los ordenamientos legales aplicables.

CAPÍTULO IV DE LA ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

ARTÍCULO 9.- El Instituto Sonorense de las Mujeres contará con los siguientes órganos de gobierno y administración:

I.- La Junta de Gobierno; y

II.- La Coordinadora Ejecutiva.

ARTÍCULO 10.- La Junta de Gobierno será la máxima autoridad del Instituto Sonorense de las Mujeres, y se integrará por:

I.- La o el titular del Poder Ejecutivo del Estado, que tendrá el cargo de Presidente(a), quien la presidirá;

II.- Veintinueve Vocales que tendrán derecho a voz y voto y que serán:

a).- Las y los titulares de las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal:

- 1.- Secretaría de Gobierno;
 - 2.- Secretaría de Hacienda;
 - 3.- Secretaría de Educación y Cultura;
 - 4.- Secretaría de Salud Pública;
 - 5.- Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano;
 - 6.- Secretaría de Economía;
 - 7.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura;
 - 8.- Secretaría de Desarrollo Social;
 - 9.- Secretaría del Trabajo;
 - 10.- Secretaría de Seguridad Pública;
 - 11.- Fiscalía General de Justicia;
 - 12.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora;
 - 13.- Instituto Sonorense de la Juventud;
 - 14.- Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas;
 - 15.- Coordinación Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres.
- b).- Siete integrantes del Consejo Consultivo y siete del Consejo Social.

Las mujeres integrantes referidas en el inciso b), de este artículo, deberán ser ciudadanas sonorenses en pleno ejercicio de sus derechos, representativas de la diversidad y pluralidad de la población femenina del estado y que fundamentalmente se hayan destacado por su conocimiento y experiencia en la problemática de las mujeres y en la defensa de sus derechos humanos. Su permanencia en la junta se hará en los términos a que se refieren los artículos 23 y 25 de esta Ley.

Podrán asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno como invitados(as) permanentes, quienes tendrán derecho a voz pero sin voto, la Titular de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado y un o una representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Asimismo, quien preside la Junta de Gobierno podrá invitar a las sesiones a representantes de otras dependencias y entidades federales, estatales o municipales, así como a

representantes de organizaciones privadas y sociales y a expertos(as) de la problemática de las mujeres que estime pertinentes para el logro de los fines del Instituto Sonorense de las Mujeres. Los invitados(as) a las sesiones de la Junta de Gobierno participarán en éstas con voz, pero sin voto.

La Junta de Gobierno contará con una Secretaría Técnica que será la titular de la Dirección de Programas Sociales del Instituto Sonorense de las Mujeres.

ARTÍCULO 11.- Las personas integrantes de la Junta de Gobierno deberán designar por escrito a quienes vayan a ser sus suplentes. Quienes sean designados(as) como suplentes de las y los representantes de las dependencias y entidades deberán ser del nivel inmediato inferior al que ocupen las y los Vocales titulares.

Los cargos de integrantes de la Junta de Gobierno serán de carácter honorífico, por lo que no percibirán retribución, emolumento o compensación alguna por las funciones que desempeñen en dicha Junta.

ARTÍCULO 12.- La Junta de Gobierno tendrá, además de las atribuciones que establece el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, las siguientes:

I.- Establecer, en congruencia con las políticas del Instituto Sonorense de las Mujeres, los programas generales correspondientes, así como definir las prioridades relativas a finanzas y administración;

II.- Aprobar los programas y los presupuestos del Instituto Sonorense de las Mujeres, así como sus modificaciones, sujetándose a lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Sonora, la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, la Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora, y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como, en su caso, a las asignaciones de gasto y financiamiento autorizados;

III.- Aprobar anualmente, previo informe del Comisario(a) Público(a) y dictamen de la o del auditor(a) externo(a), los estados financieros del Instituto Sonorense de las Mujeres;

IV.- Aprobar y expedir el Reglamento Interior del Instituto Sonorense de las Mujeres y sus modificaciones, así como la organización general del Instituto Sonorense de las Mujeres y los Manuales de Organización, de Procedimientos y de Servicios al Público del Instituto;

V.- Analizar y aprobar, en su caso, los informes que rinda la Coordinadora Ejecutiva con intervención que corresponda al Comisario(a) Público(a);

VI.- Expedir la convocatoria para la integración y renovación del Consejo Consultivo y del Consejo Social, así mismo, expedir la convocatoria para la designación de la Coordinadora Ejecutiva, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Reglamento Interior del Instituto Sonorense de las Mujeres;

VII.- Aprobar la aceptación de las donaciones, legados y demás liberalidades que se otorguen a favor del Instituto Sonorense de las Mujeres;

VIII.- Fijar las reglas generales a las que deberá sujetarse el Instituto Sonorense de las Mujeres en la celebración de acuerdos, convenios y contratos para la ejecución de acciones relacionadas con su objeto;

IX.- Otorgar poderes generales para actos de administración y de dominio, así como para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley, así como revocarlos y sustituirlos;

X.- Solicitar a la o al titular del Poder Ejecutivo del Estado la ratificación o remoción de la persona titular de la Coordinación Ejecutiva; y

XI.- Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos.

Las atribuciones anteriores son indelegables.

ARTÍCULO 13.- La Junta de Gobierno funcionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes, en la primera convocatoria, y con el treinta y tres por ciento en la segunda convocatoria, siempre que entre las personas asistentes se encuentre quien tenga a cargo la presidencia de la Junta. Las decisiones de la Junta se tomarán por mayoría de votos de las y los vocales presentes y, en caso de empate, quien presida la Junta tendrá voto de calidad.

ARTÍCULO 14.- La Junta de Gobierno sesionará en forma ordinaria cuando menos cuatro veces al año y en forma extraordinaria cuando sea necesario. Sus sesiones serán públicas, salvo que decida lo contrario la mayoría simple de sus integrantes.

Para efectos de este artículo se entenderá por mayoría simple de la Junta de Gobierno la asistencia de la mitad más uno de sus miembros.

ARTÍCULO 15.- Las convocatorias a las sesiones de la Junta de Gobierno serán notificadas en forma escrita a cada uno(a) de sus integrantes por la Secretaria Técnica con una antelación de cuando menos cinco días hábiles, tratándose de sesiones ordinarias y, de cuarenta y ocho horas, tratándose de las extraordinarias, señalándose el lugar, fecha y hora en que tendrá lugar la sesión.

Junto a la convocatoria respectiva deberá presentarse en forma anexa el orden del día que contenga los asuntos a tratar, así como la documentación necesaria para el análisis de cada uno de los puntos señalados en dicho orden del día y la demás información que sea pertinente.

ARTÍCULO 16.- La Junta de Gobierno funcionará en los términos dispuestos en el Reglamento Interior del Instituto Sonorense de las Mujeres y en lo que éste no prevea, en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y por el Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal.

ARTÍCULO 17.- La o el Presidente(a) de la Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Convocar a sesiones ordinarias y, en su caso, a sesiones extraordinarias, por conducto de la Secretaría Técnica;

II.- Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno;

III.- Otorgar voto de calidad en los casos de empate en las votaciones de la Junta de Gobierno;

IV.- Diferir o suspender las sesiones cuando existan causas que a su juicio pudieran afectar la celebración o el desarrollo de las mismas; y

V.- Las demás que le confieran esta Ley, el Reglamento Interior del Instituto Sonorense de las Mujeres y otras disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO V **DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**

ARTÍCULO 18.- Al frente del Instituto Sonorense de las Mujeres habrá una Coordinadora Ejecutiva que será nombrada por la o el titular del Poder Ejecutivo del Estado de la terna que envíe la Junta de Gobierno, en los términos establecidos en esta Ley y el Reglamento Interior del Instituto Sonorense de las Mujeres.

En el supuesto de que la o el titular del Poder Ejecutivo del Estado rechace la terna, se encargará del despacho de la Coordinación Ejecutiva, la persona titular de la Dirección de Programas Sociales hasta en tanto se haga la designación de la Coordinadora Ejecutiva, debiéndose expedir una nueva convocatoria por la Junta de Gobierno.

La Coordinadora Ejecutiva podrá ser removida por la o el titular del Poder Ejecutivo del Estado.

ARTÍCULO 19.- Para ser Coordinadora Ejecutiva se requiere:

I.- Ser ciudadana sonorense en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II.- No haber sido inhabilitada por la Secretaría de la Contraloría General o por otra autoridad competente para ello;

III.- No haber sido sentenciada por delito intencional que merezca pena corporal;

IV.- Haber destacado por su labor a nivel municipal, estatal o nacional, a favor de la equidad de género o en actividades relacionadas con la promoción de la igualdad sustantiva;

V.- Haber desempeñado cargos de nivel decisorio, cuyo desempeño requiere conocimiento y experiencia en materia administrativa; y

VI.- No encontrarse en ninguno de los impedimentos establecidos por los diversos ordenamientos jurídicos aplicables a quienes ejerzan la función pública.

ARTÍCULO 20.- La Coordinadora Ejecutiva, además de las atribuciones que establece el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, tendrá las siguientes:

I.- Representar legalmente al Instituto como apoderada legal para actos de administración y para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y las que requieran cláusula especial conforme a la ley; formular querellas y otorgar perdón; ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive la del juicio de amparo; comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones; otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le compete, entre ellas las que requieran autorización o cláusulas especiales; así como revocarlos;

II.- Otorgar, endosar y suscribir títulos de crédito y celebrar operaciones de crédito hasta por la cantidad y en las condiciones que autorice la Junta de Gobierno, siempre y cuando los títulos y las operaciones se deriven de actos propios y objeto del Instituto Sonorense de las Mujeres;

III.- Celebrar toda clase de contratos y convenios con los sectores públicos, social y privado e instituciones educativas para la ejecución de acciones relacionadas con el objeto del Instituto Sonorense de las Mujeres;

IV.- Formular el programa institucional y sus respectivos subprogramas y proyectos de actividades, así como los presupuestos del Instituto Sonorense de las Mujeres, y presentarlos para su aprobación ante la Junta de Gobierno;

V.- Ejercer el presupuesto del Instituto Sonorense de las Mujeres, con sujeción a las disposiciones legales y administrativas aplicables;

VI.- Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar los objetivos y metas propuestas;

VII.- Presentar el informe del desempeño de las actividades del Instituto Sonorense de las Mujeres, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes, así como dar a conocer a la sociedad sonorense dicho informe mediante su publicación en el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado;

VIII.- Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen en la eficiencia y eficacia con que se desempeña el Instituto Sonorense de las Mujeres y presentar a la Junta de Gobierno el resultado de evaluación de gestión;

IX.- Celebrar convenios con los sectores público, social y privado para la ejecución de las acciones relacionadas con el objeto del Instituto Sonorense de las Mujeres, previa aprobación de la Junta de Gobierno;

X.- Coordinar la formulación del Reglamento Interior del Instituto Sonorense de las Mujeres y presentarlo a la Junta de Gobierno para su aprobación, así como aprobar los manuales de Organización, de Procedimientos y, en su caso, de Servicios al Público del Instituto Sonorense de las Mujeres;

XI.- Coordinar el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas del Instituto Sonorense de las Mujeres, y dictar los acuerdos tendientes a dicho fin;

XII.- Nombrar y remover libremente al personal de confianza así como nombrar y, en su caso, remover al personal de base del Instituto Sonorense de las Mujeres;

XIII.- Consultar y mantener una estrecha vinculación con el Consejo Consultivo y con el Consejo Social, otorgándoles los apoyos necesarios para el desempeño de sus funciones;

XIV.- Apoyar el desarrollo de las actividades del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y otorgarle el apoyo necesario para el desempeño de sus funciones;

XV.- Administrar el patrimonio del Instituto Sonorense de las Mujeres de conformidad con las directrices que fije la Junta de Gobierno, y cuidar de su adecuado manejo;

XVI.- Dar seguimiento al Anexo de erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, que se deriva del presupuesto de egresos del estado para el ejercicio fiscal correspondiente, en el que se desglose de manera transversal el gasto por ramo administrativo y programa presupuestario, y a la aplicación de los recursos en los programas en los que se identifique la perspectiva de género, así como evaluar sus resultados e impacto;

XVII.- Certificar los documentos que obren en el archivo de la Institución: cuando deban ser exhibidos en procedimientos judiciales, contenciosos o administrativos y en general para cualquier proceso o procedimiento administrativo; cuando lo requiera quien demuestre interés jurídico en el asunto de que se trate, previo pago de derechos y cuando le sea requerido, conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y sea procedente; y

XVIII.- Las demás que le otorguen las disposiciones jurídicas aplicables, y las que le confiera la Junta de Gobierno, en el ámbito de su competencia.

CAPÍTULO VI

DEL CONSEJO CONSULTIVO Y DEL CONSEJO SOCIAL DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

ARTÍCULO 21.- El Instituto Sonorense de las Mujeres contará con el Consejo Consultivo y con el Consejo Social como órganos auxiliares para el desempeño de sus funciones, integrados por representantes de la sociedad civil y academia.

Los cargos en los Consejos a que se refiere este artículo son de carácter honorífico, por lo que sus integrantes no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna por su desempeño.

ARTÍCULO 22.- El Consejo Consultivo será un órgano asesor y promotor de las acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en los términos dispuestos por esta ley; estará integrado por no menos de diez ni más de veinte mujeres designadas y propuestas a la Junta de Gobierno del Instituto Sonorense de las Mujeres, por las organizaciones representativas de los diferentes sectores de la sociedad, de organizaciones públicas y privadas y de asociaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres, así como por instituciones académicas constituidas en el Estado.

La Junta de Gobierno determinará en el Reglamento Interior del Instituto Sonorense de las Mujeres la estructura, organización y funciones del Consejo Consultivo, que será dirigido por una Consejera Presidenta. Funcionará en comisiones que se determinarán en el Reglamento Interior.

ARTÍCULO 23.- Las integrantes del Consejo Consultivo durarán en su cargo tres años como consejeras, pudiendo permanecer en éste por un periodo más. Al término de su encargo, el Consejo Consultivo presentará un informe a la Junta de Gobierno.

ARTÍCULO 24.- El Consejo Social será un órgano de análisis, evaluación y seguimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta ley; se integrará por no menos de diez ni más de veinte mujeres de los sectores público, privado y social, que se hayan distinguido por sus tareas a favor del impulso a los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género.

La Junta de Gobierno determinará en el Reglamento Interior del Instituto Sonorense de las Mujeres la estructura, organización y funciones del Consejo Social, que será dirigido por una Consejera Presidenta. Funcionará en comisiones, debiendo contar por lo menos con la comisión de evaluación y seguimiento con perspectiva de género en los programas del Instituto Sonorense de las Mujeres.

ARTÍCULO 25.- Las integrantes del Consejo Social durarán en su cargo tres años como consejeras, pudiendo permanecer en éste por un periodo más. Al término de su encargo, el Consejo Social presentará un informe a la Junta de Gobierno.

ARTÍCULO 26.- El Consejo Consultivo tendrá las siguientes funciones:

I.- Fungir como órgano de asesoría y consulta del Instituto Sonorense de las Mujeres en lo referente al Programa Estatal para la Igualdad de Género, así como en los demás asuntos sobre las mujeres y la equidad de género, que sean sometidas a su consideración;

II.- Impulsar y favorecer la participación de los sectores social y privado interesados en las acciones relacionadas con el objeto de esta ley;

III.- Promover vínculos de coordinación con las personas responsables de las iniciativas a favor de la equidad de género e igualdad sustantiva en las instancias de gobierno, así como con los sectores y organizaciones de la sociedad en general;

IV.- Apoyar el fortalecimiento de las mujeres, organizaciones de mujeres y de las organizaciones que trabajen a favor de las mujeres; y

V.- Las demás que determine el Reglamento Interior del Instituto Sonorense de las Mujeres y demás disposiciones jurídicas aplicables.

ARTÍCULO 27.- El Consejo Social tendrá las siguientes funciones:

I.- Dar seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que se emprendan sobre las mujeres en el marco de esta ley;

II.- Vigilar el cumplimiento de los compromisos y convenios de coordinación y colaboración relacionados con el objeto del instituto;

III.- Elaborar y presentar a la titular de la Coordinación Ejecutiva los informes de evaluación de impacto de las políticas y programas en la materia objeto de esta ley;

IV.- Proponer medidas para modificar las políticas, estrategias, programas, proyectos y acciones derivadas de esta ley;

V.- Proponer mecanismos que propicien el fortalecimiento y actualización de los sistemas de información desagregada por género de los distintos sectores de la sociedad; y

VI.- Las demás que determine el Reglamento Interior del Instituto Sonorense de las Mujeres y otras disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO VII DE LA COLABORACIÓN DE LOS PODERES DEL ESTADO

ARTÍCULO 28.- El Instituto Sonorense de las Mujeres podrá solicitar, a las y los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, a los órganos de impartición de justicia en el Estado y al Congreso del Estado la información pertinente en materia de equidad de género y de las mujeres, así como su colaboración en el ámbito de su respectiva competencia, en la elaboración, ejecución y seguimiento del Programa Estatal para la Igualdad de Género.

Las autoridades y servidores públicos estatales y municipales proporcionarán a la titular de la Coordinación Ejecutiva la información y los datos que le solicite en los términos de los acuerdos que al efecto se celebren.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, los órganos de impartición de Justicia Estatal, así como el Congreso del Estado, en el ejercicio de sus

atribuciones y funciones, incorporarán el enfoque de género en sus políticas, programas y acciones institucionales.

CAPÍTULO VIII DE LOS PROGRAMA ESTATALES

ARTÍCULO 29.- El Instituto Sonorense de las Mujeres someterá a la consideración de la o del titular del Poder Ejecutivo, el Programa Estatal para la Igualdad de Género y llevará a cabo el seguimiento, evaluación y monitoreo de las Políticas Estatales y Municipales en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, de conformidad con lo dispuesto por la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el Estado de Sonora.

La Secretaría de Gobierno presidirá el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y coordinará el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y el Instituto fungirá como Secretaría Ejecutiva del Sistema y tendrá las atribuciones que señala la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Estado de Sonora.

CAPÍTULO IX DE LA COORDINACIÓN DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES CON MUNICIPIOS DEL ESTADO

ARTÍCULO 30.- Para diseñar, ejecutar y evaluar estrategias, políticas y acciones en las materias objeto de esta ley con los municipios de la entidad, el Instituto Sonorense de las Mujeres podrá:

I.- Asesorar y apoyar a los municipios que lo soliciten, en la formulación de sus programas para las mujeres;

II.- Promover la creación del subcomité especial para la igualdad de género en el seno del Comité de Planeación de Desarrollo Municipal;

III.- Promover, en coordinación con las autoridades municipales, la actualización y capacitación de los servidores(as) públicos(as) a efecto de que incluyan la perspectiva de género en sus acciones.

ARTÍCULO 31.- El Instituto Sonorense de las Mujeres promoverá que los Ayuntamientos establezcan en cada Municipio una Instancia Municipal de las Mujeres, que estará a cargo de una mujer, la que deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 19 de la presente Ley y será designada y removida libremente por el o la Presidente(a) Municipal, y fungirá como enlace entre el Municipio y el referido Instituto.

CAPÍTULO X DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REGIONALES

ARTÍCULO 32.- El Instituto Sonorense de las Mujeres podrá contar dentro de su estructura con unidades administrativas regionales, las cuales ejercerán las funciones

operativas en representación de la Coordinación Ejecutiva en la circunscripción que se les asigne.

CAPÍTULO XI DE LAS RELACIONES LABORALES

ARTÍCULO 33.- Las relaciones laborales del Instituto con sus trabajadoras y trabajadores se registrarán por el apartado A) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Se consideran trabajadores de confianza: la Coordinadora Ejecutiva, los directores generales, directores de área, subdirectores, jefes de departamento, administradores, coordinadores y demás personal que efectúe labores de inspección y vigilancia.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Sonorense de la Mujer pasarán a formar parte del nuevo organismo público descentralizado que se crea por virtud de esta Ley, denominado Instituto Sonorense de las Mujeres.

ARTÍCULO TERCERO.- El personal que conforma la plantilla laboral del Instituto Sonorense de la Mujer pasará a formar parte de la estructura del Instituto Sonorense de las Mujeres que se crea por virtud del presente ordenamiento, respetándose sus derechos laborales conforme a la legislación aplicable.

La actual Directora General, al entrar en vigor la presente ley asumirá el cargo y las atribuciones de la Coordinación Ejecutiva, y permanecerá en el mismo hasta el término del periodo de la actual administración pública estatal.

La designación de la siguiente titular de la Coordinación Ejecutiva, se hará de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de esta Ley.

ARTÍCULO CUARTO.- La Junta de Gobierno al entrar en vigor la presente Ley, se instalará y asumirá las atribuciones a que se refiere el artículo 12 de la misma, y expedirá el Reglamento Interior del Instituto Sonorense de las Mujeres, dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de este ordenamiento.

Una vez que quede integrada la Junta de Gobierno en los términos del artículo 10 de esta Ley, publicará la Convocatoria para elegir al resto de las integrantes del Consejo Consultivo y del Consejo Social.

ARTÍCULO QUINTO.- La Coordinadora Ejecutiva deberá publicar de inmediato la convocatoria abierta para la designación de siete consejeras del Consejo Consultivo y siete

del Consejo Social, estableciendo el perfil y características que deberán tener las aspirantes, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, en el artículo 10, fracción II, inciso b). Una vez cerrado el plazo de la convocatoria, procederá a revisar los expedientes de las aspirantes a ambos consejos, debiendo verificar que cumplan con los requisitos y características de la convocatoria. Hecho lo anterior, turnará al Congreso del Estado los expedientes que cumplan con los requisitos de la convocatoria y de la normatividad aplicable.

En un plazo de veinte días hábiles a partir de la vigencia de este ordenamiento, por única vez, la Comisión para la Igualdad de Género del H. Congreso del Estado, por consenso, y de conformidad con el artículo 10, fracción II, inciso b) de esta Ley, designará, a siete integrantes para formar el Consejo Social y a otras siete para el Consejo Consultivo, sometiendo las designaciones para su aprobación al Pleno del H. Congreso del Estado.

El Reglamento Interior del Instituto Sonorense de las Mujeres, preverá la forma de nombramiento de las integrantes del Consejo Consultivo y del Consejo Social.

ARTÍCULO SEXTO.- Todos los acuerdos, convenios, contratos y demás actos jurídicos en los que haya participado y celebrado el Instituto Sonorense de la Mujer, continuarán vigentes hasta el cumplimiento del objeto de los mismos.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Para todos los efectos legales, las atribuciones y facultades conferidas al Instituto Sonorense de la Mujer, en las diversas leyes y decretos, se entenderán referidos al Instituto Sonorense de las Mujeres.”

Finalizada la lectura, la presidencia puso a consideración de la Asamblea, la dispensa al trámite de segunda lectura solicitado por la Comisión dictaminadora, y fue aprobado por unanimidad, en votación económica. Siguiendo el protocolo, puso a discusión la ley en lo general y en lo particular; sin que se presentare participación alguna, fue aprobada por unanimidad, en votación económica, dictándose el trámite de: “Aprobado la ley, y comuníquese”.

En cumplimiento al punto 8 de la orden del día, la diputada Acosta Cid, dio lectura a su posicionamiento en relación a la celebración del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, el cual dice textualmente:

“Como cada año, a partir de la Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2007, se conmemora el 2 de Abril como el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo.

La determinación tomada por la ONU en Asamblea General de las Naciones Unidas, parte de varias premisas que son fundamentales y que debemos de retomar desde lo local, cuando se trate de diseñar e implementar políticas públicas en favor de las personas con autismo, principalmente cuando se trate de nuestras niñas y nuestros niños. No se es Autista, se tiene Autismo, El Autismo es un diagnostico que definitivamente asusta, pero que nos enseña a ser mejores personas.

Reconocer que las personas con autismo tienen derechos y necesidades especiales, es un acto de responsabilidad moral y ética que debemos asumir como funcionarias y funcionarios públicos. Nuestra labor debe encaminarse siempre en reconocer y salvaguardar sus derechos, facilitarles el acceso a los servicios básicos, pero sobre todo, garantizarles un desarrollo óptimo, libre de toda discriminación o segregación social por causa del autismo.

Y para entender la dimensión de esta situación es necesario voltear a ver las cifras: En Sonora, se estima que la cifra de niñas y niños con el trastorno del espectro autista (TEA), es de alrededor de 4,000 en todo el estado.

Se estima que en México, 1 de cada 115 niños viven con la condición del espectro autista. Aproximadamente 95,000 niños con edades que oscilan entre los 0 y los 4 años de edad y cerca de 300,000 con edades que van desde los 5 hasta los 19 años padecen esta condición. Como podemos ver, no son pocos. Las cifras son el resultado del Primer Estudio de Prevalencia del Autismo en México realizado el año pasado, por especialistas extranjeros en colaboración con instituciones y especialistas mexicanos.

Ante este panorama y las necesidades que tienen nuestras niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con esta condición, debemos analizar las medidas que hemos venido tomando desde esta Legislatura. El año pasado, este Pleno aprobó la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, mismo ordenamiento que contiene una serie de disposiciones de carácter obligatorio para los gobiernos municipales, el gobierno estatal y sus dependencias.

Reconozco en este acto, la labor incansable de las instituciones civiles y también de nuestra compañera la Dip. Flor Ayala, quien fue la impulsora de esta Ley, pero sobre todo de los compañeros integrantes de esta Legislatura y también a la Titular del Poder Ejecutivo Estatal, pues todos estos esfuerzos han sido indispensable para que avancemos y generemos políticas públicas efectivas y eficaces que impacten positivamente en la vida de las personas con autismo en el estado.

Estoy consciente que ese pequeño esfuerzo no basta, porque para cumplir con y dar certeza a este sector de la población, requerimos del esfuerzo de todas y todos, incluyendo los esfuerzos que día a día hacen las organizaciones de la sociedad civil que se especializan en atender y brindar apoyo a quienes viven con esta condición, a quienes siempre voy a reconocer por tan noble y digna labor; estoy cierta que sin ellos, no tendríamos los avances que hoy tenemos. A ellos en lo particular, los invito a que no se rindan, a que no dejen de hacernos las observaciones que nos tengan que hacer para continuar mejorando la calidad de vida de las personas con autismo, a que siempre estén pendientes de las políticas

públicas en este tema, y sobre todo, a que sigan poniendo el corazón todos los días, siempre, por sus hijas e hijos, por sus familiares; no se desesperen, todos los días verán frutos de ese esfuerzo.

A esta Legislatura los invito a seguir generando iniciativas que nos permitan darle a las personas con la condición del espectro autista una mejor calidad de vida, que abonen en la generación de políticas públicas incluyentes; porque la discriminación es también otro de los problemas que enfrenta este grupo vulnerable de nuestra población, y eso ya no lo podemos permitir ni mucho menos tolerar.

Vamos a seguir caminando juntos, hasta que Sonora rompa las barreras del autismo y le dé a sus niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con esta condición, una vida digna.

Me quedo con la definición más sencilla pero más real: Autismo es una capacidad extraordinaria de ser inocente, de ver a los demás sin prejuicio, de dar cariño de una forma genuina, limpia y desinteresada de dar abrazos de tal manera que curan el alma”.

Acto seguido, hizo uso de la voz la diputada Ayala Robles Linares, y dijo:

“Gracias diputada Lina Acosta por este posicionamiento en el tema del autismo, pero sobre todo yo quiero de verdad agradecerle a todos ustedes porque en aquel entonces el 17 de noviembre del 2015 que aprobamos la Ley General del Espectro Autista, pues realmente les pedí en esa ocasión que legisláramos con el corazón, porque al final del día el tema de nuestros niños autistas es un tema que cada vez más se está presentando en nuestra sociedad.

Es un espectro, una condición silenciosa porque pues aparentemente pareciera como que nuestros niños con el espectro autista no sufren de alguna discapacidad, sin embargo la vida y la situación de las familias de muchos de nuestros niños con el espectro autista, a veces es un viacrucis desde el diagnóstico, desde como diagnosticarlos, pasan años para poder tener un buen diagnóstico, desde la seguridad social que muchas veces a falta de un buen diagnóstico no pueden tener una buena seguridad social, desde los medicamentos y en fin, desde muchas veces también la discriminación que existe en nuestras escuelas porque pues no tienen los elementos para atender a nuestros niños con el espectro autista.

Pero yo déjenme decirles que gracias a ustedes hoy por hoy Sonora tiene ya una ley donde protege los derechos de nuestros niños autistas, en donde se deben de garantizar plenamente los derechos humanos que establece la Constitución, en donde tienen derecho a tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana, precisa y accesible, donde pueden solicitar y recibir los certificados de valuación y diagnóstico, donde tienen ellos la oportunidad de recibir una educación o capacitación basada en criterios de integración e inclusión, y muchos más.

Pero lo que más me importa en esta iniciativa que aprobamos es que nuestros niños tienen un capítulo donde se prohíbe, de prohibiciones y sanciones, algo sumamente importante para todos nosotros, por ejemplo queda estrictamente prohibido para la atención y preservación de los derechos de las familias con y personas de la condición del espectro autista, por ejemplo rechazar su atención en clínicas y hospitales del sector público y privado, negar la orientación necesaria para un diagnóstico y tratamiento adecuado, y desestimar el traslado de individuos en instituciones especializadas, actuar con negligencia, realizar acciones que pongan en riesgo la salud de las personas, así como aplicar terapias riesgosas, indicar sobre medicación que altere el grado de la condición, impedir o desautorizar la inscripción en los planteles educativos públicos y privados.

Eso de aquí en adelante de verdad dimos un gran paso, porque a muchos de nuestros niños ya no se les permitía ni la inscripción, ni la reinscripción y ya no hay problema de las familias si la escuela o la institución educativa no cuenta con el personal adecuado para atenderlos, eso no es problema de nosotros, de las familias, va a ser problema de la institución y la institución por lo tanto tendrá que tener el personal adecuado para atender a nuestros niños, ¿porque? que la Ley prohíbe que no los puedas inscribir, también se prohíbe impedir el acceso a servicios públicos y privados de carácter cultural y deportivo, y algo muy importante, se prohíbe reusar o rechazar a contratar seguros de gastos médicos, todos estos derechos y prohibiciones de verdad nos van a dar una vida de igualdad, de inclusión y de integración; y quiero que ustedes estén conscientes que esto lo hicimos todos juntos y por eso yo los felicito, porque seguiremos legislando en esto y otros muchos más temas vamos a seguir legislando con el corazón y de verdad por todas las familias con niños con la condición del espectro autista los felicito, y los exhorto a que sigan luchando por el bienestar de tantos niños que necesitan de nuestro apoyo, gracias, felicidades a todos, gracias por haber autorizado esta ley”.

La última intervención en este tema, fue en la voz del diputado Villegas Rodríguez, quien agregó:

“Solo poder agregar algunos puntos de las previas participaciones de la diputada Lina y la diputada Flor Ayala. Hace poco más de un año les platiqué en esta Sala la odisea que había pasado un niño que se llama Diego, que a partir de ahí se genera todo un movimiento que se llama *"Yo soy Diego"*, y este niño para hacerles un poquito de memoria, este niño fue objeto de discriminación en una institución educativa básica particular, donde a pesar de tener aprovechamiento de diez, que hablaba nueve idiomas, que es un niño que es de cierta forma un poco superdotado, que tiene una manera muy significativa de aprender cosas, pero este niño tiene asperger, y tiene estos problemas de conducta que son propios del asperger y que están dentro del espectro autista.

Quiero decirles que a partir de la ley que se armonizó en este Congreso, que es la Ley General para el Espectro Autista, ya las escuelas tienen un poquito más de miedo a no recibir o a expulsar por asuntos conductuales propios del asperger o del autismo; si es cierto que hemos avanzado pero todavía hay falta de conciencia en algunas de las escuelas, porque los reto a los diputados a preguntar, hablar hasta por teléfono a las instituciones

educativas particulares donde se les dice que si son escuelas incluyentes, y se dan el lujo de decir que no.

Entonces todavía tenemos que avanzar mucho y tenemos que aplicar los reglamentos y la ley para que esto no siga sucediendo; en el caso de Diego, gracias a Dios se ha seguido superando, pero hay muchos casos y hay muchos Diegos que no tienen la oportunidad de ser aceptados en una escuela por tener esta condición.

Yo quiero invitar a todas las instituciones educativas y a todos los que se involucran como la Secretaría de Educación y este Congreso, a que sigamos trabajando por esos Diegos que existen en el Estado y que existen en el país para que tengamos un mundo y un Estado y una nación más incluyente”.

Y sin que hubiere más asuntos por desahogar, la presidencia clausuró la sesión a las doce horas con veintiocho minutos, y citó a una próxima a desarrollarse el día miércoles, cinco de abril de dos mil diecisiete, a las once horas.

Se hace constar en la presente Acta, la no asistencia de los diputados Jaime Montoya Brenda Elizabeth, con justificación de la Mesa Directiva.

DIP. MOISÉS GOMEZ REYNA
PRESIDENTE

DIP. FERMIN TRUJILLO FUENTES
SECRETARIO

DIP. JOSÉ ANGEL ROCHÍN LÓPEZ
SECRETARIO

-LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas con diecinueve minutos del día cinco de abril de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos del Congreso del Estado de Sonora, los ciudadanos diputados Acosta Cid Lina, Acuña Arredondo Rodrigo, Ayala Robles Linares Flor, Buelna Clark Rafael, Castillo Godínez José Luis, Dagnino Escobosa Javier, Díaz Brown Ojeda Karmen Aída, Díaz Nieblas Ramón Antonio, Fu Salcido Carlos Manuel, Gomez Reyna Moisés, Guillén Partida Omar Alberto, Gutiérrez Jiménez José Armando, Gutiérrez Mazón María Cristina Margarita, Hernández Barajas Sandra Mercedes, Lam Angulo Juan José, León García Carlos Alberto, López Cárdenas Célida Teresa, Márquez Cázares Jorge Luis, Ochoa Bazúa Emeterio, Olivares Ochoa Teresa María, Palafox Celaya David Homero, Payán García Angélica María, Rochín López José Ángel, Salido Pavlovich Jesús Epifanio, Sánchez Chiu Iris Fernanda, Serrato Castell Luis Gerardo, Trujillo Fuentes Fermín, Valdés Avilés Ana María Luisa, Villarreal Gámez Javier y Villegas Rodríguez Manuel; existiendo quórum legal, la presidencia declaró abierta la sesión.

Posteriormente, solicitó al diputado Trujillo Fuentes, secretario, diera lectura a la orden del día; y puesta a consideración de la Asamblea, fue aprobada, por unanimidad, en votación económica.

Seguidamente, informó de la correspondencia:

Escrito de los secretarios generales del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) y del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (STEUS), mediante el cual solicitan que este Poder Legislativo se pronuncie a favor de un exhorto al diálogo en las revisiones contractual y

salarial de los sindicatos universitarios con la Universidad de Sonora. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se remite a las Comisiones de Educación y Cultura y de Asuntos del Trabajo”.

Escrito del Director General de la Junta de Caminos del Gobierno del Estado de Sonora, mediante el cual da respuesta a este Poder Legislativo, en relación al exhorto dirigido a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como a los titulares de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y de la Junta Local de Caminos, ambas del Gobierno del Estado, para que, en ejercicio de sus atribuciones, destinen los recursos necesarios para la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la red de carreteras estatales que comunican a las comunidades que integran el municipio de San Luis Río Colorado. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se acumula al expediente del acuerdo 284, aprobado por este Poder Legislativo, el día 02 de marzo de 2017”.

Escrito del ciudadano José Leovigildo Guerra Beltrán, Contador Público Certificado, por medio del cual manifiesta a este Poder Legislativo, su intención de ser considerado como aspirante al cargo de Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, para lo cual remite diversas documentales para acreditar el cumplimiento de los requisitos para ser designado a dicho cargo. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se remite al Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo”.

Acto seguido, la presidencia decretó un receso, siendo reanudada la sesión a las once horas con veintinueve minutos.

En cumplimiento al punto 4 de la orden del día, la diputada López Cárdenas solicitó autorización para la transmisión de un video en pantallas, y siendo aceptado por la presidencia, dio lectura a su iniciativa con punto de: “**ACUERDO: ÚNICO.-** El Congreso del Estado de Sonora, resuelve exhortar al titular del Ejecutivo Federal, Licenciado Enrique Peña Nieto, para que gire instrucciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, a fin de iniciar los proyectos ejecutivos y financieros que se

requieren, para construir un libramiento ferroviario que elimine el paso del ferrocarril, que normalmente lo hace con cargas potencialmente mortales, a través del centro urbano del municipio de Puerto Peñasco, Sonora, así como también establecer, a fin de minimizar los riesgos del paso del ferrocarril en lo que se construye un libramiento ferroviario, un horario obligatorio para el paso del tren por el área urbana que oscile entre las 0:00 y las 6:00 horas, esto a fin de minimizar los riesgos en la seguridad de los habitantes del casco urbano”.

Finalizada su lectura, agregó que el paso de este medio de transporte divide a la ciudad de Puerto Peñasco y la deja incomunicada; quien conoce Las Palomas, Los Sonoran y todos esos desarrollos, sabe que la comunidad no puede tener contacto con el malecón; es decir, cuando está cruzando el tren por la ciudad, se vuelve un caos vial y causa una gran molestia, por ello solicita el apoyo para este exhorto.

Seguidamente, la presidencia puso a consideración de la Asamblea la solicitud para declarar el asunto con el carácter de urgente y obvia resolución, y la dispensa al trámite de Comisión, y fue aprobado por unanimidad, en votación económica. Siguiendo el protocolo, puso a discusión el Acuerdo en lo general, he hizo uso de la voz el diputado Acuña Arredondo para sumarse al exhorto, pues es una problemática que adolece todo el Estado de Sonora, y mencionó a Caborca y Santana, municipios que tienen ese problema, aunque ya lo están atendiendo para exigir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haga lo propio en el sentido de seguridad. Citó el año de 1940 cuando el ferrocarril Sonora-Baja California inició con el servicio, épocas en que se cuidaba la seguridad de los ciudadanos, pues por regla universal, se entiende que si el tren pasa por un lugar, se avisa con tiempo, y se pone la pluma de seguridad en el cruce; hoy no se tiene eso, por lo que deben trabajar fuerte y exigirle a la compañía ferroviaria que tome las medidas de seguridad universales.

Seguidamente, el diputado Gutiérrez Jiménez dijo que Puerto Peñasco tiene el mismo problema que Nogales, y hace un año solicitó apoyo para solucionar este problema; vino a Nogales el responsable de Ferromex para atender este

problema, y quiere que se resuelva. Por último, agregó que muchas ciudades crecieron con la llegada del ferrocarril, y hoy son ciudades grandes, por tanto, deben buscar una solución a este añejo problema.

En ese tenor, el diputado Fu Salcido expresó su deseo por unirse al exhorto, pues es necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte haga un análisis real y responsable de lo que está pasando en estas ciudades; citó el ejemplo de Agua Prieta donde hay vialidades que están tapadas por durmientes, como es el caso de la Calle 35, y éstos estorban para el cruce de los automóviles, entre otros problemas, pues la logística que usa el ferrocarril es obsoleto, pues la circulación se detiene por horas.

Sin que se presentaren más participaciones, fue aprobado el Acuerdo en lo general, por unanimidad, en votación económica. Siguiendo el protocolo, la presidencia puso a discusión el Acuerdo en lo particular; sin que se presentare participación alguna, fue aprobado por unanimidad, en votación económica, dictándose el trámite de: “Aprobado el Acuerdo, y comuníquese”.

En cumplimiento al punto 5 de la orden del día, el diputado Rochín López dio lectura a su iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un artículo 32 Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, resolviendo la presidencia turnarla para su estudio y dictamen, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

En cumplimiento al punto 6 de la orden del día, el diputado León García dio lectura al dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de:

“LEY

QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 46-A A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 46-A a la Constitución Política del Estado de Sonora, para quedar como sigue:

Artículo 46-A.- El Congreso del Estado, a través de su Presidente, debe rendir en sesión solemne durante el mes de septiembre de cada año, a la que se invitará al Ejecutivo del Estado y al Presidente del Poder Judicial del Estado, un informe anual de actividades, el cual debe celebrarse de conformidad con lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora.

El informe anual de actividades del Congreso del Estado debe contener cuando menos:

I.- La descripción de los trabajos y actividades legislativas más relevantes realizados durante el año de que se trate por parte del Pleno, la diputación permanente y de las Comisiones;

II.- Los avances en los temas sobre presupuesto y deuda pública, así como la fiscalización y transparencia de los recursos públicos;

III.- Los avances en el cumplimiento de la agenda legislativa común;

IV.- Un apartado derivado de la aplicación del Modelo de Evaluación del Desempeño Legislativo, según se establece en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que emitan los Ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente Ley, a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Estado de Sonora, en su artículo 163.

Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y la remitan al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de resultar aprobada.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Una vez que entre en vigor la presente Ley, este Congreso del Estado deberá realizar las modificaciones correspondientes a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora”.

Finalizada la lectura, la presidencia puso a consideración de la Asamblea, la dispensa al trámite de segunda lectura solicitado por la Comisión dictaminadora, y fue aprobado por unanimidad, en votación económica. Siguiendo el protocolo, puso a discusión la ley en lo general y en lo particular; sin que se presentara participación alguna, fue aprobada por unanimidad, en votación económica, dictándose el

trámite de: “Aprobado la ley, y comuníquese a los Ayuntamientos del Estado para los efectos previstos por el Artículo 163 de la Constitución Política del Estado de Sonora”.

En cumplimiento al punto 7 de la orden del día, el diputado Castillo Godínez dio lectura al dictamen presentado por la Comisión del Deporte, y la de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad, en forma unida, con proyecto de:

“DECRETO

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 4º, fracciones V y VI, 8º, fracciones IV y V, 50, fracción I, inciso e y se adicionan las fracciones VII y VIII al artículo 4º, una fracción VI al artículo 8º; un tercer párrafo al artículo 58, un artículo 60 bis, un tercer párrafo al artículo 82, un Título Quinto y los artículos 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111; todos de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora, para quedar como sigue:

Artículo 4º.- ...

I a la IV.- ...

V.- Deporte: Actividad física o motriz, institucionalizada y reglamentada, desarrollada en competiciones con uno mismo o con los demás;

VI.- Deporte adaptado: Práctica del deporte de personas con cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una actividad ocasionado por una deficiencia dentro del ámbito neurológico, motor, mental y sensorial;

VII.- Deporte adaptado de alto rendimiento: diferentes disciplinas y modalidades deportivas reconocidas como oficiales por el Comité Paralímpico Internacional; y

VIII.- Rehabilitación física: Actividades para restablecer a una persona sus capacidades físicas, reeducando por medio de ellas a su cuerpo.

Artículo 8º.- ...

I a la III.- ...

IV.- Los Consejos Estatales del Deporte de la Educación Básica, Media Superior y Superior;

V.- Las Asociaciones y Sociedades que estén reconocidas en términos de esta ley; y

VI.- Comité del Deporte Adaptado del Estado de Sonora.

Artículo 50.- ...

I.- ...

a al d.- ...

e.- Deporte adaptado;

f y g.- ...

II.- ...

a al d.- ...

Artículo 58.- ...

...

Asimismo, se establecerán acciones que permitan generar y difundir la cultura del deporte adaptado, así como promover e impulsar la investigación de los diferentes implementos que se requieren para la práctica de las diferentes disciplinas y modalidades que practican las personas con discapacidad.

Artículo 60 Bis.- Las instalaciones deportivas de cada uno de los municipios del estado de Sonora deberán contar con las adecuaciones arquitectónicas para la práctica del deporte adaptado que realizan las personas con discapacidad, debiendo contemplarse por los Municipios como por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora, por conducto de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, los presupuestos que se ejercerán cada año para dar cumplimiento a las adecuaciones que resulten necesarias.

Artículo 82.- ...

I y II.- ...

...

Los deportistas de alto rendimiento a que hace referencia el artículo 50 en su inciso d, con discapacidad física, intelectual o sensorial o enfermedad mental, que cumplan los requisitos citados en el párrafo anterior en atención a su trayectoria deportiva y relevancia social, serán candidatos a estos estímulos.

TÍTULO QUINTO DEL DEPORTE ADAPTADO

CAPÍTULO ÚNICO

DEL DEPORTE ADAPTADO

Artículo 105.- Todas las personas a que se refiere este título recibirán, sin discriminación, las prerrogativas y demás beneficios de esta Ley y su reglamento.

Artículo 106.- La Comisión del Deporte del Estado de Sonora, así como los institutos del deporte de los municipios, deberán alentar la práctica de nuevas disciplinas y modalidades del deporte adaptado en las instalaciones deportivas donde se cuente con la infraestructura necesaria, contando para ello con la colaboración de las diferentes organizaciones del deporte adaptado, con el objeto de apoyar su integración a la sociedad y propiciar su bienestar, en un marco de respeto e igualdad, vigilándose la salud física y mental del individuo.

El DIF estatal y los sistemas DIF municipal coadyuvarán en la promoción en todo el Estado la capacitación deportiva y la práctica de deportes para las personas con discapacidad y buscarán otorgarles facilidades necesarias para el desarrollo de sus prácticas deportivas, como lo establece el artículo 54 de la Ley de Integración para Personas con Discapacidad del Estado de Sonora.

Artículo 107.- Los aspirantes a ingresar a cualquiera de las disciplinas del deporte adaptado, requerirán un certificado médico que los acredite aptos para su práctica. Cuando las personas a que se refiere el presente Título deseen realizar actividades deportivas, que no impliquen un riesgo para la salud, no será necesaria la presentación del diagnóstico médico citado.

Artículo 108.- La Comisión del Deporte del Estado de Sonora, deberá contar con un área específica que, en Coordinación con el DIF estatal, se encargue de la elaboración, programación, ejecución, difusión y, en su caso, de la supervisión de los programas que con relación al deporte adaptado sean elaborados para su aplicación en el Estado de Sonora, observando en todo momento las propuestas que emita el Comité del Deporte Adaptado del Estado de Sonora.

Artículo 109.- El Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora y los organismos deportivos de los Ayuntamientos, promoverá la celebración de una Olimpiada Especial de Personas con Discapacidad, una vez cada tres años, en la que exista, por lo menos, una actividad deportiva a realizar para cada tipo de discapacidad que señala la fracción VI del artículo 4º de la presente Ley.

Artículo 110.- Los Institutos del deporte de los Municipios deberán contar con un departamento específico cuya función sea la de elaborar, complementar y en su caso supervisar los programas para el deporte adaptado, atendiendo en todo momento las recomendaciones realizadas por el Comité del Deporte Adaptado del Estado de Sonora.

Artículo 111.- Las autoridades municipales, en el ámbito de sus respectivas circunscripciones deberán observar el debido cumplimiento del presente Título, así como de los demás ordenamientos establecidos en la presente Ley y su reglamento.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado”.

Finalizada la lectura, la presidencia puso a consideración de la Asamblea, la dispensa al trámite de segunda lectura solicitado por la Comisión dictaminadora, y fue aprobado por unanimidad, en votación económica. Siguiendo el protocolo, puso a discusión el Decreto en lo general y en lo particular; sin que se presentase participación alguna, fue aprobado por unanimidad, en votación económica, dictándose el trámite de: “Aprobado el Decreto y comuníquese”.

En cumplimiento al punto 8 de la orden del día, el diputado Ochoa Bazúa agradeció a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por dictaminar éste Decreto que dará apoyo a los municipios del Estado en su aspecto jurídico ante los constantes juicios frente a tribunales, mismos que por insuficiencia de personal, y la abundancia de asuntos jurídicos, muchas veces se tienen pérdidas económicas importantes, que para los municipios pequeños significa mucho, y es dinero que podría traducirse en programas y en obras, entre otras cosas; de ahí la importancia de esta reforma a la Ley del Servicio Civil que adiciona la palabra municipios para que tengan el respaldo en este marco jurídico, y se hagan representar por medio de apoderados, mediante simple oficio, tal como lo hace ya el Estado. Seguidamente, dio lectura al:

“DECRETO

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 121 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 121.- Los funcionarios del Estado y los Municipios podrán hacerse representar por medio de apoderados que acrediten ese carácter mediante simple oficio.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado”.

Finalizada la lectura, la presidencia puso a consideración de la Asamblea, la dispensa al trámite de segunda lectura solicitado por la Comisión dictaminadora, y fue aprobado por unanimidad, en votación económica. Siguiendo el protocolo, puso a discusión el Decreto en lo general y en lo particular; sin que se presentare participación alguna, fue aprobada por unanimidad, en votación económica, dictándose el trámite de: “Aprobado el Decreto, y comuníquese”.

En cumplimiento al punto 9 de la orden del día, el diputado Lam Angulo, antes de dar lectura al dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, dijo que abogados y líderes indígenas por siglos han esperado algo como lo que hoy se presenta; el Estado de Sonora ante la nación mexicana, ha forjado su identidad conforme al papel histórico en que sus pueblos indígenas resistieron ante el proceso de colonización, y prueba de ello es que han sobrevivido los embates durante más de cinco siglos. En ese tenor, agregó que el propósito fundamental es que los derechos indígenas constitucionales tengan sus alcances y efectos hacia las mujeres y hombres indígenas, que son iguales ante la ley, como el resto de la población sonorenses, y de manera particular en los procesos de participación política y administrativa del Estado, el derecho que se deriva del Constitucional se interpreta como positivo, y reconoce la personalidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas en Sonora, como entes colectivos y pueden ejercer sus derechos y sus obligaciones; la Constitución las reconoce a como entidades de interés público y omite su limitación de este reconocimiento al sujeto pueblo indígena, y como Poder Legislativo deben sumarse al esfuerzo de reconocer la personalidad a los pueblos y comunidades indígenas en Sonora, para que accedan al desarrollo en todos los aspectos y tengan mejores condiciones de vida y productividad, con pleno reconocimiento y respeto a sus derechos humanos y constitucionales, y de esta forma, la Constitución reconoce sus etnias como sujeto de derecho público, saldando así una deuda histórica. Posteriormente, dio lectura a la:

“LEY

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 21 de la Constitución Política del Estado de Sonora, para quedar como sigue:

ARTICULO 21.- ...

El Estado reconoce a los Pueblos y Comunidades Indígenas la calidad de sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, en sujeción de lo prescrito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás Legislación en la materia.

Los derechos colectivos, que esta Constitución reconoce a Pueblos y Comunidades Indígenas, serán ejercidos directamente por sus Autoridades Tradicionales o por quienes legalmente los representen.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que emitan los Ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente Ley, a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Estado de Sonora en su artículo 163”.

Finalizada la lectura, la presidencia puso a consideración de la Asamblea, la dispensa al trámite de segunda lectura solicitado por la Comisión dictaminadora, y fue aprobado por unanimidad, en votación económica. Siguiendo el protocolo, puso a discusión la ley en lo general y en lo particular; sin que se presentase participación alguna, fue aprobada por unanimidad, en votación económica, dictándose el trámite de: “Aprobada la ley, y comuníquese”.

Y sin que hubiere más asuntos por desahogar, la presidencia clausuró la sesión a las doce horas con treinta minutos, y citó a una próxima a desarrollarse el día jueves, seis de abril de dos mil diecisiete, a las nueve horas.

Se hace constar en la presente Acta, la no asistencia de las diputadas Jaime Montoya Brenda Elizabeth, Lara Moreno Rosario Carolina y López Godínez Lisette, con justificación de la Mesa Directiva.

DIP. MOISÉS GOMEZ REYNA
PRESIDENTE

DIP. FERMIN TRUJILLO FUENTES
SECRETARIO

DIP. JOSÉ ANGEL ROCHÍN LÓPEZ
SECRETARIO

-LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las nueve horas con veintiocho minutos del día seis de abril de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos del Congreso del Estado de Sonora, los ciudadanos diputados Acosta Cid Lina, Ayala Robles Linares Flor, Buelna Clark Rafael, Castillo Godínez José Luis, Dagnino Escobosa Javier, Díaz Brown Ojeda Karmen Aída, Díaz Nieblas Ramón Antonio, Fu Salcido Carlos Manuel, Gomez Reyna Moisés, Guillén Partida Omar Alberto, Gutiérrez Jiménez José Armando, Gutiérrez Mazón María Cristina Margarita, Hernández Barajas Sandra Mercedes, Lam Angulo Juan José, Lara Moreno Rosario Carolina, León García Carlos Alberto, López Cárdenas Célida Teresa, Márquez Cázares Jorge Luis, Ochoa Bazúa Emeterio, Olivares Ochoa Teresa María, Palafox Celaya David Homero, Payán García Angélica María, Rochín López José Ángel, Salido Pavlovich Jesús Epifanio, Sánchez Chiu Iris Fernanda, Serrato Castell Luis Gerardo, Trujillo Fuentes Fermín, Valdés Avilés Ana María Luisa, Villarreal Gámez Javier, y Villegas Rodríguez Manuel; existiendo quórum legal, la presidencia declaró abierta la sesión.

Posteriormente, solicitó al diputado Trujillo Fuentes, secretario, diera lectura a la orden del día; y puesta a consideración de la Asamblea, fue aprobada, por unanimidad, en votación económica.

Seguidamente, informó de la correspondencia:

Escrito del ciudadano Omar Alejandro Tiburcio Cruz, por medio del cual manifiesta a este Poder Legislativo, su intención de ser considerado como aspirante al cargo de Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, para lo cual remite diversas documentales para acreditar el cumplimiento de los requisitos para ser

designado a dicho cargo. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se remite al Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo”.

Escrito del Secretario de Economía del Gobierno del Estado de Sonora, con el cual da respuesta a este Poder Legislativo, en relación al exhorto dirigido al Secretario de Economía del Gobierno del Estado de Sonora, con el objeto de crear una bolsa de trabajo con empresarios de la entidad, que permita atender el incremento en la demanda de fuentes de empleo, ante la posibilidad de una repatriación masiva de connacionales en nuestro Estado. El diputada presidente dio trámite de: “Recibo y se acumula al expediente del acuerdo 288, aprobado por este Poder Legislativo, el día 07 de marzo de 2017”.

Escritos de los Ayuntamientos de los Municipios de Oquitoa, Bácum, Santa Ana, Etchojoa, San Javier, Rayón, Fronteras, Granados, Villa Pesqueira, La Colorada, Sahuaripa, General Plutarco Elías Calles, Nacozari de García, Mazatán, Huásabas, Altar, Rosario, Ures, Villa Hidalgo, Yécora, Banámichi, Atil, Magdalena, San Pedro de la Cueva y Benjamín Hill, Sonora, mediante los cuales remiten a este Poder Legislativo, actas certificadas y acuerdos certificados, en donde consta que dichos órganos de gobierno municipal, aprobaron la Ley número 181, que reforma la fracción III del artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Sonora, la cual tiene por objeto modificar disposiciones de nuestra Ley Fundamental, en relación al requisito de vecindad y residencia para quienes deseen contender al cargo de diputado local; para su debido conocimiento y efectos legales correspondientes. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se acumulan al expediente respectivo”.

Escrito del Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, mediante el cual remite a este Poder Legislativo, acta certificada, en donde consta que dicho órgano de gobierno municipal, aprobó la Ley número 81, que adiciona los párrafos tercero y cuarto al artículo 46; la Ley número 88, que adiciona un párrafo segundo al artículo 163; la Ley número 87, que adiciona los artículos 1° bis y 1° ter y la Ley número 181, que reforma la fracción III del artículo 33 todos de la Constitución Política del Estado

de Sonora. El diputada presidente dio trámite de: “Recibo y se acumula a los expedientes respectivos”.

Escrito del Procurador Ambiental del Estado de Sonora, con el cual da respuesta a este Poder Legislativo, en relación al exhorto que se le hace para que se tomen las medidas necesarias para que se dé cabal cumplimiento a las disposiciones de la Ley para la Protección, Conservación y Fomento del Árbol en las Zonas Urbanas del Estado de Sonora, sobre lo cual informa que dicha Procuraduría ha venido realizando formal invitación desde hace un año, a todos los Ayuntamientos del Estado, para brindar asesoría y capacitación en la realización de los actos de inspección y vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación de infracciones administrativas y sus sanciones, así como procedimientos y recursos administrativos. El diputada presidente dio trámite de: “Recibo y se acumula al expediente del acurdo 296, aprobado por este Poder Legislativo, el día 16 de marzo de 2017”.

Escrito del Director Ejecutivo de la organización Humane Society International-México, mediante el cual ofrece apoyo técnico a esta Soberanía, a fin de tipificar en el Código Penal, el delito de participar y organizar peleas de perros. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se remite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos”.

Escrito de la Presidenta del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el cual remite a este Poder Legislativo, para conocimiento y efectos conducentes, copia del Acuerdo por medio del cual exhortan, respetuosamente, al Poder Ejecutivo Federal, para que, por conducto del Instituto Nacional de Inmigración y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realicen las diligencias pertinentes a efecto de reducir a la mitad del costo actual del permiso de internación al territorio nacional de personas extranjeras que no requieren visa, a efecto de apoyar a los mexicanos radicados en el extranjero que visiten nuevamente nuestro país. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se remite a la Comisión de Asuntos Fronterizos”.

Escrito del ciudadano José Federico Cota Félix, por medio del cual manifiesta a este Poder Legislativo, su intención de ser considerado como aspirante al cargo de Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, para lo cual remite diversas documentales para acreditar el cumplimiento de los requisitos para ser designado a dicho cargo. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se remite al Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo”.

En cumplimiento al punto 4 de la orden del día el diputado Trujillo Fuentes dio lectura a la iniciativa presentada por la mesa directiva de este Congreso Local, con punto de: “**ACUERDO: ÚNICO.-** El Congreso del Estado de Sonora resuelve enviar para su publicación, la Ley número 181, que reforma la fracción III del artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Sonora, en virtud de que ha sido aprobada por 38 ayuntamientos de esta Entidad”.

Seguidamente, la presidencia puso a consideración de la Asamblea la solicitud para declarar el asunto con el carácter de urgente y obvia resolución, y la dispensa al trámite de Comisión, y fue aprobado por unanimidad, en votación económica. Siguiendo el protocolo, puso a discusión el Acuerdo en lo general y en lo particular; sin que se presentare participación alguna, fue aprobado por unanimidad, en votación económica, dictándose el trámite de: “Aprobado el Acuerdo, y comuníquese”.

En cumplimiento al punto 5 de la orden del día, los diputados Dagnino Escobosa y Díaz Nieblas, dieron lectura a su iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora, resolviendo la presidencia turnarla para su estudio y dictamen, a la Comisión de Transporte y Movilidad.

En cumplimiento al punto 6 de la orden del día, el diputado Villegas Rodríguez dio lectura al dictamen presentado por las Comisiones Primera y Segunda de Hacienda, y de Agua, en forma unida, con proyecto de:

“DECRETO

QUE AUTORIZA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE SONORA PARA QUE LLEVE A CABO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN XXII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, Y DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y GASTO PÚBLICO ESTATAL, EL DESARROLLO DEL PROYECTO PARA LA GENERACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA BAJO LA MODALIDAD DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3, FRACCIONES I Y XI DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, QUE CONSISTE EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA PLANTA DESALADORA EN EMPALME, SONORA, POR UN PLAZO DE HASTA 18 (DIECIOCHO) AÑOS 6 (SEIS) MESES A PARTIR DEL INICIO DEL PERIODO DE OPERACIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA O ALIANZA PÚBLICO PRIVADA, Y TRANSFERENCIA DE UNA PLANTA DESALADORA DE AGUA CON EL FIN DE CONTAR CON AGUA POTABLE PARA EL SUMINISTRO A LOS MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, BAJO LA MODALIDAD DE UNA ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA O ALIANZA PÚBLICO PRIVADA A CARGO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE SONORA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 1, 2, 12, 13 Y 14 DE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, Y LOS ARTÍCULOS 1, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19 Y 25 DE LA LEY DE ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS DE SERVICIOS DEL ESTADO DE SONORA, Y LOS CORRELATIVOS A LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza a la Comisión Estatal del Agua de Sonora para que lleve a cabo en términos del artículo 64, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sonora, y del artículo 7 de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, el desarrollo del Proyecto para la generación de inversión pública productiva bajo la modalidad de Alianza Público Privada, en términos del artículo 3, fracciones I y XI de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora, que consiste en la elaboración del proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento, puesta en marcha, operación y mantenimiento de una Planta Desaladora en Empalme, Sonora, por un plazo de hasta 18 (dieciocho) años 6 (seis) meses a partir del inicio del periodo de operación establecido en el contrato de asociación público privada o alianza público privada, y transferencia de una planta desaladora de agua con el fin de contar con agua potable para el suministro a los Municipios de Guaymas y Empalme, Sonora, bajo la modalidad de una asociación público privada o alianza público privada a cargo de la Comisión Estatal de Agua de Sonora en términos de los artículos 1, 2, 12, 13 y 14 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, y los artículos 1, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19 y 25 de la Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de Sonora, y los correlativos a la Ley de Asociaciones Público Privadas.

ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos del artículo 6, fracción I de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y del artículo 24, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, el monto máximo autorizado para el Proyecto, será la cantidad que resulte de sumar:

- (1) La cantidad establecida en el Artículo Tercero Siguiente para cumplir con los términos de los artículos 43 y 44 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; **MÁS**
- (2) La cantidad señalada en el Artículo Cuarto siguiente, la cual podrá ser contingente y estará sujeta a la efectiva prestación de los servicios contratados bajo el contrato de asociación público privada o alianza público privada y ligada al cumplimiento de indicadores de desempeño, penas convencionales y a un mecanismo de deducciones para lograr la correcta prestación de servicios a cargo del desarrollador del Proyecto en favor de la Comisión Estatal del Agua de Sonora.

El monto máximo autorizado bajo el Contrato de Alianza o Asociación Público Privada para el Proyecto será actualizable y/o podrá modificarse conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y/o cualquier otro Índice que resulte aplicable y/o conforme a los mecanismos de variación previstos en la legislación aplicable y/o el Contrato de Alianza o Asociación Público Privada para el Proyecto.

En relación a lo señalado en el párrafo anterior, las modificaciones presupuestales al Contrato de Alianza o Asociación Público Privada estarán sujetas al procedimiento de autorización establecido en el artículo 17 de la Ley de Alianzas Público de Servicios del Estado de Sonora. Por lo anterior, en caso de presentarse un aumento presupuestal sustancial al Contrato de Alianza o Asociación Público Privada, el Ejecutivo del Estado, previa autorización de la Secretaría de Hacienda, deberá solicitar la autorización del Congreso del Estado para realizar la modificación correspondiente.

No obstante lo anterior, el monto máximo de la obligación de la CEA será igual al monto de la contraprestación ofrecida por el licitante ganador del procedimiento de Licitación para adjudicar el Contrato de Asociación Público Privado o Alianza Público Privado para el Proyecto.

ARTÍCULO TERCERO.- Para dar cumplimiento con los artículos 43 y 44 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, del monto máximo autorizado, la cantidad de \$391,165,784.00 pesos en Valor Presente Neto más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente donde sea aplicable, representa una “Obligación” susceptible de ser evaluada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la medición en el Sistema de Alertas. Dicho monto será actualizable y/o podrá modificarse conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y/o cualquier otro Índice que resulte aplicable y/o conforme a los mecanismos de variación previstos en la legislación aplicable y/o el Contrato de Alianza o Asociación Público Privada para el Proyecto.

ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza sujeto al cumplimiento de las previsiones establecidas en el numeral 2, del Artículo Segundo de este Decreto, la cantidad de \$1,220,955,896 pesos en Valor Presente Neto más el Impuesto al Valor Agregado.

Dicho monto se pagará en un plazo de hasta 18 años 6 meses que representa la vigencia del periodo de operación del Proyecto según el Artículo Primero. Asimismo, será utilizado para

realizar pagos bajo el contrato de asociación público privada o alianza público privada, según sea el caso, mismos que estarán sujetos a las contingencias siguientes: **(1)** la efectiva prestación de los servicios contratados para el Proyecto, **(2)** al cumplimiento de estándares de desempeño por servicios, **(3)** aplicación de penas convencionales y **(4)** mecanismo de deducciones para lograr una prestación óptima de los servicios contratados para el Proyecto.

ARTÍCULO QUINTO.- Se aprueba la asignación presupuestal para llevar a cabo el Proyecto, bajo la modalidad de proyectos de asociación o alianza público privada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracciones I y XVIII, 7, 9, y 19 Bis de la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal. Por lo anterior, este H. Congreso deberá aprobar las asignaciones presupuestales suficientes cuyo destino será cumplir con las obligaciones y contingencias de pago bajo dicho contrato de prestación de servicios en la modalidad de Alianza o Asociación Público Privada que documente el Proyecto.

Asimismo, en cumplimiento de la presente autorización, la Comisión Estatal del Agua de Sonora, durante la vigencia del contrato de prestación de servicios en la modalidad de Alianza o Asociación Público Privada que documente el Proyecto, deberá: **(i)** hacer mención especial de las obligaciones que resulten a su cargo conforme al proyecto autorizado y **(ii)** considerar los pagos que deba realizar en cada ejercicio a favor del desarrollador al que se le adjudique el Proyecto.

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado ceder, afectar y comprometer irrevocablemente un porcentaje suficiente y necesario de los derechos de cobro y los ingresos que le correspondan, presentes y/o futuras, derivadas del Fondo General de Participaciones, y/o del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y/o del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y/o aportaciones correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Lo anterior de conformidad con los artículos 2, 4 A, 9, 25, 50, 51, 52 y demás aplicables de la Ley de Coordinación Fiscal, así como cualesquier otro u otros fondos, impuestos, participaciones o derechos que las sustituyan, complementen y/o modifiquen.

1.- La afectación autorizada en este artículo podrá destinarse como garantía y/o fuente alterna de pago de las obligaciones del Proyecto. Además el Estado a su vez queda facultado para usar los fondos de la afectación para constituir en el Fideicomiso del Proyecto o a uno ya constituido al efecto, un fondo de reserva de hasta 3 meses de la contraprestación y a reconstituirlo en caso de ser requerido durante el Proyecto.

2.- La afectación que se autoriza conforme al numeral 1 anterior, podrá transmitirse directamente al fideicomiso que se constituya o a uno ya constituido al efecto o al mecanismo jurídico financiero que se determine para el desarrollo del Proyecto; en el entendido que los beneficiarios, fideicomisarios, cesionarios o causahabientes de dicha afectación podrán ser el desarrollador al que se le adjudique el Proyecto o sus acreedores.

3.- Las afectaciones sobre las participaciones o aportaciones para garantizar la viabilidad financiera del Proyecto se entenderán válidas y vigentes independientemente de que se modifiquen sus denominaciones o se substituyan por uno o varios nuevos conceptos que se

refieran a situaciones jurídicas o de hecho iguales o similares, pero no en detrimento o desventaja, a las que dan origen a los derechos e ingresos cuya afectación se autoriza.

4.- Se autoriza que la afectación de las participaciones y/o afectaciones materia de esta autorización, se inscriban en: **(i)** el Registro Estatal de Deuda Pública en términos del artículo 9, 10 y 13 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y **(ii)** el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos del artículo 23, 25, 49, 50 y 51 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza que se licite el Proyecto en términos de la Ley de Asociaciones Público Privadas en razón fundamental de que la aportación de recursos públicos para la inversión inicial del Proyecto será en mayoría de origen federal, sin que se desatienda la normatividad de la legislación local según resulte aplicable.

La Comisión Estatal del Agua de Sonora deberá asegurarse que se lleven a cabo todas las actividades preliminares a la operación de la planta desaladora en un plazo máximo de 24 meses a partir del inicio de vigencia de este Decreto. Las actividades preliminares comprenderán la licitación, construcción, periodo de pruebas y de pre-operación, así como cualquier actividad previa al inicio de la operación de la planta desaladora.

ARTÍCULO OCTAVO.- La Comisión Estatal de Agua de Sonora deberá formalizar los contratos, convenios y actos necesarios autorizados en el presente Decreto a más tardar en lo que ocurra primero entre: **(i)** el 31 de diciembre de 2018 o **(ii)** en un plazo no mayor a 18 meses, contado a partir de la emisión del fallo a favor del licitante ganador, de lo contrario la presente autorización quedará sin efecto. Derivado de lo anterior se autoriza a la Comisión Estatal del Agua de Sonora para suscribir, entre otros instrumentos, el Convenio de Apoyo Financiero con el Fondo Nacional de Infraestructura para formalizar el otorgamiento del Apoyo No Recuperable en la modalidad de Subvención, en los términos y condiciones que se determinen conjuntamente por las partes, por lo que se autoriza para tales efectos al Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua de Sonora o cualquier otro funcionario competente en términos de la legislación aplicable, para suscribir el Convenio de Apoyo Financiero así como los convenios modificatorios correspondientes, en su caso.

ARTÍCULO NOVENO.- Con objeto de que la ciudadanía participe en la supervisión y vigilancia de la alianza pública privada, el Ejecutivo Estatal creará un comité consultivo, mismo que tendrá como objetivo fundamental fomentar y permitir la participación de los ciudadanos residentes de dichas municipalidades, quienes participarán como observadores en todas las etapas relativas a la licitación, contratación y construcción de la planta desaladora, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios. Así mismo, podrá utilizarse la opción de la participación de un testigo social, de conformidad con la legislación aplicable.

ARTÍCULO DÉCIMO.- Una vez celebrados por la Comisión Estatal del Agua los actos jurídicos necesarios y suficientes para la ejecución de las autorizaciones aquí previstas, la Comisión Estatal de Agua deberá, a más tardar 10 días posteriores a la inscripción del Proyecto en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades

Federativas y Municipios, publicar en su página oficial de internet los instrumentos jurídicos celebrados, para efectos de seguimiento y fiscalización a lo autorizado en base a su solicitud. Asimismo, presentará en los informes trimestrales y en la respectiva Cuenta Pública la información detallada de la Obligación aprobada en el presente Decreto.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- La Comisión Estatal del Agua presentará al Congreso del Estado, en un plazo máximo de 60 días a partir de la aprobación del presente Decreto, un plan detallado para mejorar las eficiencias y sustentabilidad de los sistemas de agua de Guaymas y Empalme, especificando los niveles de extracción de agua previstos para los próximos años.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Por lo anterior, en cumplimiento con el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y previo a un análisis del destino y capacidad de pago del Ente Público, el presente Decreto se autoriza por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura Local de este H. Congreso. En relación con lo anterior, este H. Congreso deberá expedir la constancia que acredita el quórum y el sentido de la votación para este Decreto.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día inmediato siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora”.

Finalizada la lectura, la presidencia puso a consideración de la Asamblea, la dispensa al trámite de segunda lectura solicitado por la Comisión dictaminadora, y fue aprobado por unanimidad, en votación económica. Siguiendo el protocolo, puso a discusión el Decreto en lo general, he hizo uso de la voz el diputado Fu Salcido para decir:

“El Grupo Parlamentario del PAN escuchó la voz de los ciudadanos de Guaymas y Empalme a quienes les urge el abasto de agua en sus comunidades. El Grupo Parlamentario del PAN escuchó a los representantes de Guaymas y Empalme, los presidentes municipales, por lo tanto votará a favor de dicho proyecto para garantizar el abasto de agua potable en la región, el Grupo Parlamentario del PAN hizo propuestas que modificaron de forma importante la Iniciativa original, buscando que haya mejores condiciones para los habitantes de Guaymas y Empalme.

En esas propuestas exigimos que las tarifas de agua no dependan de ese proyecto, cuidando el bolsillo de los ciudadanos, para nosotros era fundamental cuidar el bolsillo de la gente, el Grupo Parlamentario del PAN logró mover el plazo de duración de dicho convenio para la operación de la alianza público-privada de hasta 25 años a 18 años, con lo que se generará un ahorro de 500 millones de pesos a precios actuales aproximadamente: se logró

establecer durante la dictaminación garantías de pagos correspondientes a las participaciones y aportaciones federales únicamente, para lo cual se excluyó como garantía de pago los ingresos locales-estatales a efecto de no comprometer los mismos.

Con fines de transparencia quienes integramos el Grupo Parlamentario del PAN impulsamos la creación de un Consejo Consultivo a través del cual se garantice la participación de los ciudadanos en la supervisión y vigilancia de la alianza público-privada, se logró que se publiquen todos y cada uno de los documentos que se suscriban en este tema en la página oficial de internet de la Comisión Estatal de Agua, para efectos de seguimientos y fiscalización de lo autorizado.

En materia de protección del medio ambiente y en la inteligencia de que habitamos una zona desértica y que debemos cuidar los recursos naturales en beneficio de las generaciones futuras, solicitamos un plan detallado para mejorar la eficiencia y la sustentabilidad de los sistemas de agua de los municipios de Guaymas y Empalme, especificando los niveles de extracción de agua previstos para los próximos años.

Es importante recordar que en el sexenio pasado se trabajó y se avanzó en un plan estatal de infraestructura hidráulica, por lo que es importante que a la par de los proyectos tecnológicos para el abasto de agua se garanticen proyectos para el tratamiento de aguas residuales, así mismo que se habilite la red de distribución de agua en la región Guaymas y Empalme para garantizar que el agua no se desperdicie.

En Sonora por las condiciones de nuestro hábitat no nos podemos dar el lujo de desperdiciar ni una sola gota de agua, por lo anteriormente expuesto quienes integramos el Grupo Parlamentario del PAN votaremos a favor del proyecto de desaladora para el abastecer de agua a Guaymas y Empalme, compañeros es muy importante trabajar en un plan integral de aguas en todo el Estado, que no solamente se encargue de establecer o crear esa infraestructura hidráulica que tanto necesitamos, sino que también que nos ocupemos del tratamiento de las aguas y que no contaminemos el vital líquido”.

Seguidamente, el diputado Lam Angulo dijo:

“Hay una fábula que tiene que moraleja *"nunca digas nunca"*, en México hemos estado actuando y también en Sonora como si algunas cosas no tuvieran fin, siempre estamos actuando muchos ciudadanos o muchos pobladores de este planeta como si el oxígeno nunca se fuera a terminar o el agua nunca se fuera a terminar.

En el caso del agua existen mantos naturales, pero no son una fuente inagotable, por eso soy partidario de que se tienen que explorar nuevas alternativas de fuentes de abasto de agua, ya en otros países se han agotado mantos acuíferos, es una realidad eso y si tenemos lo que es el océano, lo que es el mar, pues hay que meterle tecnología y creo que este dictamen que se está presentando pues viene siendo un inicio de muchas cosas más que se tendrán que hacer para garantizar el líquido vital a todas las poblaciones del Estado de Sonora, debido a esto, que soy un convencido de que hay que explorar nuevas alternativas,

en mi calidad de representante parlamentario del PRD mi voto será a favor de este dictamen, pero quiero aprovechar que está el representante de Conagua, para que le pongan la lupa a la comunidad del "Ejido Lázaro Cárdenas" del municipio de Guaymas, tiene tres meses sin agua y también a la comunidad de "La Águilas" en el municipio de Huatabampo, tiene la misma cantidad de meses por problemas de pago a la CFE, comunidad muy pobre que no pueden resolver solos esta problemática”.

También hizo uso de la voz el diputado León García:

“Los sonorenses y en especial los ciudadanos de Álamos, Empalme, Guaymas y Hermosillo hemos vivido en carne propia lo que es la escasez de agua, sin embargo el problema del agua ha dejado de ser un asunto local y es ya un tema de índole mundial que no solo está amenazando a la economía, sino también a la salud y el bienestar de sus habitantes, una de cada tres personas vive con escasez de agua y en 30 años la mitad de la población mundial sufrirá esta situación

En nuestro país hay 90 millones de mexicanos que viven en escasez de agua, y 20 millones padecen la falta de este vital líquido a lo largo de todo el año; lamentablemente miles de sonorenses se encuentran dentro de esta estadística, el director del programa manejo, uso y re uso de agua de la UNAM, Fernando González Villarreal, alertó sobre la eficiencia de su manejo, administración e inconsciencia del vital líquido, por lo tanto en Movimiento Ciudadano estamos convencidos que el tema relacionado con obras que abastezcan de agua a la población sonorenses debe ser un asunto técnico y tratado con seriedad, no puede de ninguna manera convertirse en un tema político como ha sido abordado históricamente en Sonora, cada vez que se discute una obra de suministro de agua, haya sido desalinadora o acueducto.

Sin agua no podremos construir una perspectiva de futuro, de salud, de desarrollo social y económico, en Movimiento Ciudadano estaremos que el tema del agua no sea un negocio, apoyaremos cada obra que tenga que ver con otorgar el vital líquido a los sonorenses, incluyendo a Hermosillo que en su futuro y debido a su crecimiento no tiene garantizado de manera definitiva su abasto considerando solo el acueducto, mi voto será a favor, apoyar estos proyectos nos permite igualmente exigir y lo haremos un proceso transparente y con reglas claras que delimiten las competencias que tendrá la iniciativa privada al participar en la obra de la desalinizadora, exigiremos también acciones complementarias relacionadas con cultura de agua para disminuir el consumo por habitante, mejoras en la red de distribución para evitar el desperdicio, reutilización del agua tratada y organismos operadores eficientes”.

Seguidamente, el diputado Castillo Godínez expresó:

“Hay un proverbio que dice: “No se aprecia el valor del agua...hasta que se seca el pozo”.

Compañeros diputados, déjenme decirles que en mi región de Guaymas y Empalme, el pozo se secó desde hace muchos años. Como habitante de la región Empalme-Guaymas, les puedo confirmar que la falta de agua es un problema real y urgente.

Tenemos mucha agua de mar pero no tenemos agua potable. Tenemos llaves pero no sale agua. Podemos estar sin luz pero no podemos vivir sin agua. Es desesperante en ocasiones no saber ni siquiera cuando podrás utilizar el agua, porque a veces sale y a veces no.

La falta de agua no es sólo un problema de higiene, también conlleva problemas de salud. La verdad es que quienes padecemos la falta de agua somos los que realmente conocemos su valor. Tener agua no es un lujo es una necesidad vital.

Cuesta tener agua, pero cuesta más no tenerla.

De hecho, en ocasiones quisiéramos que hubiera un tandeo del agua, para así tener la certeza de que se tendrá agua segura al menos durante algunas horas del día.

Es desesperante abrir la llave y que no salga una sola gota de agua, pero ni siquiera el tandeo es ya una solución.

Nuestra realidad es más grave aún. Hay sectores que sufren días completos sin agua. Y en ocasiones, cuando hay agua, ésta es de mala calidad o no existe la presión suficiente para que salga en la cantidad adecuada.

El agua es un motor de desarrollo. Tenemos mucho territorio y escasez de agua, por eso debemos considerar todas las opciones de abasto posible. La desalación de agua de mar sin duda es una de las opciones a considerar.

En el caso concreto, el proyecto de la desaladora viene a resolver este añejo problema de desabasto de agua en los municipios de Empalme y Guaymas.

Queremos reconocer a la gobernadora del Estado por entrarle con todo para resolver este que, seguramente, es el principal problema que enfrentamos en Guaymas y Empalme.

Queremos también reconocer a los diputados integrantes de las comisiones unidas de Hacienda y de la Comisión del Agua por haber dictaminado favorablemente esta alianza público privada para llevar a cabo el proyecto de la desaladora.

Este esquema de alianza público privada vendrá a dar mayor transparencia a este proyecto, además de representar mejores condiciones para llevar a cabo la construcción y operación de esta planta desaladora.

De manera humilde, les pido ahora al resto de mis amigos diputados de este pleno, que nos ayuden con su voto a favor, para que este proyecto sea una realidad.

Hagámoslo en esta ocasión por las familias de Empalme y Guaymas, seguros de que cuando ocupen la mano de su servidor, ahí estaremos para ayudarlos.

TOMAR AGUA NOS DA VIDA, PERO TOMAR CONCIENCIA NOS DARA AGUA”.

A su vez, el diputado Trujillo Fuentes dijo:

“Saludo a las autoridades de la Comisión Estatal del Agua, de la Secretaría de Hacienda, a los medios de comunicación, al público y por supuesto a mis compañeras y compañeros diputados de esta 61 Legislatura.

Si el día de hoy no inscribimos la votación para que se arranque la primera planta desalinizadora en Sonora vamos a cometer un grave error en razón de lo que ha criticado, y bien me parece las fuerzas políticas, de haber madurado durante muchos años el aceptar como lo estamos haciendo aquí todos los grupos y las representaciones políticas a favor de que se haga, sería muy caro la desaladora, el litro de agua si no hay conciencia de lo que vamos a hacer.

Es fundamental inscribirlo en un día histórico para que a partir de este momento se inicie ya con la trascendencia de lo que implica lo que vamos a hacer, porque políticamente todos nos estamos poniendo de acuerdo en un tema que en otros tiempos no pudo alcanzar el consenso de las fuerzas políticas, don Severo Ruiz en paz descansa, fue presidente ejidal de mi pueblo y en 1994 el Rio Sonora venía a sus anchas, al límite de la cordillera, y cuando los ejidatarios se reunieron todo mundo clamaba por sus tierras y don Severo tuvo la magia del viejo de antes para decir, que solamente él creía que solamente el que se andaba ahogando le hacía daño el agua, a todos los demás beneficia el agua.

De ese tamaño es el contar con agua para todos sus usos empezando por el derecho humano, al uso doméstico del agua, a ingerir agua potable y salubre, y quisiera yo igual que como lo hemos hecho en el terreno político aprobando modificar el quórum, el 50-50, y ahorita la vecindad y residencia, hay que reclamarlo como un hecho histórico de la 61 Legislatura, hay que reclamar como un hecho histórico de todos nosotros el combate a la corrupción, la profundización y la transparencia en la rendición de cuentas, en la fiscalización, hay que reclamarlo como un día histórico de la 61 Legislatura, hay que reclamar como un día histórico la dotación que le dimos a la ciudadana gobernadora para hacer el rescate carretero y de caminos, que precisamente motivo de la lluvia.

Cuando llueve aunque nos haga giras caminos y carreteras, una inmensa mayoría de sonorenses salimos a festejar el mensaje de Tlaloc y le damos la bienvenida a la lluvia, al agua que tanto Sonora necesita, y por ello este día quiere Nueva Alianza reclamarlo, dejarlo inscrito como un día histórico para Sonora y para los sonorenses, la construcción de la primera planta desaladora, y muy rápido me voy a ir porque están los funcionarios aquí, a la aceptación de la figura que hemos encontrado en las APP's para hacer posible este desarrollo estratégico, este proyecto estratégico para Guaymas-Empalme y la región, porque no solo rescata el derecho humano a el agua, sino que potencia el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo de capital social y la vida feliz de mis amigas y mis amigos de Guaymas y Empalme; hay que reclamarlo por ello también como histórico, y decir como maestras y maestros que somos.

Compañeros hemos dicho, y aquí está el ingeniero Sergio Ávila, que requerimos acompañar esta gran acción de una propuesta curricular educativa, es fundamental hacer conciencia sobre un recurso que poco tenemos, no vayamos a reclamarnos después que esta gran

acción para una parte geográfica de Sonora, y un núcleo poblacional de 158 mil habitantes, cuando se requiere expandirse, que yo lo veo así, cuando se requiere expandirse, no tengamos diputados peleándose aquí porque no fuimos capaces de apreciar la acción que hicimos hoy, porque no tuvimos la capacidad de decirle a la niñez y juventud mediante un contenido curricular, la exigencia que tenemos de hacer un uso correcto del agua y de otros temas, porque el nuevo modelo educativo permite los contenidos regionales en los Estados.

Ese sería el gran remache de esta 61 Legislatura compañeros, el gran acompañamiento hacia esta decisión, es que en las escuelas de nivel básico públicas y privadas de Sonora, se esté diciendo esto que ahorita se está aprobando y que se esté platicando de las micro cuencas que tiene Sonora, de las vocaciones geográficas y productivas que tiene Sonora, para que provoque y promueva la unidad y no la división.

He de decir que nunca me opuse, ni nos opusimos como partido al Acueducto Independencia, siempre hemos tratado de ser decentes y lo vamos a repetir aquí, pero desde ese entonces dijo Nueva Alianza que había que caminar hacia la desalación, que no podíamos depender de una decisión de la naturaleza, y que no podíamos impedir tampoco los derechos de la región de mis amigas y amigos del sur del Estado, por ello ahora que lo hacemos invito a la conciencia, a la cultura, a la socialización, para que más allá de la 61 Legislatura, siempre que se toque el tema del agua se esté hablando de la unidad de los sonorenses y del progreso de los sonorenses, que esa sea la gran contribución de este día, y que sea para bien Manuel, que sea para bien diputado Castillo, vayan ustedes y lleven la voz de la 61 Legislatura y digan que todos unidos les dimos la manos a favor de su desarrollo, de su derecho y que les vaya muy bien en esto a las autoridades que sea todo un éxito, para que no tengamos impedimento de desarrollarnos a futuro en un detalle que creo que va a ser en una tarea que creo que se va a seguir expandiendo”.

La última intervención en este tema, fue en la voz del diputado Villegas Rodríguez, quien respondió al diputado Trujillo Fuentes que su mensaje será bien recibido por los guaymenses y empalmenses, como un mensaje de unidad por el agua que los une, y agradeció a las fuerzas políticas por la sensibilidad mostrada ante el tema del agua, pues esta obra lleva agua a esos ciudadanos, pero también lleva progreso, por ello lo agradecerá eternamente.

Sin que se presentaren más participaciones, fue aprobado el Acuerdo en lo general, por unanimidad, en votación económica. Siguiendo el protocolo, la presidencia puso a discusión el Decreto en lo particular; sin que se presentare participación alguna, fue aprobado por unanimidad, en votación económica, dictándose el trámite de: “Aprobado el Decreto, y comuníquese”.

Asentado el trámite, la diputada Ayala Robles Linares agradeció a las Comisiones dictaminadoras, a los funcionarios y técnicos tanto de la CEA, de Conagua, de Fonadin, y de la Secretaría de Hacienda que les acompañaron en este proceso y análisis, y dijo que Sonora inicia una nueva era en las tecnologías hidráulicas, a beneficio de los ciudadanos, y sobre todo al desarrollo económico y social.

En cumplimiento al punto 7 de la orden del día, los diputados López Cárdenas, Acosta Cid y Guillén Partida, dieron lectura al dictamen presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de:

“LEY

**QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA DE LAS INSTITUCIONES
POLICIALES DEL ESTADO DE SONORA.**

**TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES**

**CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social, de observancia general en el territorio del Estado de Sonora y tienen por objeto regular el uso de la fuerza pública que ejercen las Instituciones Policiales, en cumplimiento de sus funciones para:

- I.- Salvaguardar la integridad, los derechos y bienes de las personas;
- II.- Preservar las libertades, el orden y la paz públicos y la seguridad ciudadana;
- III.- Prevenir la comisión de delitos e infracciones; así como,
- IV.- Investigar y perseguir los delitos del orden común;

La interpretación de esta Ley será de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así como las demás leyes aplicables, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas.

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I.- Agencia Ministerial de Investigación Criminal: Los servidores públicos dependientes de la Fiscalía General del Estado de Sonora con las facultades previstas en la Ley Orgánica de ésta;

II.- Arma: cualquier instrumento que pueda ser utilizado para repeler una agresión de un infractor de la ley;

III.- Armas de fuego: las autorizadas para el uso de las Instituciones Policiales en el uso de la Fuerza Pública del Estado de Sonora, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento;

IV.- Armas incapacitantes no letales: son aquellas que por su naturaleza no ocasionan lesiones que puedan poner en riesgo la vida garantizando una defensa eficaz ante la agresión;

V.- Armas letales: Las que se utilizan ante una amenaza o agresión que pueda ocasionar lesiones graves o la muerte;

VI.- Centros Penitenciarios: A los Centros de Reclusión Preventiva o de reinserción social;

VII.- Comisión: La Comisión de Registro, Control y Supervisión del Uso de la Fuerza Pública de las Instituciones Policiales del Estado de Sonora;

VIII.- Detención: A la restricción de la libertad de una persona por el integrante de las Instituciones Policiales del Estado de Sonora, con el fin de ponerla a disposición de la autoridad competente. La detención se presenta en el cumplimiento de una orden de aprehensión, de arresto, de presentación o, en su caso, por flagrancia, a petición de parte ofendida o cualquier otra figura prevista por las leyes y reglamentos aplicables;

IX.- Fiscalía: La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora;

X.- Fuerza Pública: Acto de fuerza del Estado, que ejerce un determinado acto de autoridad; A través de los integrantes de las Instituciones Policiales, inherente a la función de seguridad pública, sujeto a los mandatos y límites constitucionales que rigen para los actos de autoridad;

XI.- Instalaciones Estratégicas: Inmuebles ubicados en el Estado de Sonora que sean designados como tales en la declaratoria que emita el Poder Ejecutivo Estatal, por ser de vital importancia para la seguridad pública y que en caso de ser afectados se ponga en peligro el orden y la paz públicos, En ellos se deberá realizar funciones de Gobierno, Administración Pública y siempre que:

a) Sean empleados para el servicio público de transporte masivo de pasajeros o de mercancías de importancia para la economía del Estado de Sonora;

b) Sean utilizados como centros culturales y artísticos, escuelas, museos, teatros, centros de convenciones y demás inmuebles en que se celebren espectáculos masivos de naturaleza educativa, pedagógica, artística o cultural;

c) Sean monumentos bajo el cuidado del Gobierno del Estado de Sonora, federal o locales;

d) Se trate de instalaciones de comunicaciones o telecomunicaciones de competencia federal y local; o

e) Se consideren como tales por el Gobierno, a pesar de no encontrarse en los supuestos de los incisos anteriores, para lo cual deberá motivar debidamente su determinación.

XII.- Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Sonora: Aquellas que dependen de la Administración Pública del Estado y los Ayuntamientos de Sonora y con mando jerárquico directo sobre las Instituciones Policiales encargadas de:

a) Prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción;

b) La investigación y persecución de los delitos; y

c) La custodia de los establecimientos penitenciarios, centros de reinserción social así como los de detención preventiva.

XIII.- Instituciones Policiales: Los cuerpos de policía en el ámbito estatal y municipal, preventivo, vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, centros de reinserción social o detención preventiva;

XIV.- Integrante de Instituciones Policiales: A quien desempeñe funciones de carácter estrictamente policial vinculadas con la investigación, prevención o reacción, vigilancia y custodia de conformidad con la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora;

XV.- Ley: Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública de las Instituciones Policiales del Estado de Sonora;

XVI.- Ley General: Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

XVII. Policía Estatal Preventiva: Los servidores públicos dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública con funciones de prevención de los delitos y las infracciones administrativas así como de reacción;

XVIII.- Protocolo de Primer Respondiente: El protocolo nacional de actuación denominado Protocolo de Primer Respondiente, emitido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública;

XIX.- Reglamento: El Reglamento de la presente Ley;

XX.- Resistencia pasiva: Cuando una persona se niega a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por el integrante de las Instituciones Policiales del Estado de Sonora, quien previamente sea identificado como tal;

XXI.- Resistencia violenta agravada: Cuando las acciones u omisiones de una persona representan una agresión real, actual o inminente dañando a terceros; o en su caso del Integrante de las Instituciones Policiales del Estado de Sonora, a efecto de impedir que sea detenido;

XXII.- Resistencia violenta de una persona: cuando una persona realiza acciones u omisiones con el propósito de provocar lesiones a sí mismo, a un tercero o al Integrante de las Instituciones Policiales del Estado de Sonora o con el fin de dañar bienes propios o ajenos, a efecto de impedir que sea detenido;

XXIII.- Secretario: El Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora;

XXIV.- Sometimiento: la contención que el Integrante de las Instituciones Policiales del Estado de Sonora, ejerce sobre los movimientos de una persona con el fin de asegurarla; y

XXV.- Uso legítimo de la fuerza pública: La aplicación de técnicas, tácticas y métodos de sometimiento sobre las personas de conformidad con la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, demás disposiciones de esta Ley, así como en otras disposiciones aplicables en la materia.

Para efectos de la fracción XIII del presente artículo, no se considerarán instituciones policiales de fuerza pública a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, dependiente del organismo constitucional autónomo denominado Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Su actuación en el marco de esta Ley será para investigar y conocer de delitos en el ámbito de su competencia, pero no tendrán intervención alguna en protocolos de actuación o uso de la Fuerza Pública.

Artículo 3.- Todo Integrante de las Instituciones Policiales tiene derecho a la protección de su vida e integridad física, al respeto a su dignidad como ser humano y autoridad, por parte de sus superiores y de la ciudadanía.

Además, desempeña un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, por lo que es obligación de las Instituciones de Seguridad Pública proporcionarle la atención médica, psicológica y jurídica que, en su caso, requiera.

Artículo 4.- Las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Sonora, así como los municipios, podrán contratar los servicios profesionales de personas morales y/o físicas especializadas para brindar apoyo, asesoría y representación jurídica a los Integrantes de las mismas, que por motivo del cumplimiento de su deber se involucren en averiguaciones previas o procedimientos judiciales.

TÍTULO SEGUNDO CLASIFICACIÓN DE LAS ARMAS

CAPÍTULO ÚNICO CLASIFICACIÓN DE LAS ARMAS

Artículo 5.- Las Instituciones Policiales asignarán las armas solamente al Integrante que hubiere aprobado la capacitación establecida para su uso y además aprobasen las pruebas de control y confianza, y éste a su vez, sólo podrá usar las armas que le hayan sido asignadas. A fin de disminuir la necesidad de utilizar armas de cualquier tipo, es obligación de las Instituciones de Seguridad Pública, de conformidad con sus funciones, dotar a los elementos de las Instituciones Policiales del equipo necesario para su protección, acorde con la función que desempeñan.

Artículo 6.- Los Integrantes de las Instituciones Policiales podrán tener a su cargo y portar, entre otras, las siguientes armas:

I.- Incapacitantes no letales:

- a) Bastón PR-24, tolete o su equivalente, de acuerdo a las disposiciones aplicables;
- b) Esposas;
- c) Sustancias irritantes en aerosol; y

II.- Letales:

- a) Armas de fuego.

Artículo 7.- Las Instituciones de Seguridad Pública conforme a las características que se establezcan en las disposiciones jurídicas aplicables, deberán contar con una base de datos que contenga el registro detallado de las huellas y las características que impriman a los proyectiles u ojivas, las estrías o rayado helicoidal de las armas de fuego bajo su resguardo; así como de las armas y equipo asignado a cada Integrante de dichas Instituciones Policiales.

TÍTULO TERCERO USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA PÚBLICA

CAPÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 8.- Los Integrantes de Instituciones Policiales, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego.

Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.

Artículo 9.- El Integrante de Instituciones Policiales no empleará armas de fuego contra las personas, salvo en los siguientes casos y siempre que se respeten los principios referidos en el artículo 10 de la presente Ley:

- I. En legítima defensa o de otras personas;
- II. En caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves;
- III. Con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida;
- IV. Con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad; y
- V. Para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos.

En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.

El Integrante de las Instituciones Policiales se identificará como tal y dará una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta por parte de la o las personas a las que se dirige la advertencia, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los integrantes de las Instituciones Policiales, se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso.

Artículo 10.- Los principios que se deben de observar en el uso de la fuerza son los siguientes:

- I.- Legalidad: Que su acción se encuentre dirigida a lograr un objetivo legítimo, y estrictamente apegada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que México forme parte, la presente Ley, Constitución Política del Estado de Sonora, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora y a los demás ordenamientos aplicables;
- II.- Absoluta Necesidad: Comprende la posibilidad de recurrir a las medidas de seguridad ofensivas y defensivas estrictamente necesarias para el cumplimiento de las órdenes legítimas impartidas por la autoridad competente ante hechos violentos o delictivos que pongan en riesgo el derecho a la vida o la integridad personal de cualquier habitante;
- III.- Proporcionalidad: Prescribe la generación de un daño excesivo por parte de los agentes del orden público al momento de recurrir a la fuerza. Es decir, requiere que el bien u objetivo legítimo que se pretenda alcanzar se compare con la amenaza planteada;

IV.- Rendición de cuentas: Implica la adopción de medidas necesarias para que se castigue el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los Integrantes de las Instituciones Policiales;

V.- Prevención: Consistente en que su acción será tendente a evitar situaciones violentas o restrictivas de derechos, en la medida de lo posible considerando las circunstancias del caso;

VI.- Racionalidad: Que para el uso de la fuerza pública exista una vinculación entre el fin y el medio utilizado, pues la forma y el grado de fuerza con que se ejecute debe ser, luego de la respectiva y previa valoración de las alternativas disponibles, la que se debió haber considerado pertinente e instrumental para el cumplimiento de los fines inmediatos y mediatos que se persigan con la acción, siempre que esté justificado por las circunstancias específicas y acordes a la situación que se enfrenta:

a) Cuando es producto de una decisión que valora el objetivo que se persigue, las circunstancias del caso y las capacidades tanto del sujeto a controlar, como del Integrante de las Instituciones Policiales;

b) Cuando sea estrictamente necesario en la medida en que lo requiera el desempeño de las tareas del Integrante de las Instituciones Policiales;

c) Cuando se haga uso diferenciado de la fuerza pública;

d) Cuando se usen en la medida de lo posible los medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza pública y de las armas;

e) Cuando se utilice la fuerza pública y las armas solamente después de que otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.

VII.- Congruencia: Cuando exista relación y equilibrio entre el nivel de uso de fuerza pública utilizada y el detrimento que se cause a la persona, es decir, sólo se deberán restringir los derechos que resultan atinentes al caso, velando porque los demás no resulten violentados; y

VIII.- Oportunidad: Consistente en que se aplique el uso de la fuerza pública de manera inmediata para evitar o neutralizar un daño o peligro inminente o actual, que vulnere o lesione la integridad, derechos o bienes de las personas, las libertades, la seguridad ciudadana o la paz pública.

Ningún Integrante de las Instituciones Policiales podrá ser sancionado por negarse a ejecutar una orden notoriamente inconstitucional o ilegal, o que pudiera constituir un delito. Toda orden con estas características deberá ser reportada por escrito al superior jerárquico inmediato de quien la emita. Con relación a lo establecido en el artículo 157 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora.

Los motivos por los cuales se da la intervención de las Instituciones Policiales, por lo que se refiere al tipo del delito o de orden a cumplir, no justifican por sí mismo el uso de las armas letales o fuerza letal, inclusive si los delitos de que se trate hayan sido violentos.

Artículo 11.- El Integrante de las Instituciones Policiales podrá hacer uso de la fuerza pública, siempre y cuando se respeten los principios referidos en el artículo 10 de la presente Ley, en las siguientes circunstancias:

I.- Someter a la persona que se resista a la detención ordenada por una autoridad competente o luego de haber infringido alguna Ley o Reglamento;

II.- Cumplimiento de un deber o las órdenes lícitas giradas por autoridades competentes;

III.- Prevenir la comisión de conductas ilícitas;

IV.- Proteger o defender bienes jurídicos tutelados; o

V.- Por legítima defensa.

Artículo 12.- Los distintos niveles en el uso legítimo de la fuerza pública son los siguientes:

I.- Persuasión o disuasión verbal, a través de la utilización de palabras o gesticulaciones, que sean catalogadas como órdenes, y que con razones permitan que la persona facilite al Integrante de las Instituciones Policiales el cumplimiento de sus funciones;

II.- Reducción física de movimientos, mediante acciones cuerpo a cuerpo con objeto de someter a la persona que se ha resistido y ha obstaculizado que el Integrante de las Instituciones Policiales cumpla con sus funciones;

III.- Utilización de armas incapacitantes no letales, a fin de someter la resistencia violenta de una persona; y

IV.- Utilización de armas de fuego o de fuerza letal, a efecto de someter la resistencia violenta agravada de una persona.

Artículo 13.- El Integrante de las Instituciones Policiales deberá actuar de la siguiente forma, cuando haga uso de la fuerza pública:

I.- No debe usar la fuerza pública con fines de venganza o con propósito de intimidación; y

II.- Si por el uso de la fuerza pública, alguna persona sufre lesiones o muerte, el integrante de las Instituciones Policiales que hizo uso de la fuerza pública o el responsable del operativo, en su caso, procederán de la siguiente forma:

a) De forma inmediata, realizará las acciones necesarias para que se preste atención médica a las personas lesionadas;

- b) Procurará la preservación del lugar en que ocurrieron las lesiones o la muerte, proveyendo para que no sea alterado, en todo lo que no se contraponga al inciso anterior;
- c) Realizará el informe a que se refiere el artículo 42 de esta Ley, dentro de un plazo máximo de 12 horas; y
- d) Informará de las lesiones o muerte al Ministerio Público más cercano al lugar donde aconteció el incidente.

En caso de que el integrante de las Instituciones Policiales no pueda dar cumplimiento a las anteriores obligaciones por encontrarse herido, hospitalizado o asegurado por autoridad ministerial, a la brevedad el superior jerárquico del mismo designará a otro integrante para que les dé cumplimiento.

Una vez que desaparezca el impedimento del integrante de las Instituciones Policiales, rendirá el informe a que se refiere el inciso c) anterior.

Artículo 14.- El Integrante de las Instituciones Policiales obra en legítima defensa cuando repele una agresión real, actual o inminente, en la protección de bienes jurídicos tutelados, siempre que exista necesidad en la defensa, racionalidad y proporcionalidad en los medios empleados.

La persuasión o disuasión verbal realizada por el Integrante de las Instituciones Policiales en cumplimiento de sus funciones, de conformidad con lo establecido en la Ley y demás disposiciones aplicables, no constituyen provocación dolosa.

Artículo 15.- No se autoriza el uso de armas letales en contra de vehículos o personas que huyan o traten de huir de una inspección de carácter administrativo, a pesar de que existan sospechas fundadas, debiéndose concretar los Integrantes de las Instituciones Policiales a realizar la persecución física.

En situaciones en que el conductor de un vehículo haga caso omiso a las indicaciones para detener su marcha en un puesto de control, solamente se podrá emplear armas letales en respuesta a una agresión armada que represente peligro inminente de lesiones graves o muerte, o cuando el presunto infractor intente colisionar con su vehículo a los Integrantes de las Instituciones Policiales.

En cualquier otra circunstancia, se intentará detener la marcha del vehículo empleando equipo incapacitante no letal, procediendo a realizar la persecución física si la situación así lo permite.

CAPÍTULO II DE LAS REGLAS PARA LA DETENCIÓN

Artículo 16.- Las detenciones en flagrancia o en cumplimiento de órdenes giradas por la autoridad administrativa, ministerial o judicial deben realizarse de conformidad con lo

establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Penal del Estado de Sonora, Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora, esta Ley y las demás disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 17.- Para realizar la detención de una persona, el Integrante de las Instituciones Policiales deberá observar las siguientes reglas:

- I.- Evaluar la situación para determinar inmediatamente el nivel de fuerza que utilizará;
- II.- Comunicar por radio o cualquier otro medio de comunicación de inmediato las razones por las cuales la persona será detenida;
- III.- Comunicar a la persona detenida ante qué autoridad competente será puesta a disposición y solicitar que personas de su confianza que se encuentren en el lugar la acompañen para su puesta a disposición;
- IV.- Poner a la persona detenida a disposición de la autoridad competente; y
- V.- Respetar en todo momento las garantías individuales de las personas motivo de la detención como son los derechos a no ser discriminado, a la tutela de su vida e integridad física, a su libertad sexual y respeto a su cuerpo, a no ser objeto de tortura, a preservar los bienes de su propiedad, a una defensa adecuada y cualquier otro que no sea necesariamente restringido para permitir el uso legítimo de la fuerza pública en la detención.

Artículo 18.- Cuando el Integrante de las Instituciones Policiales, en la detención de una persona ejercite el uso de la fuerza pública, deberá atender lo siguiente:

- I.- Procurar ocasionar el mínimo daño posible a la persona susceptible de detención y velar por el respeto a la vida e integridad física y emocional;
- II.- Utilizar de forma racional, subsidiaria y proporcional, los distintos niveles del uso de la fuerza pública, conforme al siguiente orden:
 - a) Persuasión o disuasión verbal;
 - b) Reducción física de movimientos;
 - c) Utilización de armas incapacitantes no letales; y
 - d) Utilización de armas de fuego; y
- III.- No exponer a la persona sometida a golpes o lesiones, tratos denigrantes, constitutivos de tortura o de abuso de autoridad.

Artículo 19.- Cuando el Integrante de las Instituciones Policiales utilice la reducción física de movimientos para lograr la detención de una persona observará los siguientes criterios:

I.- Se utilizarán cuando la persuasión o disuasión verbal no haya causado los efectos necesarios para el ejercicio de sus funciones;

II.- Usará la técnica que produzca el menor daño posible a la persona y a terceros; y

III.- Inmediatamente al sometimiento de la persona, la asegurará a fin de que no presente algún peligro para sí misma, para el Integrante de las Instituciones Policiales o para terceros.

Artículo 20.- El Integrante de las Instituciones Policiales utilizará armas incapacitantes no letales para impedir que la persona que se intenta someter se produzca un daño mayor a sí misma, a ésta o a otras personas y poder trasladar a la persona sometida ante la autoridad correspondiente.

Artículo 21.- En caso de que la persona que se intenta someter oponga resistencia utilizando objetos que pudieran considerarse un arma, conforme a los principios establecidos en el artículo 10 de la presente Ley y lo establecido en el Código Penal del Estado Sonora, el Integrante de las Instituciones Policiales Estatales y Municipales, seguirá el siguiente procedimiento, siempre que las circunstancias lo permitan:

I.- Utilizar los distintos niveles de uso de la fuerza pública, para:

a) Tratar de disminuir la actitud agresiva de la persona; y

b) Conminar a la persona a apartarse de la posesión del arma;

II.- Inmovilizar y someter a la persona;

III.- Retirar inmediatamente el arma que se encontraba en posesión de la persona sometida, para evitar daños o lesiones a sí misma, al Integrante de las Instituciones Policiales o a terceros;

IV.- Remitir inmediatamente a la persona y el arma a la autoridad competente; y

V.- Realizar los informes que ordena esta Ley y demás aplicable en la materia.

Artículo 22.- En caso de la utilización de armas letales, conforme a los principios establecidos en el artículo 10 de la presente Ley, el Integrante de las Instituciones Policiales deberá velar por la vida e integridad física de la persona que se somete a la detención, considerando en todo momento las reglas de la legítima defensa, garantizando el menor daño posible a la persona que se intenta someter y considerando la seguridad de terceros y del propio Integrante de las Instituciones Policiales.

El Integrante de las Instituciones Policiales sólo empleará armas de fuego en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y

oponga resistencia, y sólo en el caso que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos.

En el caso mencionado en el párrafo que antecede el Integrante de las Instituciones Policiales se identificará como tal y dará una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso.

Artículo 23.- En la detención y traslado respectivo ante la autoridad competente, el Integrante de las Instituciones Policiales podrá utilizar las esposas. En todo caso, deberá asegurarse a la persona con el menor daño posible a su integridad física y emocional.

Artículo 24.- En el uso de las esposas, el Integrante de las Instituciones Policiales deberá:

I.- Manipularlas exclusivamente para someter a una persona, en caso de que no se haya logrado tal objetivo con la persuasión o disuasión verbal o con la reducción física de movimientos;

II.- Utilizarlas, en su caso, para el aseguramiento de una persona;

III.- Utilizar de forma correcta y exclusivamente las que le hayan sido asignadas por la Institución Policial a la que pertenezca;

IV.- Incluir en todo parte informativo, documento o Informe Policial Homologado que acredite la puesta a disposición ante autoridad competente, las circunstancias que hicieron necesario el aseguramiento de la persona por dicho nivel de fuerza pública;

V.- Cerciorarse de que no ejerzan presión innecesaria sobre la persona;

VI.- Abstenerse de usar fuerza física o cualquier otro medio de coerción sobre la persona inmovilizada;

VII.- En caso de traslado de la persona, colocarle el cinturón de seguridad del vehículo durante éste; y

VIII.- Utilizarlas durante el tiempo estrictamente necesario, retirándolas inmediatamente a la puesta a disposición de la autoridad competente.

Artículo 25.- La detención de personas incluirá las siguientes obligaciones para el Integrante de las Instituciones Policiales, una vez que ha sometido a la persona para su traslado en relación a lo establecido en los artículos 131, 251, fracción IX y 269, párrafo III del Código Nacional de Procedimientos Penales:

I.- Informar el motivo de la detención;

II.- Hacer expresamente de su conocimiento, el derecho a permanecer callado si así lo desea, durante el traslado;

III.- Comunicarle directamente, así como a familiares o conocidos que estén presentes, el lugar donde se trasladará; y

IV.- Informar sobre el derecho a ser asistido por un abogado o persona de su confianza. Asimismo, el protocolo preverá la obligación del Integrante de la Institución Policial, correspondiente de respetar los Derechos Humanos de las personas detenidas, incluyendo su dignidad e integridad física y moral, especialmente en el caso de las mujeres.

Artículo 26.- El uso de armas letales será siempre la última y extrema posibilidad, cuando no sea posible la utilización de otro nivel de fuerza pública, o en su caso, que hayan sido inoperantes los anteriores niveles de fuerza pública. En su caso, se podrán considerar previo a la utilización de otros niveles de fuerza pública, si la circunstancia lo amerita y se cumple debidamente con lo que establecen los principios referidos en el artículo 10 de esta Ley.

Para el uso de las armas letales, el Integrante de las Instituciones Policiales deberá determinar de forma racional que no se estaba en posibilidad de actuar en otra opción y que se encontraba en grave peligro la vida o seguridad de terceros o la del propio integrante.

CAPÍTULO III DE LAS REGLAS PARA MANTENER LA PAZ PÚBLICA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA

SECCIÓN I EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN CASOS DE RIESGO INMINENTE

Artículo 27.- En caso de incendios, inundaciones, sismos, huracanes u otras situaciones de riesgo inminente en el que existan situaciones graves que pongan en peligro la vida o la integridad física de las personas, la policía preventiva y demás corporaciones que pertenezcan al Sistema Estatal y Nacional de Seguridad Pública, en caso de que sea necesario usarán la fuerza pública para evacuar a alguna persona. Lo anterior, sin perjuicio de lo señalado por la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora y el artículo 155, fracción III de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora.

Artículo 28.- La Institución Policial a que pertenecen las policías preventivas municipales y Estatal Preventiva, se coordinarán con las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y Marina así como con la Secretarías de Gobierno y de Protección Civil, ambas del Gobierno del Estado afectadas con el evento, de conformidad con las siguientes reglas:

I.- Se identificará a la persona o personas y se les informará sobre la situación a fin de intentar convencerlas para que abandonen los lugares de riesgo; y

II.- Se utilizarán de forma racional, subsidiaria y proporcional, los distintos niveles del uso de la fuerza pública, sin llegar a utilizar las armas letales y conforme a lo establecido en la presente Ley.

SECCIÓN II EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN REUNIONES PÚBLICAS

Artículo 29.- Le corresponde al Integrante de las instituciones Policiales facilitar las protestas y salvaguardar la seguridad tanto de los manifestantes como la de terceros y, de ser necesario, controlarlas.

Para los efectos de este artículo corresponde exclusivamente a los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y/o Municipal, intervenir en los casos y bajo las hipótesis previstas en esta Ley. La Agencia Ministerial de Investigación Criminal e integrantes en general de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no podrá participar, intervenir, actuar, ejecutar o interactuar bajo ninguna circunstancia en actos o acciones que impliquen el uso de la Fuerza Pública conforme lo regulado en esta Sección.

En cuanto al control de las manifestaciones y la posibilidad del uso de la fuerza, así como su graduación, deberá diferenciarse entre las siguientes:

I.- En caso de reuniones lícitas y pacíficas, no podrá utilizarse ningún tipo de fuerza.

II.- En caso de una reunión ilícita pero no violenta, y si hay razones fundadas para poner fin a tal manifestación, sólo podrá usarse la mínima fuerza necesaria. Consecuentemente, está estrictamente prohibido el uso de la fuerza letal.

III.- En caso de reuniones violentas se deberá emplear, de no existir medios menos lesivos, la mínima fuerza posible y sólo se podrán utilizar armas de fuego. Lo anterior, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves y cuando resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. No está permitido disparar indiscriminadamente a la multitud.

Se entiende que una concentración de personas se refiere a la señalada en la fracción III del presente artículo cuando haya concurrencia real de actos delictivos, y la existencia o inminente amenaza de violencia o actos que inciten a la materialización real de discriminación y discurso de odio.

Artículo 30.- Para el control y dispersión de una reunión pública violenta, el Titular de la Institución Policial designará a un integrante de la misma, encargado del operativo respectivo, quien deberá:

I.- Conminar a las personas que realizan la reunión pública violenta a que desistan de su actitud;

II.- Advertir claramente que de no cesar la actitud violenta, se usará la fuerza pública;

III.- En caso de que los las personas que realizan la reunión pública ilegal no atiendan al Integrante de la Institución Policial encargado del operativo, esté ordenará el uso de la fuerza pública, conforme a lo establecido en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora, la presente Ley y su Reglamento; y

IV.- Ejercitar los distintos niveles de uso de la fuerza pública, solamente hasta el relativo a la utilización de armas incapacitantes no letales.

Se considera que una reunión pública es violenta cuando el grupo de personas de que se trata se encuentra armado o bien en la petición o protesta que se realiza ante la autoridad, se hace uso de amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que deseen, se atenta contra los derechos de otras personas, se provoca la comisión de un delito o se perturba la paz pública y la seguridad ciudadana.

Artículo 31.- La Institución Policial, una vez que sea notificada de la realización de una reunión pública, planeará con la Secretaría de Seguridad Pública, los operativos necesarios para garantizar el ejercicio de este derecho, para proteger los de terceros y para reaccionar adecuadamente en caso de que la manifestación se torne violenta.

Artículo 32.- Los operativos ante los casos de una reunión pública deberán atender los principios establecidos en esta Ley, las reglas contenidas en el Reglamento y los manuales y protocolos emitidos por los Titulares de las Instituciones Policiales, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, a propuesta del Secretario, y además procurarán cumplir con lo siguiente:

I.- La determinación del mando responsable del operativo;

II.- La definición de los servidores públicos de la Secretaría de Gobierno y otras áreas de la Administración Pública del Estado responsables de las comunicaciones y negociaciones con las personas que realizan la reunión pública;

III.- El análisis del historial y otros factores de riesgo para el desarrollo pacífico de la reunión pública;

IV.- La estrategia para repeler acciones violentas de las personas que realizan la reunión pública en caso de que la manifestación se torne violenta;

V.- Las armas incapacitantes no letales y equipos especiales para el control de reuniones públicas que deberán emplearse en el operativo;

VI.- Las tácticas para aislar a las personas que dentro de una reunión pública se comporten de manera violenta; y

VII.- Las demás operaciones policiales necesarias para restablecer la paz pública y la seguridad ciudadana. En este caso, se deberán evitar las tácticas provocadoras y en todo

momento, se deberán adoptar estrategias de protección a las libertades y derechos humanos, mismas que deberán ser humanitarias, eficaces y rápidas.

Las mismas reglas se seguirán cuando las Instituciones Policiales actúen en coadyuvancia con Cuerpos Policiales Federales, en el control de reuniones públicas competencia del Gobierno de la República, conforme a las leyes federales de la materia.

Artículo 33.- Cuando las Instituciones Policiales brinden apoyo a las autoridades administrativas o judiciales Federales, así como autoridades municipales para el cumplimiento de sus funciones en relación con desalojos, lanzamientos, embargos o ejecución de resoluciones, planearán con anticipación y conforme a las reglas y principios que se fijen en el Reglamento, los operativos que se requieran, los cuales deberán cumplir con lo siguiente:

- I.- Determinación del mando responsable del operativo;
- II.- La estrategia necesaria para controlar una eventual resistencia;
- III.- Los procedimientos para que las acciones policiales causen el menor daño posible a las personas;
- IV.- Las armas incapacitantes no letales y equipos especiales para el control de personas que deberán emplearse en el operativo;
- V.- Las acciones secundarias para el reforzamiento de la seguridad y las garantías; y
- VI.- Las demás operaciones policiales necesarias para restablecer la paz pública y la seguridad ciudadana en caso de resistencia violenta.

En este caso, se deberán evitar las tácticas provocadoras y en todo momento, se deberán adoptar estrategias de protección a las libertades y derechos humanos, mismas que deberán ser humanitarias, eficaces y rápidas.

Artículo 34.- Las Instituciones Policiales sólo podrán adscribir policías en las instalaciones estratégicas del ámbito local del Estado de Sonora cuando estén especialmente capacitados en técnicas de control de situaciones de riesgo en relación a la impartición de la fuerza pública, control de crisis y empleo de armas incapacitantes no letales y letales.

En relación a las instalaciones estratégicas del ámbito local del Estado de Sonora, las Instituciones Policiales están obligadas a aplicar los protocolos de actuación policial emitidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para la guarda, custodia y protección de las personas y los bienes, que contemplen, por lo menos los siguientes aspectos:

- I.- Especificación, por cada instalación, sobre las armas que deben portar los policías. Sólo se les podrá dotar de armas letales cuando su uso no ponga en mayor peligro a las personas que encuentran en la instalación estratégica;

II.- Prevención y atención de situaciones en que el sujeto que presenta la resistencia tome rehenes;

III.- Prevención y atención de situaciones en que, mediante el uso de explosivos o actos terroristas, se ponga en peligro a la totalidad de la instalación estratégica del ámbito local del Estado de Sonora y de las personas que se encuentran en el mismo;

IV.- Prevención y atención de situaciones de crisis diferentes a las contempladas en las dos fracciones anteriores, resguardando en todo momento la vida, derechos y bienes de las personas; y

V.- Procedimientos para la generación, procesamiento y empleo de productos de inteligencia, relacionadas con la seguridad y preservación de las instalaciones estratégicas.

La policía y distintas corporaciones o los elementos de seguridad privada que se utilicen para la guarda y custodia de instalaciones estratégicas del ámbito local del Estado de Sonora deberán cubrir el perfil y atender las obligaciones establecidas en el presente numeral y atendiendo al apartado correspondiente a la Ley de Seguridad Pública en el Estado de Sonora y la normatividad aplicable.

SECCIÓN III DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE REINSERCIÓN SOCIAL

Artículo 35.- Las acciones de custodia y seguridad de los internos así como de prevención de delitos e infracciones dentro de los Centros Penitenciarios o Centros de Reinserción Social, solo podrán encomendarse a los Integrantes de Seguridad y Custodia de los Centros de Reinserción Social, en términos de las demás leyes aplicables.

Cuando los integrantes de las Instituciones de Seguridad y Custodia de los Centros de Reinserción Social a que se refiere el párrafo anterior deban ejercitar la fuerza pública, lo harán siguiendo los imperativos contenidos en el Título Tercero, Capítulo Tercero, secciones I y II de esta Ley.

Artículo 36.- Sólo en caso de extrema urgencia o ingobernabilidad de un determinado Centros Penitenciarios o Centros de Reinserción Social, la Secretaría de Seguridad Pública podrá intervenir conforme a los protocolos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las acciones determinadas en esta Ley. La Secretaría podrá solicitar, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado la intervención de las Instituciones Policiales Federales para atender labores preventivas, de control urgente o de restablecimiento de la gobernabilidad u orden.

Artículo 37.- En caso de motín en Centros Penitenciarios o Centros de Reinserción Social, se procederá conforme a lo siguiente para restablecer el orden:

I.- Se conminará a los internos que realizan el motín a que desistan de su actitud violenta, pudiéndose reunir las autoridades del Gobierno local y del Centro Penitenciario, según corresponda, con el o los dirigentes de estas acciones, para negociar una solución pacífica;

II.- En el transcurso de las negociaciones se informará a los internos sujetos a tratamiento en internación, las consecuencias legales de su actuar, así como su obligación de no incurrir en otros delitos contra las personas, sean otros internos, civiles o autoridades, o contra las propiedades particulares o del Estado;

III.- En el supuesto de no prosperar las negociaciones o no llevarse éstas a cabo, intervendrán las Instituciones Policiales competentes o el Secretario, a través del servidor público que éste designe, pudiendo autorizar la intervención de los Integrantes de las Instituciones Policiales Federales que considere convenientes, con el fin de restaurar el orden en el Centro Penitenciario o Centro de Reinserción Social de que se trate; y

IV.- En toda ocasión que surja un motín en un Centro Penitenciario, la Comisión deberá realizar una investigación especial.

Para los efectos de esta Sección, se entiende por motín cuando los internos de un Centro Penitenciario, o Centros de Reinserción Social, con el pretexto de hacer uso de un derecho o protestando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnen tumultuariamente, perturbando el orden, al desobedecer los lineamientos internos de seguridad y empleando violencia contra las personas o las cosas, o bien cuando amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación.

Artículo 38.- Los Integrantes de las Instituciones Policiales Federales que sean autorizadas por el Secretario para intervenir dentro de un determinado Centro Penitenciario o Centros de Reinserción Social, para restablecer el orden perdido con motivo de un motín, además de los ordenamientos legales aplicables, están obligados a:

I.- Atender la subordinación jerárquica hacia el mando para el operativo, designado por el Secretario, quien elaborará y autorizará un Plan de Acción, encaminado a lograr la restauración del orden público con la mínima afectación posible a las personas y los bienes que se encuentran en el interior del Centro Penitenciario de que se trate. Dicho Plan de Acción contendrá, por lo menos:

a) Las acciones estratégicas, logísticas y operativas necesarias para la intervención en el Centro Penitenciario o Centros de Reinserción Social y restablecer el orden en el mismo, determinando los grupos que deberán actuar así como sus respectivas obligaciones y acciones específicas;

b) Los lineamientos contenidos en las Leyes, Reglamentos, Manuales y Protocolos aplicables al operativo; y

c) El análisis del historial y otros factores de riesgo para el desarrollo del operativo;

II.- Preservar en todo momento el derecho a la vida y la dignidad de los internos y de las personas que se encuentren dentro del Centro Penitenciario o Centros de Reinserción Social y que con motivo de del motín, no puedan salir del mismo o que se encuentren en calidad de rehenes de los internos;

III.- Acatar estrictamente los principios y lineamientos previstos en esta Ley;

IV.- Seguir los protocolos de intervención de Centros Penitenciarios o Centros de Reinserción Social; y

V.- Apegarse, en la medida de lo posible, al Plan de Acción y a las órdenes que realice el servidor público responsable del operativo y de sus superiores jerárquicos.

Artículo 39.- El servidor público encargado del mando del operativo, podrá autorizar por escrito en el Plan de Acción que los Integrantes de las Instituciones Policiales encargados de la intervención en el Centro Penitenciario o Centros de Reinserción Social de que se trate, sean equipados con armas de fuego, siempre y cuando:

I.- Existan por lo menos reportes de las autoridades del Centro de Internamiento, de que los internos cuentan con armas de fuego;

II.- La organización, peligrosidad o grado de violencia de los internos ponga en serio riesgo a los Integrantes de la Seguridad y Custodia de los Centros de Reinserción Social encargados de la intervención o a las personas que se encuentren en el Centro Penitenciario o Centros de Reinserción Social de que se trate;

III.- Que los internos hayan tomado personas como rehenes; o

IV.- Que por razones de seguridad se considere estrictamente necesario que los Integrantes de las Instituciones Policiales que participen en la intervención, deban portar armas de fuego, en cuyo caso el servidor público responsable del operativo deberá motivar estas razones que se deben contener en el Plan de Acción.

Artículo 40.- En todo operativo en que se autorice la utilización de armas de fuego, deberá consignarse en un informe que rinda el responsable del operativo. El informe contendrá, entre otros aspectos, los siguientes:

I.- El o las armas de fuego que se asignó a cada Integrante de las Instituciones Policiales que participaron en el mismo, con los respectivos resguardos debidamente suscritos por cada Integrante;

II.- Registro de las estrías o rayado helicoidal de cada arma de fuego; y

III.- Número de proyectiles u ojivas útiles que se proporcionaron a cada Integrante de las Instituciones Policiales que participaron en la Intervención del Centro Penitenciario o Centros de Reinserción Social, relacionándolos con las armas de fuego proporcionadas ha dicho Integrante.

Artículo 41.- Al finalizar el operativo, el servidor público responsable del mismo deberá levantar un acta administrativa donde se haga constar la contabilización de los proyectiles u ojivas útiles que finalmente tuvo cada uno de los Integrantes de las Instituciones Policiales a los que se les proporcionó arma de fuego.

Esta acta administrativa se formalizará con dos testigos de asistencia, de los cuales, uno por lo menos debe ser designado por la Contraloría General del Estado de Sonora.

Artículo 42.- El servidor público responsable del operativo deberá rendir al Titular del Ejecutivo Estatal y a la Comisión un Informe Final del Operativo dentro de las 72 horas siguientes a la conclusión del mismo, donde se manifiesten las líneas generales del Plan de Acción, el desarrollo del operativo, los problemas planteados en el mismo, su solución, las personas y bienes que resultaron lesionados así como sus conclusiones y observaciones.

A dicho Informe Final se anexará una copia con firma autógrafa del Plan de Acción, los resguardos de las armas de fuego.

Artículo 43.- La autorización de intervención que emita el Secretario y el Plan de Acción que emita el responsable del operativo, serán considerados reservados en términos de la Ley de la materia; sin embargo, no podrá negarse su acceso a personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sonora, desde luego, en la medida de sus facultades, deberán guardar la secrecía debida.

TÍTULO CUARTO
DE LOS INFORMES SOBRE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA
Y DEL SISTEMA DE REGISTRO, CONTROL Y REVISIÓN DEL
USO DE LA FUERZA PÚBLICA.

CAPÍTULO I
DE LOS INFORMES SOBRE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA

Artículo 44.- Siempre que un Integrante de las Instituciones Policiales utilice la fuerza pública en cumplimiento de sus funciones deberá realizar un reporte pormenorizado a su superior jerárquico inmediato.

Asimismo deberá realizar este informe cuando participe en una intervención en algún Centro Penitenciario, independientemente de si utilizó o no la fuerza pública, en cuyo caso, además de lo previsto en el artículo 43, el informe pormenorizado contendrá:

I.- El tipo de equipamiento y armamento utilizado;

II.- Las acciones que realizó;

III.- El uso de la fuerza empleado y, de ser posible, el nombre de los internos contra los que se empleó; y

IV.- Precisar si realizó disparos con arma de fuego, el número de proyectiles u ojivas útiles que se le dieron antes de la intervención y el número de proyectiles u ojivas útiles con que finalizó el operativo.

Una copia de estos informes se integrará al expediente del Integrante de esas Instituciones y otro se remitirá a la Comisión.

Artículo 45.- Los superiores jerárquicos serán responsables cuando deban tener o tengan conocimiento de que algún Integrante bajo su mando haya empleado ilícitamente la fuerza pública y/o los instrumentos y armas de fuego a su cargo y los mismos no hayan impedido o no denuncien los hechos constitutivos de algún delito ante las autoridades correspondientes.

El incumplimiento a las obligaciones previstas en el párrafo anterior se considerará en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora.

Artículo 46.- El reporte pormenorizado contendrá:

I.- Nombre, adscripción y datos de identificación del Integrante de las Instituciones Policiales;

II.- Nivel de fuerza utilizado;

III.- Nombre y género de las personas sobre las que se ejerció la fuerza pública;

IV.- Circunstancias, hechos y razones que motivaron la decisión de emplear dicho nivel de fuerza pública;

V.- En caso de haber utilizado armas letales:

a) Detallar las razones que se tuvieron para hacer uso del arma de fuego;

b) Identificar el número de disparos; y

c) Especificar las lesiones, las personas lesionadas y los daños materiales causados.

CAPÍTULO II DEL SISTEMA DE REGISTRO, CONTROL Y REVISIÓN DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA

Artículo 47.- Se crea la Comisión de Registro, Control y Supervisión del Uso de la Fuerza Pública de las Instituciones Policiales del Estado de Sonora, que se compondrá por:

I.- Dos representantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora;

II.- Dos representantes de los integrantes de las Instituciones Policiales Municipales del Estado de Sonora;

III.- Un representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sonora;

IV.- Dos representantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, donde uno de ellos será mujer;

V.- Dos representantes de diversas Instituciones Académicas del Estado donde se conformará una de ellas de institución pública y otra privada; y

VI.- Un Secretario Técnico.

Artículo 48.- La organización de la Comisión se establecerá en el Reglamento de la presente Ley, en el que se establecerán mecanismos para que el nombramiento de las áreas operativas de las designaciones a que hace referencia al artículo anterior con la debida transparencia.

Los integrantes de la Comisión tendrán cargo honorífico y, a excepción de los servidores públicos, los demás integrantes permanecerán en el cargo tres años, pudiendo ser reelegidos solamente, por un período más.

Artículo 49.- La Comisión, tendrá a su cargo las siguientes funciones:

I.- Analizar y examinar los casos en que los integrantes de las Instituciones Policiales hagan uso de la fuerza pública, identificando y analizando, entre otros aspectos, los casos de violencia de género, violaciones eminentes a los derechos humanos del ciudadano y actos de discriminación;

II.- Realizar las investigaciones especiales a que se refiere esta Ley, cuando surjan motines en los Centros Penitenciarios o Centros de Reinserción Social, independientemente de que se realice o no intervención de las fuerzas policiales;

III.- Presentar informes sobre la actuación policial de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Sonora al titular del Ejecutivo Estatal, al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública y al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos;

IV.- Generar la estadística del Estado de Sonora en materia de uso de la fuerza pública y darla a conocer a la población de la Entidad;

V.- Revisar que el uso de la fuerza pública se realice en términos de esta Ley; y

VI.- Proponer mejoras para la actuación policial en el uso de la fuerza pública.

Artículo 50.- La Comisión recibirá los informes en términos de esta Ley y procederá de la siguiente forma:

I.- Revisará los informes realizando estudios sobre las circunstancias en las que se utilizó la fuerza pública, analizando los hechos y la actuación de los integrantes de las Instituciones Policiales, identificando y analizando, entre otros aspectos, los casos de violencia de género y de discriminación;

II.- Con dicho estudio, la Comisión generará informes que expresen las conclusiones de cada caso y las recomendaciones que considere pertinentes para disminuir incidencias, abusos y circunstancias de peligro de la vida, la seguridad de las personas, la violencia de género y la discriminación;

III.- La Comisión podrá emitir opiniones técnicas que permitan mejorar el procedimiento del uso de la fuerza pública; y

IV.- Dar vista por escrito al organismo constitucionalmente autónomo denominado Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, de temas o asuntos que puedan ser de su competencia.

Artículo 51.- Las investigaciones especiales con motivo de la realización de motín en un Centro Penitenciario o Centros de Reinserción Social, tienen por objeto:

I.- Determinar si existieron irregularidades y deficiencias cometidas por la autoridad que ocasionaron el motín;

II.- Analizar las circunstancias que rodearon la etapa de negociación o la inexistencia del mismo;

III.- Analizar la oportunidad y legalidad del Plan de Acción desarrollado por el servidor público responsable del operativo;

IV.- Analizar la legalidad de la actuación de los Integrantes de las Instituciones Policiales que intervinieron en el operativo, si el uso de la fuerza pública se realizó conforme a esta Ley, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora;

V.- Analizar el Informe Final del Operativo;

VI.- En su caso, presentar las denuncias penales o administrativas que procedan, para lo cual la Comisión se encontrará debidamente legitimada; y

VII.- Rendir las conclusiones de la Investigación Especial, a:

a) El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora;

b) El Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora;

c) El Comité Ciudadano de Seguridad Pública; y

d) El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora.

Artículo 52.- Las investigaciones especiales con motivo de la realización de motín en un Centro Penitenciario se desarrollarán de la siguiente forma:

I.- Una vez que la Comisión reciba el Informe Final del Operativo, sesionará de forma urgente a efecto de establecer un Comité de Investigación compuesto con por lo menos un representante de cada una de las instituciones y sectores establecidos en el artículo 47 de esta Ley;

II.- Se dará vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para que pueda designar dos agentes del ministerio público que deberán acompañar y auxiliar al Comité de Investigación en todas sus diligencias, dando fe de las mismas;

III.- El Comité de Investigación podrá solicitar copia certificada de cualquier documento público o privado así como citar a comparecer a cualquier servidor público con nivel máximo de Subsecretario de Estado o equivalente y a cualquier particular, utilizando de forma supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora;

IV.- Con el Informe Final y sus anexos además del resultado de las diligencias que se practicaran, sesionará el Comité de Investigación las veces que sea necesario para obtener conclusiones y presentar el proyecto de las mismas a la Comisión, no pudiendo excederse de un plazo de hasta cuatro meses contados a partir del inicio de la investigación, mismo que, por causa debidamente justificada, podrá ser prorrogado por la Comisión hasta por seis meses más; y

V.- Por mayoría de votos, la Comisión podrá aprobar en sus términos o modificar las conclusiones que serán tramitadas de conformidad al artículo anterior, mismas que deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado de Sonora.

Las conclusiones de la Investigación Oficial serán públicas y deberán constar en la página web oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

Igualmente los integrantes de la Comisión podrán rendir votos particulares con su opinión, en caso de no coincidir con el voto mayoritario, que no podrá exceder de cinco cuartillas por una sola de sus caras y que deberá ser publicada en términos de este artículo.

Artículo 53.- Cuando las autoridades a que se refiere el artículo 51, fracción VII de esta Ley reciban las conclusiones de la Investigación Especial, deberán realizar las acciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones.

Artículo 54.- Las Instituciones Policiales deberán, a través de la unidad administrativa respectiva:

I.- Registrar cada uno de los informes que en materia del uso de la fuerza pública sean presentados por los elementos policiales;

II.- Hacer públicos, cuando la Comisión, lo acuerde:

a) Los informes sobre los casos en que los elementos hagan uso de la fuerza pública presentados por ésta; y

b) Las propuestas de mejoras para la actuación policial en el uso de la fuerza pública, que en su caso, sean presentadas por ésta;

III.- Proveer a la Comisión de toda la información necesaria para el cumplimiento de sus finalidades; y

IV.- Remitir conforme lo prescriba el Reglamento, al Titular del Ejecutivo Estatal, al Congreso del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora, un informe que podrá contener, entre otros aspectos, los siguientes:

a) El número de veces que se utilizó la fuerza pública, identificando el nivel de fuerza utilizado y número de elementos que intervinieron en cada caso;

b) Reseña y análisis de las conclusiones de Investigaciones Especiales realizadas en el año; y

c) Propuestas para la actuación policial recomendadas por la Comisión, identificando el estado de éstas.

Las autoridades que reciban esta información deberán analizarla y ordenar las medidas, decretos, recomendaciones y procedimientos que correspondan en el ámbito de sus competencias legales.

TÍTULO QUINTO CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

Artículo 55.- Los Integrantes de las Instituciones Policiales deberán ser entrenados en el uso legítimo de la fuerza pública y la utilización de las armas permitidas, con técnicas que causen los menores daños y lesiones posibles, y el mayor respeto a la integridad física y emocional y a la vida de las personas contra quienes se utilicen.

Las Instituciones Policiales establecerán un programa de evaluaciones periódicas de acuerdo a estándares de eficiencia sobre el uso de la fuerza pública.

Artículo 56.- En todo programa educativo o de formación policial, incluidos los cursos básicos, de actualización y de especialización, existirá un módulo destinado exclusivamente al uso legítimo de la fuerza pública de conformidad con lo establecido en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora, esta Ley y su Reglamento.

Artículo 57.- Los órganos responsables de la formación, actualización y especialización policial, impartirán talleres que comprendan ejercicios y análisis de casos reales en los que

se apliquen los principios y reglas establecidos en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora, esta Ley y su Reglamento.

Los cursos educativos, de formación, actualización y especialización deberán contener las técnicas necesarias para que el ejercicio de la función policial en el uso legítimo de la fuerza pública cause el menor daño posible a las personas.

Artículo 58.- Cada una de las Instituciones Policiales emitirá, conforme a las reglas que se determinen en el Reglamento, un manual teórico práctico de técnicas para el uso legítimo de la fuerza pública y la descripción de las conductas a realizar por parte del Integrante de las Instituciones Policiales.

El manual correspondiente determinará el contenido de las prácticas que el Integrante de las Instituciones Policiales deberá cumplir para estar capacitado en el uso de la fuerza pública, así como la periodicidad del entrenamiento para el uso de las armas permitidas.

Artículo 59.- El entrenamiento para el uso de las armas permitidas comprenderá técnicas de solución pacífica de conflictos, tales como la negociación y la mediación, así como de comportamiento de multitudes y otros medios lícitos que limiten al máximo el uso de la fuerza pública en sus niveles de utilización de armas incapacitantes no letales y utilización de armas de fuego.

TÍTULO SEXTO

COORDINACIÓN CON LAS FUERZAS ARMADAS, INSTITUCIONES POLICIALES DE LA FEDERACIÓN Y ENTIDADES FEDERATIVAS

CAPÍTULO ÚNICO

COORDINACIÓN CON LAS FUERZAS ARMADAS, INSTITUCIONES POLICIALES DE LA FEDERACIÓN Y ENTIDADES FEDERATIVAS

Artículo 60.- Cuando el uso de la fuerza pública requiera de acciones coordinadas entre las Instituciones de Seguridad Pública de los Estados, Municipios, Federación, y otras Entidades Federativas, de las Fuerzas Armadas de México así como de cuerpos policiales Federales, los mandos de las Instituciones Policiales del Estado de Sonora se sujetarán a lo dispuesto en la Ley General, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora, la presente Ley, sus respectivas leyes orgánicas y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 61.- Previamente a los operativos de coordinación, las Instituciones Policiales, determinarán:

I.- Las Instituciones Policiales participantes;

II.- El servidor público que coordinará las acciones de cada una de las Instituciones Policiales que participan;

III.- Los servidores públicos responsables de cada uno de las Instituciones Policiales que participan;

IV.- Las acciones que se intentan repeler o, en su caso, las órdenes que se van a cumplir;

V.- Los antecedentes de los asuntos que se van a conocer; y

VI.- El servidor público que coordinará la puesta a disposición de los detenidos ante la autoridad competente.

Podrán determinarse perímetros de acción o fases de actuación en los operativos; en cuyo caso cada una de las Instituciones participantes será responsable sólo de la parte a su cargo.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA INDEMNIZACIÓN POR EL USO ILÍCITO DE LA FUERZA
PÚBLICA

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA INDEMNIZACIÓN POR EL USO ILÍCITO DE LA FUERZA
PÚBLICA

Artículo 62.- Las personas afectadas con motivo del uso ilícito de la fuerza pública por parte de los Integrantes de las Instituciones Policiales, cuando así haya sido determinado por la autoridad competente, tendrán derecho a que se les pague la indemnización correspondiente, previo procedimiento que exijan las leyes aplicables.

Artículo 63.- Las Instituciones de Seguridad Pública procurarán celebrar un contrato de seguro, de conformidad con las leyes de la materia, que cubra los daños ocasionados por los Integrantes de las Instituciones Policiales a su cargo, a las personas o los bienes cuando las autoridades competentes determinen el uso ilícito de la fuerza pública y se acredite el uso excesivo de la fuerza.

TÍTULO OCTAVO
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES
DE SEGURIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES
DE SEGURIDAD PÚBLICA

Artículo 64.- Será sujeto de responsabilidad administrativa y acreedor a las sanciones que establezca las Leyes en la materia y lo que el Reglamento de la Presente Ley se establezca, cuando a solicitud expresa del ciudadano o por orden de un superior jerárquico se le instruya al oficial de policía, atender la comisión de un delito y el servidor público sin justificación alguna se negare a prestar el servicio. Siempre y cuando cuente el oficial de policía con los elementos y circunstancias que amerite el hecho descrito.

Artículo 65.- La policía está obligada a recibir denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, dando cuenta de ello de forma inmediata al Ministerio Público sin perjuicio de realizar las diligencias urgentes que se requieran para ello.

Artículo 66.- La denuncia podrá formularse por cualquier medio disponible y deberá contener, salvo los casos de denuncia anónima o reserva de identidad, en la identificación del denunciante, el domicilio, la razón y narración circunstanciada del hecho, la indicación de quien o quienes han cometido los hechos ilícitos, quienes lo han presenciado o que tengan noticias de él, así como de todo cuanto constare al denunciante.

Artículo 67.- Si la denuncia se realizara de forma oral, se levantara un registro en presencia del denunciante, quien previa denuncia de este lo ratificara o ampliara en ese preciso momento mismo que firmara junto con el servidor público que lo reciba.

Artículo 68.- Tratándose de denuncia o información anónima la policía constatará la veracidad de los datos aportados mediante los actos de investigación que considere pertinentes y de conformidad a esta deberá de iniciar la investigación correspondiente.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las Instituciones Policiales fijarán los mecanismos necesarios para que en la utilización del arma incapacitante no letal relativa a sustancias irritantes en aerosol se compruebe que sus componentes no incluyen sustancias, materiales y elementos que estén prohibidos expresamente o que correspondan a aquellos reservados para su uso exclusivo del Ejército, la Armada o los que contengan como elemento activo los químicos, en términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos así como de la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas.

ARTÍCULO TERCERO.- El Reglamento de la presente Ley deberá aprobarse por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, a propuesta del Secretario, para ser sancionado por el Titular del Poder Ejecutivo, dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley; durante ese periodo, continuará en su vigencia, todo lo relativo y aplicable a la Ley de Seguridad Pública Estatal, así como el Código Penal para el Estado de Sonora y demás normatividad.

ARTÍCULO CUARTO.- Los Titulares de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Sonora podrán emitir los protocolos y manuales a que se refiere esta Ley, de conformidad con los emitidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sin embargo, no perderán su vigencia los protocolos y manuales que se hayan emitido, hasta en tanto no se expidan aquellos a que se refiere el párrafo anterior.

ARTÍCULO QUINTO.- Hasta en tanto se apruebe y se armonice la legislación local acorde a la Ley Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes, el uso de la fuerza en Centros de Tratamientos en internamiento para adolescentes en el Estado de Sonora, solo podrá utilizarse en casos similares y en los términos previstos en la Sección Tercera del Capítulo Tercero del Título Tercero de la presente Ley, privilegiando en todo momento el Interés Superior del Menor y los principios establecidos en el artículo 10 de este ordenamiento legal.

ARTÍCULO SEXTO.- Hasta en tanto se apruebe y se armonice la legislación local acorde a la Ley Nacional de Ejecución Penal, el uso de la fuerza en los Centros de Reinserción Social en el Estado de Sonora, solo podrá utilizarse en los términos previstos en la Sección Tercera del Capítulo Tercero del Título Tercero de la presente Ley.”

Finalizada la lectura, la presidencia puso a consideración de la Asamblea, la dispensa al trámite de segunda lectura solicitado por la Comisión dictaminadora, y fue aprobado por unanimidad, en votación económica. Siguiendo el protocolo, puso a discusión el Decreto en lo general, he hizo uso de la voz el diputado Ochoa Bazúa para decir:

“Quiero hacer un reconocimiento al legislador Serrato por esta gran iniciativa, que los miembros del Grupo Parlamentario del PRI apoyamos sin duda alguna. Desde el inicio de los tiempos el derecho a defenderse ha sido un derecho natural e intrínseco de toda persona, esto ha dado pie a lo que conocemos como la ley del más fuerte, donde cada quien hacía justicia por su propia mano y los conflictos o diferencias se solucionaban por medio de la fuerza.

Es a partir de la creación del Estado donde de cierta forma y por regla general todas las personas renunciamos a parte de ese derecho de usar la fuerza y se la transmitimos al Estado, para que sea este el único facultado para utilizar la fuerza para dirimir conflictos y mantener el orden y la paz pública, esto no es poca cosa, a partir de entonces el Estado tiene un tremendo poder y por lo mismo una gran responsabilidad, ya que su función de velar por el orden y la paz pueden pasar a segundo plano, ya que no es fácil resistirse a la tentación de usar la fuerza para conseguir diversos objetivos, por eso regular el uso de la fuerza pública supone un paso enorme tratándose del orden, el respeto a la ley y a los derechos inherentes a toda persona.

En las últimas décadas en todos los lugares del mundo la delincuencia y el uso de la violencia ha ido escalando, ello implica un gran reto para el Estado pues es éste el responsable de prevenirla, de combatirla y castigarla, pero ello no significa que la autoridad escudándose en el combate a la delincuencia y en la protección de los derechos de las personas, haga uso de la fuerza de forma arbitraria o desordenada, al contrario, se requiere

que el uso de la fuerza pública obedezca a lineamientos y protocolos de acción muy bien definidos a través de los cuales se garantice la seguridad de todas las personas.

Si bien es innegable que es facultad del Estado mantener el orden público y la paz mediante los cuerpos operativos policiales destinados para ello, dicha facultad no debe ser interpretada como un permiso o un cheque en blanco para que se trasgredan los derechos humanos de los ciudadanos; de ahí, además de estar a favor de regular el uso de la fuerza pública también debe existir el marco legal para reprochar y sancionar aquellas conductas del personal que lesionen, agredan o atropellen los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Que quede claro, la actuación incorrecta de un elemento, no puede ni debe manchar la actuación de todas las corporaciones policiales que día a día velan por la protección de la ciudadanía; es justo reconocer y aquí lo hacemos públicamente, la labor de cientos y miles de policías de todos los órdenes de gobierno que día a día arriesgan su integridad física, incluso su vida, por proteger a nuestras familias, a cambio de un sueldo que en muchas ocasiones no es suficiente para vivir decorosamente.

La legislación que hoy pone a nuestra consideración, sin duda viene a dar certeza jurídica al actuar de las instituciones policiales de nuestra entidad, pero sobre todo a los ciudadanos quienes en algunas ocasiones han expresado sentirse en desventaja en el actuar de las mismas, estamos redefiniendo y atacando las malas prácticas que se habían generado en ocasiones por parte de quienes ha creído que tienen superioridad sobre la ciudadanía por representar al Estado.

Una cosa debe quedar muy clara, y es que la seguridad ciudadana es la prioridad para esta legislatura, definir y delimitar el uso de la fuerza pública no es limitar la actuación de nuestros cuerpos de seguridad, es darle certeza al propio policía de cómo y cuándo usar la fuerza pública, y darle garantías al ciudadano de que la fuerza solo se utilizará cuando sea necesario, y en una medida que resulte adecuada, es decir sin exceso, esto sin duda alguna nos conviene a todos, le conviene al ciudadano para garantizar el derecho a manifestarse y le conviene a la fuerza pública, a nuestras corporaciones para hacer con un respaldo jurídico el trabajo que nos da seguridad y prevención a todo el Estado de Sonora y a sus 72 municipios”.

Acto seguido, el diputado Serrato Castell agregó:

“Antes que nada quiero hacer un reconocimiento a quienes en alguna ocasión se acercaron a nosotros a plantearnos, allá por septiembre del año pasado, la necesidad de presentar esta iniciativa para que Sonora fuera un Estado de vanguardia en materia de respeto a los derechos humanos; en materia de protocolos de actuación, en materia del adecuado uso de la fuerza en el Estado de Sonora, el doctor Pablo Grajeda, el abogado Antonio Contreras, el abogado Fernando Morales Flores, un reconocimiento y un agradecimiento a ellos por habernos acercado esta idea.

Queremos decirles compañeros que el dictamen original fue enriquecido, porque nosotros creemos que una iniciativa no es más que la presentación que una idea, y esa idea siempre debe buscar mejorarse escuchando a todos, a todas las voces, y escuchamos planteamientos incluso que nos llegaron por las redes sociales, que nos llegaron de ciudadanos, que nos llegaron de funcionarios de seguridad, que nos llegaron de algunos diputados particularmente del diputado Emeterio Ochoa, y todos ellos fueron considerados y creo que al final se generó una mejor propuesta y una propuesta que escuchó distintos puntos de vista.

Por supuesto de los miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a quienes agradecemos que hayan dictaminado favorablemente esta propuesta, la fuerza y el uso de la fuerza debe ser siempre para servir a la ciudadanía, para servir al pueblo, para proteger al ciudadano, ese es el origen y la esencia, y esa es la razón por la cual el monopolio del uso de la fuerza radica en el Estado, radica en la autoridad.

Muchos servicios se contratan, se concesionan, se prestan, pero el uso de la fuerza es un monopolio del Estado y la razón es precisamente por la magnitud de dicho tema, del uso de esta fuerza.

Esta iniciativa que hoy tendremos a bien con el apoyo de ustedes, aprobar en este Pleno, protege en primer lugar los derechos humanos de las personas, sus garantías individuales, de hecho está considerada incluso una resolución reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que modificó muchos criterios en los protocolos del uso de la fuerza y que los estamos contemplando en esta iniciativa.

Protege de una manera muy especial los derechos de los niños, los niños y los adolescentes no pueden ser afectados bajo ninguna circunstancia con el uso de armas, incluso de tipo no letal, recoge los tres principios fundamentales de la ONU, la oportunidad, que quiere decir que la fuerza debe utilizarse en el momento adecuado, eso es lo que evita que haya una tragedia, utilizarla en el momento adecuado, ni antes, ni después de ello, que sea de forma proporcional es el segundo principio; esto quiere decir que el tipo y la cantidad solamente sea lo estrictamente necesario, no podemos responder como se ha respondido con balas de gomas ante terrones y ante gritos, no es proporcional hacerlo de esa forma; y el tercer principio es la responsabilidad, debe haber responsables, debe haber gente que responda cuando haya un inadecuado uso de la fuerza, y es muy importante que lo haya y por eso nosotros estamos estableciendo en esta ley que haya responsables, que haya de hecho una Comisión que por lo mismo se crea, y que crea un registro, control y supervisión del uso de la fuerza, ya queda documentado, está ahí lo que ocurrió y en base a la Ley de Transparencia vamos a poder saber quién, cómo, cuando y donde se instruyó el uso de la fuerza pública, y así como se sanciona el inadecuado uso de la fuerza, también se sanciona el no actuar de la policía.

Curiosamente cuando esta iniciativa se presentó, lo que privaba en nuestra comunidad era un clamor generalizado de la falta de actuación de la policía ante el llamado de la ciudadanía, eso es lo que ocurría en el contexto en aquella ocasión, hoy el contexto es de mal uso de la fuerza pública en el proceder de las fuerzas policiales, al final los dos temas son muy importantes y ambos están considerados en esta iniciativa, también viene

considerado que se prevea la compra de un seguro para indemnización en el caso del uso inadecuado de la fuerza pública en perjuicio de los ciudadanos.

Compañeros les pedimos aprobar esta iniciativa, Sonora lo requiere, la protección de los derechos humanos de las personas, de los niños, de la necesidad urgente de contar con los protocolos adecuados nos lo reclaman y por ello pedimos a todas y todos compañeros de todos los grupos parlamentarios y fracciones representadas, que aprobemos esta iniciativa”.

Sin que se presentaren más participaciones, fue aprobada la ley en lo general, por unanimidad, en votación económica. Siguiendo el protocolo, la presidencia puso a discusión la ley en lo particular; sin que se presentare participación alguna, fue aprobada por unanimidad, en votación económica, dictándose el trámite de: “Aprobado la ley y comuníquese”.

En cumplimiento al punto 8 de la orden del día, el diputado León García dio lectura al dictamen presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de:

“DECRETO

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 240 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SONORA.

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma el artículo 240 del Código Penal del Estado de Sonora, para quedar como sigue:

Artículo 240.- Se impondrá prisión de dos a diez años y de cien a ciento cincuenta unidades de medida y actualización, al que, sin motivo justificado, sin orden de autoridad competente y fuera de los casos en que la ley lo permita, se introduzca, furtivamente o con engaño o violencia, o sin permiso de la persona autorizada para darlo, a una posesión o propiedad habitada o deshabitada, a un departamento, vivienda, finca, edificio, predio, rancho, parcela, milpa, baldío, patio, terreno, casa móvil, aposento o dependencias de una casa habitación, o cualquier inmueble que sirva de albergue, residencia, hogar o morada de las personas. El presente delito será oficioso, sin perjuicio de la aplicación de las reglas del concurso previstas en este Código.

El delito a que se refiere el artículo anterior se aumentara la sanción con prisión de tres a doce años y hasta mil unidades de medida y actualización, a la persona que al momento de allanar una morada realice alguno de los siguientes actos:

I.- Cuando el allanamiento se ejecute utilizando armas de fuego;

II.- Empleándose violencia en las personas;

III.- Cuando el allanamiento se realice de noche o por dos o más personas; o

IV.- Valiéndose de identificaciones falsas o supuestas órdenes provenientes de alguna autoridad violente el domicilio.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora”.

Finalizada la lectura, la presidencia puso a consideración de la Asamblea, la dispensa al trámite de segunda lectura solicitado por la Comisión dictaminadora, y fue aprobado por unanimidad, en votación económica. Siguiendo el protocolo, puso a discusión el Decreto en lo general y en lo particular; sin que se presentase participación alguna, fue aprobado por unanimidad, en votación económica, dictándose el trámite de: “Aprobado el Decreto y comuníquese”.

Y sin que hubiere más asuntos por desahogar, la presidencia clausuró la sesión a las doce horas con cuarenta y tres minutos, y citó a una próxima a desarrollarse el día martes, dieciocho de abril de dos mil diecisiete, a las once horas.

Se hace constar en la presente Acta, la no asistencia de los diputados Acuña Arredondo Rodrigo, Jaime Montoya Brenda Elizabeth, y López Godínez Lisette, con justificación de la Mesa Directiva.

DIP. MOISÉS GOMEZ REYNA
PRESIDENTE

DIP. FERMIN TRUJILLO FUENTES
SECRETARIO

DIP. JOSÉ ANGEL ROCHÍN LÓPEZ
SECRETARIO

-LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas con quince minutos del día dieciocho de abril de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos del Congreso del Estado de Sonora, los ciudadanos diputados Acosta Cid Lina, Acuña Arredondo Rodrigo, Ayala Robles Linares Flor, Buelna Clark Rafael, Castillo Godínez José Luis, Dagnino Escobosa Javier, Díaz Nieblas Ramón Antonio, Fu Salcido Carlos Manuel, Gomez Reyna Moisés, Guillén Partida Omar Alberto, Gutiérrez Jiménez José Armando, Gutiérrez Mazón María Cristina Margarita, Hernández Barajas Sandra Mercedes, Jaime Montoya Brenda Elizabeth, Lam Angulo Juan José, Lara Moreno Rosario Carolina, León García Carlos Alberto, López Cárdenas Célida Teresa, López Godínez Lisette Márquez Cázares Jorge Luis, Ochoa Bazúa Emeterio, Olivares Ochoa Teresa María, Palafox Celaya David Homero, Payán García Angélica María, Rochín López José Ángel, Salido Pavlovich Jesús Epifanio, Sánchez Chiu Iris Fernanda, Serrato Castell Luis Gerardo, Trujillo Fuentes Fermín, Valdés Avilés Ana María Luisa, Villarreal Gámez Javier y Villegas Rodríguez Manuel; existiendo quórum legal, la presidencia declaró abierta la sesión.

Posteriormente, solicitó al diputado Trujillo Fuentes, secretario, diera lectura a la orden del día; y puesta a consideración de la Asamblea, fue aprobada, por unanimidad, en votación económica.

Seguidamente, informó de la correspondencia:

Escrito del Presidente Municipal y del Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Magdalena, Sonora, mediante el cual solicitan a este Poder Legislativo, autorización para la ampliación del programa de descuento en favor de los contribuyentes

del impuesto predial municipal, lo que implicaría la modificación de los artículos 11 y 12 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2017 de dicho Municipio. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se turna a la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales”.

Escrito del Presidente Municipal y del Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Alamos, Sonora, mediante el cual remite a este Poder Legislativo, copia certificada de acta de sesión, en donde consta que dicho órgano de gobierno municipal, aprobó la Ley número 181, que reforma la fracción III del artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Sonora, la cual tiene por objeto modificar disposiciones de nuestra Ley Fundamental, en relación al requisito de vecindad y residencia para quienes deseen contender al cargo de diputado local; para su debido conocimiento y efectos legales correspondientes. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se acumula al expediente respectivo”.

Escrito de los ciudadanos Francisco Javier Zarate Soto, Samuel Verdugo Villegas, Joel Enrique Espejel Blanco, José Fidel Ramírez Jiménez, Rubén Alejandro Rodríguez Jiménez, Jorge Eduardo González Madrid, Víctor Remigio Martínez Cantú, Daniel Núñez Santos, Mario Jorge Terminel Siqueiros, Patricia Eugenia Arguelles Canseco, Miguel Arturo Morales Zamorano, Antonio Solís Canevett, Jesús Ramon Moya Grijalva, Manuel Alaniz Rivera, José Othón Ramos Rodríguez, Gustavo Enrique Ruiz Jiménez, Mario Regín Sánchez, Rodolfo Duran Majul, Jorge Alberto Sáenz Félix, Luis Fernando Islas López, Guillermo Williams Bautista y María de Lourdes Ramos Loyo, por medio del cual manifiestan a este Poder Legislativo, su intención de ser considerados como aspirantes al cargo de Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, para lo cual remiten diversas documentales para acreditar el cumplimiento de los requisitos para ser designados a dicho cargo. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se remiten al Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo”.

Escritos de los Ayuntamiento de los Municipios de Altar y San Felipe de Jesús, Sonora, mediante los cuales remiten a este Poder Legislativo, actas

certificadas en donde consta que dichos órganos de gobierno municipal, aprobaron la Ley número 179, que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, en relación a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se acumulan al expediente respectivo”.

Escrito del Secretario de Economía del Gobierno del Estado de Sonora, con el cual da contestación a este Poder Legislativo, en relación al exhorto a dicha dependencia, entre otras autoridades, para que, de manera coordinada, lleven a cabo las acciones tendientes a la creación de una bolsa de trabajo con empresarios y productores agropecuarios de la Entidad, con el objeto de atender las demandas de fuentes de empleo, tanto en el campo como en la ciudad, procurando darle cabida a la mayor cantidad de personas, incluyendo a los migrantes que sean repatriados en territorio estatal, teniendo como prioridad, el cubrir el enorme déficit laboral que existe dentro de las actividades agropecuarias sonorenses. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se acumula al expediente del acuerdo 293, aprobado por este Poder Legislativo, el día 14 de marzo de 2017”.

Escrito de varios maestros pertenecientes al Centro de Bachillerato “Gregorio Torres Quintero”, de la ciudad de Navojoa, sonora, mediante el cual hacen del conocimiento de este Poder Legislativo, diversos hechos en relación a su cese y baja como trabajadores de dicha institución, por parte de la Dirección General de Bachillerato. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y enterados”.

Escrito del Secretario Técnico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el cual remite a este Poder Legislativo, en memoria USB, “Informe de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 de la CNDH”, así como la versión impresa en resumen ejecutivo, editado por este Organismo Nacional Autónomo. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se remite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos”.

Escrito del Presidente Municipal y del Secretario del Ayuntamiento de Alamos, Sonora, con el cual hacen del conocimiento a este Poder Legislativo, que en sesión de ese órgano de gobierno municipal, se aprobó por unanimidad solicitar al Congreso del Estado la desincorporación como organismo público descentralizado del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil del Municipio de Álamos. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se contestará lo conducente”.

Copia de escrito de la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Sonora, dirigido al Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, mediante el cual informa que no ha podido dar cumplimiento a la obligación de presentar la cuenta pública, por tener cortados por falta de pago, los servicios de energía eléctrica, telefonía e internet, por lo que manifiestan seguir buscando alternativas para dar cumplimiento a dicha obligación. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se remite al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización”.

Escrito del Secretario General del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, con el cual exhorta a esta Soberanía, para que se pronuncie en los mismos términos del exhorto que realizan a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que reforme la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2017, a efecto de eliminar el cobro del derecho respectivo a la evaluación correspondiente al Acuerdo Secretarial 286, a fin de que quienes tengan necesidad de acreditar conocimientos que correspondan al Nivel Educativo de Bachillerato, se les practique la evaluación correspondiente y entrega de certificado, en forma gratuita. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se remite a la Comisión de Educación y Cultura”.

Escrito del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el cual remite a este Poder Legislativo, Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, para lo cual anexa al presente una memoria USB. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se remite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos”.

Escrito de la Directora General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora, mediante el cual informa a este Poder Legislativo, que derivado del procedimiento administrativo se aplicó sanción bajo expediente número RO/34/13 a Martín Castañeda Cruz, Jorge Mario Otero Duarte y Tomás Contreras Solís, a quienes se les destituye del puesto e inhabilita por cinco años; además se aplicó sanción bajo expediente número RO/34/13 a Héctor Manuel Oronia Olivarría, Lucas García Moreno y Noé Gildardo Valenzuela López, a quienes se inhabilita por cinco años. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y enterados”.

Escrito del Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual remite a este Poder Legislativo, copia del oficio suscrito por el Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la misma Secretaría, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da contestación al exhorto al Instituto Nacional de Migración, entre otras autoridades, para que, de manera coordinada, lleven a cabo las acciones tendientes a la creación de una bolsa de trabajo con empresarios y productores agropecuarios de la Entidad, con el objeto de atender las demandas de fuentes de empleo, tanto en el campo como en la ciudad, procurando darle cabida a la mayor cantidad de personas, incluyendo a los migrantes que sean repatriados en territorio estatal, teniendo como prioridad, el cubrir el enorme déficit laboral que existe dentro de las actividades agropecuarias sonorenses. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se acumula al expediente del acuerdo 293, aprobado por este Poder Legislativo, el día 14 de marzo de 2017”.

Escrito del Vicepresidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual remite a este Poder Legislativo, Acuerdo aprobado, mediante el cual se exhorta a las autoridades federales, a Petróleos Mexicanos y a sus empresas subsidiarias y filiales, a los Gobiernos y Congresos de las Entidades Federativas y a los gobiernos municipales a que, en el ámbito de sus Atribuciones determinen la procedencia de la nulidad, rescisión o revocación de todas las concesiones, contratos, proyectos de prestación de servicios y asociaciones público privadas otorgados a la empresa Brasileña

Odebrecht, S.A., sus filiales o subsidiarias y, en su caso, rescindan y se abstengan de promover, realizar o suscribir cualquiera de los actos jurídicos antes mencionadas con dicha empresa, en virtud de las diversas denuncias de actos de corrupción presentadas en su contra, ante autoridades internacionales y nacionales, en las que se ha hecho pública la probable participación de servidores públicos mexicanos. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se remite a las Comisiones Primera y Segunda de Hacienda y Anticorrupción”.

Escrito de la Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el cual remite a este Poder Legislativo, Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta, respetuosamente, a las legislaturas de las entidades federativas, a expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las normas secundarias por las que se establece el Sistema Nacional Anticorrupción, aplicando el principio de máxima publicidad. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se remite a la Comisiones Anticorrupción y a la de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización”.

Escrito de la Gobernadora del Estado, asociada del Secretario de Gobierno, con el que presentan ante este Poder Legislativo, los documentos que conforman la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se remite al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización”.

Escrito del Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Sonora, mediante el cual remite a este Poder Legislativo, acta certificada en donde consta que dicho órgano de gobierno municipal aprobó por unanimidad la solicitud de este Congreso del Estado, a fin de que se sumen a la Campaña estatal “La Verdad del Cristal”, en contra del consumo de metanfetamina, para que a través de sus dependencias o entidades paramunicipales competentes, destinen los recursos humanos, monetarios y materiales necesarios para combatir dicha problemática en sus municipios. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se acumula al expediente del acuerdo 269, aprobado por este Poder Legislativo, el día 09 de febrero de 2017”.

Escrito del Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Sonora, mediante el cual remite a este Poder Legislativo, acta certificada en donde consta que dicho órgano de gobierno municipal aprobó por unanimidad la solicitud de este Congreso del Estado, con el cual se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de la Comisión de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado de Sonora, para que en forma coordinada realice las siguientes acciones: a) Emitir una convocatoria inmediata a los empresarios y emprendedores de Sonora, para que presenten propuestas para eliminar y/o reducir los trámites y requisitos para abrir y operar un negocio en el Estado y en los Ayuntamientos; b) A partir de las propuestas recabadas, realizar las gestiones realizadas necesarias ante las instancias competentes a efecto de eliminar y/o reducir los trámites y requisitos para abrir y operar un negocio en el Estado y los Ayuntamientos; c) a más tardar en Marzo de 2018 lograr la eliminación y/o reducción del 50% de los trámites y los requisitos para abrir y operar un negocio en el Estado y los Ayuntamientos; d) Informar de manera periódica a este Congreso del Estado sobre las acciones instrumentadas y los resultados obtenidos. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se acumula al expediente del acuerdo 276, aprobado por este Poder Legislativo, el día 21 de febrero de 2017”.

Escrito del Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, mediante el cual remite a este Poder Legislativo, solicitud de autorización para la realización y desarrollo de tres proyectos en la modalidad de Alianza Público Privada, exclusivamente con ingresos municipales, consistentes en el diseño y construcción de un Mercado Municipal y un Edificio Administrativo, así como, la elaboración del proyecto ejecutivo, diseño, construcción, equipamiento, puesta en marcha, operación y mantenimiento de una Planta Desaladora, solicitando para cada uno de esos proyectos, la contratación de una línea de crédito contingente-revolvente, más los costos financieros que se generen, con la institución financiera mexicana que ofrezca las mejores condiciones crediticias hasta por la cantidad que represente el importe de tres mensualidades del contrato que bajo la modalidad de Alianza Público Privada de Servicios celebren el propio

Ayuntamiento y la empresa licitante ganadora. El diputado presidente dio trámite de: “Recibo y se turna a las Comisiones Primera y Segunda de Hacienda, en forma unida”.

En cumplimiento al punto 4 de la orden del día la diputada Gutiérrez Mazón solicitó autorización para la transmisión de un video, y siendo aceptado por la presidencia, dijo que han visto y vivido que el uso del celular al volante acaba con la vida de seres queridos, de jóvenes; y la autoridad trabaja en ello, pero deben hacerlo en conjunto para lograr que estas situaciones día con día sean menos y poder lograr una diferencia, pues si bien en algunos municipios las multas ya son muy elevadas, lo importante es concientizar en especial a los jóvenes para que conduzcan sin celular al volante; y dio lectura a su iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 229 de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, resolviendo la presidencia turnarla para su estudio y dictamen, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

En cumplimiento al punto 5 de la orden del día, el diputado Gutiérrez Jiménez dio lectura a la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, del proyecto de Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sonora, resolviendo la presidencia turnarla para su estudio y dictamen, a la Comisión Anticorrupción.

En cumplimiento al punto 6 de la orden del día, la diputada Sánchez Chiu dio lectura a su iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adultos Mayores del Estado de Sonora. Finalizada su lectura, agregó que esta iniciativa es noble, y a varias legisladoras les ha tocado vivir una situación parecida; agradeció a sus padres quienes siempre la han apoyado en cada lugar donde ha buscado una oportunidad laboral y profesional, pues siempre están al pendiente de su hijo. En ese tenor, se refirió al apoyo de los abuelos hacia las madres trabajadoras, tema muy repetitivo en las comunidades que le ha tocado visitar y hablar con muchas mujeres y con muchas abuelas. Por último, pidió el apoyo a esta iniciativa que será de gran beneficio para

los abuelos quienes podrán sentirse más útiles, para la madre que trabaja y para los niños que estarán mejor cuidados. Acto seguido, la presidencia resolvió turnarla para su estudio y dictamen, a la Comisión de Grupos Vulnerables.

En cumplimiento al punto 7 de la orden del día, el diputado Rochín López dio lectura a su iniciativa con punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a los ciudadanos licenciados Adolfo García Morales titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, y Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena, titular de la Fiscalía General de Justicia de Sonora. para que en uso de sus atribuciones y de manera conjunta, implementen un protocolo para la atención inmediata a delitos de alto impacto en el Estado, resolviendo la presidencia turnarla para su estudio y dictamen, a la Comisión de Seguridad Pública.

Por último, la presidencia comunicó a la Asamblea la petición por parte de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para habilitar el día de mañana, miércoles 19 de abril para celebrar la sesión ordinaria que corresponde al día jueves 20 de abril, y habilitar también el día 24 de abril para celebrar una sesión ordinaria; y puesto a consideración de la Asamblea, fue aprobado por unanimidad, en votación económica.

Y sin que hubiere más asuntos por desahogar, la presidencia clausuró la sesión a las doce horas con cuarenta y seis minutos, y citó a una próxima a desarrollarse el día miércoles, diecinueve de abril de dos mil diecisiete, a las diez horas con treinta minutos.

Se hace constar en la presente Acta, la no asistencia de la diputada Díaz Brown Ojeda Karmen Aída, con justificación de la Mesa Directiva.

DIP. MOISÉS GOMEZ REYNA
PRESIDENTE

Octubre 30, 2017. Año 11, No. 932

DIP. FERMIN TRUJILLO FUENTES
SECRETARIO

DIP. JOSÉ ANGEL ROCHÍN LÓPEZ
SECRETARIO

**CORRESPONDENCIA DE LA SESIÓN DEL
DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2017.**

25-octubre 2017. Folio 2804.

Escrito del Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobierno, dirigido a la Directora General de Normatividad y Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Desarrollo Social, mediante el cual comunica el exhorto de este Poder Legislativo, dirigido a esa Dependencia para que se intensifiquen las acciones de difusión, información y asesoría, con el propósito de que se apoye adecuadamente a las personas que se encuentren en los supuestos que les permiten obtener la devolución de los recursos que les correspondan por concepto de aportaciones realizadas dentro del periodo comprendido del año 1992 a 1997, al sistema de Ahorro para el Retiro. **RECIBO Y SE ACUMULA AL EXPEDIENTE DEL ACUERDO 344, APROBADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2017.**

25-octubre 2017. Folio 2805.

Escrito del Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobierno, dirigido al Director de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual comunica el exhorto de este Poder Legislativo, dirigido a esa Dependencia para que se intensifiquen las acciones de difusión, información y asesoría, con el propósito de que se apoye adecuadamente a las personas que se encuentren en los supuestos que les permiten obtener la devolución de los recursos que les correspondan por concepto de aportaciones realizadas dentro del periodo comprendido del año 1992 a 1997, al sistema de Ahorro para el Retiro. **RECIBO Y SE ACUMULA AL EXPEDIENTE DEL ACUERDO 344, APROBADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2017.**

25-octubre 2017. Folio 2806.

Escrito del Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobierno, dirigido al Coordinador General de la Oficina del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mediante el cual comunica el exhorto de este Poder Legislativo, dirigido a esa Dependencia a que actualice el ingreso objetivo del trigo cristalino por la cantidad de 4,500 pesos por tonelada para el grano de maíz, equivalente al precio otorgado al Estado de Sinaloa. **RECIBO Y SE ACUMULA AL EXPEDIENTE DEL ACUERDO 350, APROBADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017.**

25-octubre 2017. Folio 2807.

Escrito del Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobierno, dirigido al Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, mediante el cual comunica el exhorto de este Poder Legislativo, dirigido a esa Dependencia a llevar a cabo las acciones que sean necesarias para intensificar la promoción de la afiliación y la reafiliación al Seguro Popular. **RECIBO Y SE ACUMULA AL EXPEDIENTE DEL ACUERDO 357, APROBADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017.**

25-octubre 2017. Folio 2808.

Escrito del Oficial Mayor del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual remite a este Poder Legislativo, acuerdo con el cual envía un atento exhorto al Gobierno Federal y a la Comisión Federal de Electricidad, para que analicen y consideren suspender el arbitrario del cobro de un porcentaje por la recaudación del derecho de alumbrado público (DAP); así mismo, exhorta a las Legislaturas de todos los Estados y de la Ciudad de México, para que rechacen ese cobro de la CFE, y a su vez, exhorten a sus Municipios a manifestarse al respecto. **RECIBO Y SE REMITE A LAS COMISIONES PRIMERA Y SEGUNDA DE HACIENDA.**

25-octubre 2017. Folio 2809.

Escrito del Presidente Municipal y del Director de OOMAPAS del Ayuntamiento de Sahuaripa, Sonora, con el que informan a este Poder Legislativo, que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de ese Municipio, no cuenta con la capacidad suficiente financiera, ni estructuralmente para ser un Organismo paramunicipal, por lo cual solicitan de la manera más atenta sea derogada la resolución de ser paramunicipal, en virtud de que dicho Organismo ha estado presentando pérdida los últimos 10 años, para lo cual anexan copia fotostática de los auxiliares contables para su análisis, así como la autorización del acta de cabildo número 26, misma que al ser analizada por el Honorable Cabildo del mencionado Ayuntamiento, autorizó se hiciera la presente solicitud. **RECIBO Y SE REMITE A LAS COMISIONES DEL AGUA Y DE PRESUPUESTOS Y ASUNTOS MUNICIPALES.**

25-octubre 2017. Folio 2810.

Escrito de los Ayuntamientos de Bacoachi y Pitiquito, Sonora, con el que remiten a este Poder Legislativo, acta original y acuerdo certificado, en los cuales consta que dichos órganos de gobierno municipal, aprobaron la Ley número 195, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora. **RECIBO Y SE ACUMULAN AL EXPEDIENTE RESPECTIVO.**

26-octubre 2017. Folio 2811.

Escrito de la Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nogales, Sonora, mediante el cual solicita que al momento de analizar la Ley propuesta en el "Foro de Consulta para la Ley de Indigentes" se considere la importancia de la asignación de recursos suficientes a los municipios y organismos para la correcta ejecución de dicha ley en torno a la atención de personas de este sector vulnerable. **RECIBO Y SE REMITE A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ASISTENCIA PÚBLICA.**

26-octubre 2017. Folio 2812.

Escrito de ciudadano Raúl Ortiz Echeverría, Regidor del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, mediante el cual solicita a este Poder Legislativo, la intervención en el tema del

transporte público de la mencionada ciudad, por la sustitución de la actual flota de camiones urbanos, mismos que son anticuados e inoperantes, tanto por sus condiciones, como por el deterioro natural, por las unidades nuevas para modernizar su transporte urbano. **RECIBO Y SE REMITE A LA COMISIÓN DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD.**

26-octubre 2017. Folio 2814.

Escrito del diputado Carlos Alberto León García, mediante el cual remite a este Poder Legislativo, relación de 334 firmas de ciudadanos que avalan la exigencia de eliminar el fuero en Sonora. **SE ACUMULAN AL EXPEDIENTE DEL FOLIO 1081 DE ESTA LEGISLATURA.**

27-octubre 2017. Folio 2815.

Escrito del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Carbó, Sonora, mediante el cual remite a este Poder Legislativo, Segundo Informe de Gobierno de las labores desarrolladas por esa Administración Municipal. **RECIBO Y SE ENVÍA A LA BIBLIOTECA DE ESTE PODER LEGISLATIVO.**

27-octubre 2017. Folio 2816.

Escrito del Presidente Municipal y del Secretario del Ayuntamiento de Carbó, Sonora, mediante el cual remiten a este Poder Legislativo, solicitud de un crédito para la adquisición de una unidad recolectora de basura, con un valor de \$850,000.00 (Son: ochocientos cincuenta mil pesos 00/100M.N.) **RECIBO Y SE TURNA A LA SEGUNDA COMISIÓN DE HACIENDA.**

27-octubre 2017. Folio 2817.

Escrito de la Vicepresidenta de la Mesa Directiva Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual comunica a este Poder Legislativo, de la aprobación del Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los Congresos Estatales del país, a considerar y valorar en su justa dimensión, la creación de la figura de “Regidor Migrante”, con el objeto de salvaguardar y mejorar las condiciones de las población migrante del país y sus

familias. **RECIBO Y SE REMITE A LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES DE LA SOCIEDAD.**

27-octubre 2017. Folio 2818.

Escrito del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora, mediante el cual remite Acuerdo Certificado en donde consta que dicho órgano de gobierno municipal, aprobó el otorgamiento de estímulos fiscales para la instalación de empresas en dicho municipio, por lo que solicitan una modificación a su Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el presente ejercicio fiscal. **RECIBO Y SE TURNA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y ASUNTOS MUNICIPALES.**

30-octubre 2017. Folio 2820.

Escrito del Consejo Directivo Estatal de la Barra Sonorense de Abogados A. C., con el que presentan opinión sobre la viabilidad de la iniciativa presentada por el diputado Jesús Epifanio Salido Pavlovich, mediante la cual se reforman y adicionan diversos artículos al Código Penal del Estado de Sonora. **RECIBO Y SE REMITE A LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.**

HONORABLE ASAMBLEA:

Los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de esta Sexagésima Primera Legislatura, en ejercicio de las atribuciones previstas por los artículos 53, fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora, y 32, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de este Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de **QUE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO QUE APRUEBA LAS PROPUESTAS DE PLANOS Y TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN, PRESENTADAS POR DIVERSOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017**, para lo cual sustentamos la viabilidad de la misma en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En sesión celebrada el día 4 de octubre del 2016, en sesión de la Comisión Presupuestos y Asuntos Municipales del Congreso del Estado de Sonora, se aprobó el dictamen de los Planos y Tablas de Valores de los Municipios que integran nuestra Entidad Federativa, el cual fue publicado el día 20 del mismo mes y año en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Inconformes con la aprobación referida, los Municipios de Nogales, San Luis Río Colorado, Navjoa y Moctezuma, Sonora, promovieron diversas Controversias Constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismas que, una vez desahogados los procedimientos respectivos, el máximo órgano de justicia de nuestro país, emitió la resolución a dichas Controversias.

En la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue debidamente notificada a este Poder Legislativo, el día XX de octubre del presente año, se resolvió la invalidez del Decreto número 88, por el que se aprueban las tablas y planos

de valores unitarios de suelo y construcciones para el ejercicio fiscal 2017, publicado el día 20 de octubre de 2016, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

El efecto de la sentencia antes aludida, es que a los Municipios de Nogales, San Luis Río Colorado, Navojoa y Moctezuma, Sonora, no se les debe imponer el límite del 10% a los aumentos que dichos municipios consideren a los valores unitarios de suelo y construcciones previstos en las tablas de valores, que son propuestas al Congreso del Estado para que sean aprobadas.

En ese sentido, la previsión señalada en el párrafo anterior, referente al tope de aumento del 10% en los aumentos de los valores de suelo y construcciones propuestos por los ayuntamientos de San Luis Río Colorado, Navojoa y Moctezuma, Sonora, para el ejercicio fiscal del año 2017, aprobados en el Decreto número 88, publicado el día 20 de octubre de 2016, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, dejan de tener efecto por mandato de la máxima autoridad jurisdiccional, previsto en las controversias constitucionales 163/2016, 210/2016 y 216/2016.

En razón de lo anterior, los integrantes que conformamos esta Comisión de Régimen Interno Concertación Política, proponemos modificar la parte declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de que no le sea aplicable a los municipios beneficiados con la resolución y cumplir de esta manera, con lo ordenado en las sentencias respectivas.

Por lo anteriormente expuesto y en apego a lo que señalan los artículos 53, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la misma entidad, sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

QUE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO QUE APRUEBA LAS PROPUESTAS DE PLANOS Y TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN, PRESENTADAS POR DIVERSOS

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo Primero del Decreto que Aprueba las Propuestas de Planos y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y construcción, presentadas por diversos Ayuntamientos del Estado para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, para quedar como sigue:

ARTÍCULO PRIMERO.- El Congreso del Estado de Sonora aprueba, en sus términos, las propuestas de planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción aprobadas por los ayuntamientos de Aconchi, Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Átil, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benjamín Hill, Caborca, Cananea, Carbó, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Granados, Huachinera, Huásabas, Huépac, Ímuris, La Colorada, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari de García, Navojoa, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, San Javier, San Luis Río Colorado, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Úres, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora, Sonora.

El Congreso del Estado de Sonora aprueba, en sus términos, las propuestas de planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción aprobadas por los ayuntamientos de Agua Prieta, Benito Juárez, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Nogales y Santa Ana, excepto aquellas propuestas que, comparadas con los planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción autorizados para el ejercicio fiscal 2016, representen un incremento igual o superior a 11%, en cuyo caso se tendrá por autorizado únicamente un incremento del 10%.

ARTÍCULO SEGUNDO al ARTÍCULO CUARTO.- ...

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Finalmente, con fundamento en lo establecido por la fracción III del artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, solicitamos que el presente asunto sea considerado como de urgente y obvia resolución y sea dispensado el trámite de comisión para que sea discutido y aprobado, en su caso, en esta sesión.

ATENTAMENTE

Hermosillo, Sonora, a 31 de octubre de 2017.

C. DIP. JESÚS EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH

C. DIP. LUIS GERARDO SERRATO CASTELL

C. DIP. FERMÍN TRUJILLO FUENTES

C. DIP. MARÍA CRISTINA MARGARITA GUTIÉRREZ MAZÓN

HONORABLE ASAMBLEA:

Los suscritos Diputados, Rafael Buelna Clark, Fermín Trujillo Fuentes y Javier Dagnino Escobosa, integrantes de la Comisión Especial Río Sonora y de esta Sexagésima Primera Legislatura, en ejercicio del derecho de iniciativa consagrado en los artículos 53, fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo ante esta honorable Asamblea con el propósito de someter a su consideración, **INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA EMPRESA MINERA GRUPO MÉXICO Y A LA FUNDACIÓN GRUPO MÉXICO A.C., PARA QUE SE INCLUYA A LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO SONORA, EN EL PROGRAMA DÍA DEL VOLUNTARIO DE LA FUNDACIÓN GRUPO MÉXICO**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derrame accidental de diversas sustancias químicas y materiales altamente contaminantes provenientes de la empresa minera Grupo México, sobre los cauces del arroyo “Tinajas”, el Río Bacanuchi y el Río Sonora, que alimenta a la presa “El Molinito”, en perjuicio de los habitantes de los municipios de Bacoachi, Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures, mantiene la afectación de la zona.

Esta tragedia, considerada como el mayor desastre ambiental causado por la industria minera en la historia mexicana, nos llevó a plantear ante esta Soberanía, en conjunto con nuestros diputados, Teresa María Olivares Ochoa y José Ángel Rochin López, una iniciativa de Ley con el objeto crear una zona económica especial en beneficio de los habitantes de la región Río Sonora, que se vieron afectados productiva, económica y socialmente, por esta lamentable contaminación accidental, misma iniciativa que fue apoyada y enriquecida por todos los integrantes de esta LXI Legislatura.

Producto de esta Ley, la cual fue aprobada y publicada como Ley número 178, que crea la Zona Económica Especial para el Río Sonora, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, Número 15, Sección I de fecha 20 de febrero de 2017, entre las numerosas acciones realizadas con ese motivo y a las cuales hemos dado puntual seguimiento, se estableció la Comisión Intersecretarial que ordena dicha normatividad, la cual, para sesionar válidamente, debe de contar con la asistencia de su presidente y de la mayoría de sus integrantes, ya que está conformada por la Secretaría de Hacienda que la preside, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y Cultura, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Seguridad Pública, todas del Gobierno del Estado de Sonora, así como de los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos participantes en la Zona y todas aquellas dependencias cuya participación sea requerida en el marco de este noble esfuerzo; lo que nos da una idea de la gravedad y magnitud de las repercusiones generadas por el problema de contaminación que prevalece en las comunidades que se encuentran en el cauce del Río Sonora, y la importancia de encontrar soluciones efectivas para los habitantes de esa zona.

Derivado de la implementación de la Comisión Intersecretarial de la Zona Económica Río Sonora, cuyo objeto es coordinar a los ayuntamientos, sector privado, sociedad civil, así como a las dependencias y entidades competentes en la planeación, establecimiento y operación de la zona, tal y como se establece en la ley de referencia, se cito a la Segunda Reunión Formal de la Comisión Intersecretarial de la Zona Económica Río Sonora, la cual se realizó el pasado día miércoles 25 de octubre de 2017, en el Palacio de Gobierno, ubicado en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, con el objeto fundamental de fijar la política para el establecimiento y desarrollo de la zona.

Con sumo agrado recibimos la noticia el pasado mes de septiembre, que con el propósito de fortalecer y garantizar la legalidad y transparencia en los trabajos que se llevan a cabo en la Zona del Río Sonora, el Banco de Desarrollo de América del Norte se incorporó a los trabajos de la Comisión Intersecretarial, para fortalecer y coordinar

el Plan de Desarrollo que se elabora de acuerdo a la Ley en cita, para desarrollar políticas públicas que ayuden a crear infraestructura y acciones de alto impacto en los municipios de la Zona Especial Río Sonora, en beneficio de las familias que habitan en esa región.

De acuerdo con su información oficial, el Banco de Desarrollo de América del Norte, también conocido por sus siglas BDAN o NADBANK, por sus siglas en inglés, se estableció en San Antonio, Texas, e inició operaciones el 10 de noviembre de 1994, con las primeras aportaciones de capital suscrito por México y Estados Unidos. Fue creado junto con su institución hermana, la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), bajo los auspicios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para atender problemas ecológicos en la región fronteriza entre México y Estados Unidos. Las dos instituciones operan de conformidad con el “Acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre el Establecimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del Norte” que se firmó en noviembre de 1993, y trabajan conjuntamente con comunidades y patrocinadores de proyectos en ambos países para desarrollar y financiar las infraestructuras necesarias para un medio ambiente limpio y saludable para los residentes en la zona fronteriza.

Con este antecedente, vemos con beneplácito que, para esta segunda reunión formal de la Comisión Intersecretarial, en el Orden del Día se contempló revisar las propuestas recibidas para el Programa de Desarrollo que se implementa en los municipios de la zona afectada, los avances que ha logrado el Banco de Desarrollo de América del Norte en el Programa de Desarrollo, la participación del sector privado en los trabajos que se llevan a cabo en la zona, además de tratar diversos asuntos generales que surgieron durante el transcurso de la reunión.

Es muy importante todo el apoyo que se pueda obtener para aliviar el sufrimiento que ha ocasionado este grave problema, la realidad es que los nocivos efectos de esa catástrofe ecológica aún siguen lastimando la economía, la salud y la calidad de vida de todos los habitantes de la zona. Es por ello que, el hecho de que el Banco de Desarrollo

de América del Norte se haya sumado a los trabajos de la Zona Económica Especial Río Sonora, es más que bienvenido y aplaudido por la Comisión Especial Río Sonora y seguramente por los pobladores de la región y seguramente, por todos los sonorenses.

Ahora bien, la Fundación Grupo México A.C., llevo a cabo, este 2017, por quinto año consecutivo, un programa denominado "Día del Voluntario" en varios municipios de catorce Estados de la República, incluido el Estado de Sonora, así como, en dos Estados de la Unión Americana y dos provincias de Perú; lugares en los que tiene presencia esta gran empresa multinacional. De acuerdo con lo reporta la Fundación Grupo México, en este año se beneficiaron a más de 95 mil personas y 45 instituciones de 32 comunidades de los lugares antes mencionados, contando con la participación de 7,200 empleados de Grupo México, quienes, junto a sus familias, sumaron más de 29 mil voluntarios que trabajaron en beneficio de escuelas, espacios públicos, instituciones sociales y centros de atención al migrante, realizando actividades como pintura exterior e interior, mejoramiento de infraestructura, rehabilitación de áreas recreativas, limpieza exterior e interior y reforestación de áreas verdes. Todo lo anterior, contando con el apoyo de las divisiones de Infraestructura, Transporte y Minería de Grupo México, así como, de la empresa CINEMEX, que también forma parte de este importante grupo empresarial.

Sin querer restarle mérito a esta loable labor de la Fundación Grupo México, llama la atención que para la realización de las actividades del Día del Voluntario que se efectuaron en nuestro Estado, fueron tomados en cuenta los municipios de Agua Prieta, Cananea, Nacozari, Esqueda, Hermosillo y Guaymas, y sorprende sobremanera que no se haya considerado promover las actividades que se llevan a cabo con motivo de la celebración de este día tan importante, en los municipios afectados por el desastre ecológico que tuvo su origen, precisamente, en una de las más importantes instalaciones mineras de Grupo México, y que tanta carga negativa le generó a la imagen de dicha empresa, en la opinión pública estatal, nacional e, incluso, a nivel internacional.

Si bien es verdad, la mina de Buenavista del Cobre S.A. de C.V., filial de Grupo México, se encuentra en el Municipio de Cananea, Sonora, uno de los

municipios beneficiados con el programa del Día del Voluntario, a la hora de llevar a cabo este tipo de actividades de vinculación con la comunidad, la empresa minera debe considerar el fuerte lazo que lo une a todos los municipios del Río Sonora, precisamente porque depende en gran medida de esta afluyente acuífera para sus actividades y, de igual manera, cualquier afectación a este afluyente natural es resentida por las comunidades de estos municipios, por lo que no puede negarse que existe presencia de Grupo México en estos lugares. Eso, sin contar la gran cantidad de trabajadores de esta mina que son habitantes de la región.

Aún sin considerar los vínculos antes mencionados entre Grupo México y los municipios del Río Sonora, basta el sólo hecho de la afectación ecológica causada, para que la empresa procure realizar acciones con las que demuestre sensibilidad y buscar acercarse a estas comunidades, para que los sonorenses podamos percibir que realmente le importa aportar soluciones a este grave problema. Es verdad que las acciones del voluntariado no son la respuesta definitiva para esta problemática, pero será una gran contribución para ser parte del plan de desarrollo que se construye en la Comisión Intersecretarial con la asesoría de NADBANK lo que contribuirá a fomentar el interés social en prestar servicio voluntario en la región, además de crear condiciones para mejorar la percepción pública que se tiene sobre la empresa minera de Grupo México, lo cual es importante para el Estado, por los miles de empleos y la derrama económica que dicha empresa genera para los sonorenses.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con punto de:

ACUERDO

ÚNICO.- El Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar, respetuosamente, a la empresa minera Grupo México y a la Fundación Grupo México A.C., para que dentro de las actividades que se realizan en el marco del programa Día del Voluntario de Fundación

Grupo México, se incluyan a los municipios de Bacoachi, Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures.

Finalmente, con fundamento en el artículo 124, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita que el presente asunto sea considerado de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite de comisión, para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión.

A T E N T A M E N T E

Hermosillo, Sonora, a 31 de octubre de 2017.

C. DIP. RAFAEL BUELNA CLARK

C. DIP. FERMÍN TRUJILLO FUENTES

C. DIP. JAVIER DAGNINO ESCOBOSA

HONORABLE ASAMBLEA:

Los suscritos diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de nuestro derecho constitucional de iniciativa previsto por el artículo 53, fracción III de la Constitución Política del Estado, acudimos ante esta Soberanía, con el objeto de someter a su consideración, la presente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA**, la cual sustentamos de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los artículos 1, 2, fracción III, 3, fracciones II y III, 8, 9 fracción II, 10, 155 y 260 de la Ley Estatal de Responsabilidades establecen el nuevo esquema según el cual deberán de investigarse y procesarse las faltas administrativas que cometen los servidores públicos.

De dichos preceptos legales se desprenden las figuras de autoridad investigadora y autoridad substanciadora, las cuales no podrán recaer en la misma persona.

Debe precisarse que aún y cuando los Órganos Internos de Control serán los responsables de investigar, sustanciar, sancionar y ejecutar en su caso, las faltas administrativas cometidas por los servidores públicos, por conducto de las autoridades investigadoras y substanciadoras, dichos Órganos de Control solo conocerán de las faltas administrativas **no graves**, ya que aquellas faltas graves deberán ser conocidas y resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado.

En efecto, las fracciones II y III, del artículo 3 de la Ley Estatal de Responsabilidades definen que la Autoridad Investigadora será la encargada de la investigación de faltas administrativas, en tanto la Autoridad Sustanciadora será la que

dirija y conduzca el procedimiento de responsabilidad administrativa, desde la admisión del Informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial, tratándose de faltas administrativas graves y cometidas por particulares; y hasta el periodo de alegatos tratándose de faltas administrativas no graves. La función de la Autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una Autoridad investigadora.

Por su parte, el diverso artículo 155 de la indicada Ley Estatal señala que la Secretaría de la Contraloría del Estado, los Órganos internos de control y el ISAF, contarán con la estructura orgánica necesaria para realizar las funciones correspondientes a las autoridades investigadoras y substanciadoras, y garantizarán la independencia entre ambas en el ejercicio de sus funciones.

Ahora bien, la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece en sus artículos 194 a 197 que la Contraloría interna, será responsable del control y evaluación del desarrollo administrativo del Congreso del Estado, siendo un órgano funcionalmente autónomo que depende directamente del pleno del Congreso del Estado, teniendo las atribuciones de proponer y aplicar las normas y criterios en materia de control y evaluación que deban observar las dependencias del Congreso del Estado e instaurar procedimientos administrativos y proponer a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política las sanciones en los términos de la reglamentación interna a los funcionarios de las dependencias del Congreso del Estado.

Por lo que se ha expuesto, se considera que la Contraloría Interna del Poder Legislativo debe adecuarse al nuevo sistema estatal de responsabilidades administrativas, para lo cual debe crearse la Autoridad Investigadora y la Substanciadora que de curso a los procedimientos de responsabilidad que se implementen a todo servidor público perteneciente a este Congreso del Estado, por lo que ponemos a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA

ARTÍCULO ÚNICO. -Se reforman los artículos 109 y 195 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, para quedar de la siguiente manera:

ARTÍCULO 109.- La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política tendrá las siguientes atribuciones:

I a la XIII.- Permanecen intocadas.

XIV.- Designar a la autoridad investigadora y a la autoridad substanciadora que instaurará los procedimientos administrativos en contra de los funcionarios de las dependencias del Congreso del Estado; y

XV.- Las demás que le confiera esta ley, el pleno del Congreso del Estado y la Diputación Permanente.

ARTÍCULO 195.- La Contraloría Interna, será un órgano funcionalmente autónomo y dependerá directamente del pleno del Congreso del Estado, bajo la supervisión de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, teniendo las siguientes atribuciones:

I y II.- Permanecen intocadas.

III.- Instaurar procedimientos administrativos, **por conducto de la autoridad investigadora y substanciadora**, a los funcionarios de las dependencias del Congreso del Estado;

IV y V.- Permanecen intocadas.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Atentamente

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI EN EL CONGRESO DEL ESTADO

Honorable Asamblea:

Las suscritas, Lina Acosta Cid, Lisette López Godínez, Célida López Cárdenas diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en nuestro carácter de diputadas integrantes de esta LXI Legislatura del Congreso del Estado de Sonora y ejerciendo el derecho constitucional de iniciativa previsto por el artículo 53, fracción III de la Constitución Política del Estado, acudimos ante esta Soberanía, con el objeto de someter a su consideración, la presente **iniciativa con proyecto de Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado de Sonora**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México, el avance democrático que hoy vivimos, ha despertado en todos los ámbitos el libre juego de las fuerzas económicas, políticas y sociales, así como el legítimo interés por participar de los distintos agentes que las conforman.

De tal suerte, la sociedad civil se ha venido organizando desde hace años y es ahora protagonista en los temas centrales del país: derechos humanos, preservación del medio ambiente, educación, asistencia social, salud, seguridad pública, entre otros, realizando actividades que por su propia naturaleza el gobierno o el mercado no pueden atender o que dejaron de hacerlo, generándose espacios para la participación mediante diversos proyectos e iniciativas de las organizaciones sociales.

Esto resultó más notorio a partir de los sismos de 1985 cuando la sociedad, en aras de solventar las necesidades que apremiaban a los más afectados, decidió movilizar los recursos a su alrededor, tanto materiales como humanos, especialmente en el trabajo voluntario. Desde entonces, las organizaciones que accionan al interior de la sociedad han tenido un crecimiento sustancial.

En este proceso la sociedad ha generado valores, principios, prácticas sociales y costumbres que han llevado a la conservación, renovación y transformación de instituciones. En este marco, las organizaciones de la sociedad civil son reflejo de la pluralidad social y se hacen conscientes de las demandas y necesidades de la ciudadanía, con lo que pueden ayudar de manera efectiva a la construcción y cimentación de nuestra democracia, ser actores centrales del desarrollo incluyente, así como mejorar las oportunidades y algunos problemas que aquejan a la sociedad.

En un régimen democrático, las personas con iniciativas a favor de los demás y de mejora de su entorno, deben contar con la libertad para organizarse y desarrollar sus potencialidades para el beneficio de la comunidad en la que se desenvuelven.

No debemos olvidar que la participación ciudadana es un pilar del fortalecimiento de la democracia y de la gobernabilidad democrática, permite estar más cerca del ejercicio de la responsabilidad pública e incluso tener corresponsabilidad en el desarrollo. Aumenta la comprensión del quehacer público y facilita la transparencia y la rendición de cuentas.

Sin embargo, a pesar de la creciente participación de este sector en la vida pública de nuestro país, la participación e incidencia en políticas públicas aún es muy incipiente, por lo que es importante generar espacios institucionales para promoverla.

Un paso importante para impulsar el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil se da con la promulgación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2004. Dicha Ley establece los derechos de las organizaciones a recibir apoyos y estímulos públicos, además de crear un registro de organizaciones sujetas a recibir apoyos y estímulos de la Administración Pública Federal, cuyas funciones están encaminadas a la transparencia, la difusión de la información, sobre cómo acceder a dichos estímulos y el

reconocer la importancia que tienen para el desarrollo integral del país. En otras palabras, a partir de esta Ley se establece una relación de apertura y cooperación entre el gobierno y la sociedad civil.

Legislar en este tema es indispensable para avanzar en la institucionalización de una democracia de ciudadanía, brindando certidumbre jurídica a la relación sociedad civil y Estado. Además de que, conforme al estudio sobre la Cuenta Satélite de las Instituciones sin Fines de Lucro de México 2008 realizado por el INEGI, la aportación de las organizaciones sociales a la economía nacional ascendió a 238 mil 278 millones de pesos, equivalente al 1.96 % del PIB nacional, dato que resultó mayor que la suma del PIB, en valores básicos, de Colima y Tlaxcala, para el mismo año. En el contexto internacional fue comparable con el PIB de algunos países latinoamericanos. Por ejemplo, fue mayor en 26.9% que el PIB de Paraguay, 28.4% que el de Bolivia, 53.3% que el de Honduras y fue 3.4 veces el de Nicaragua. Para el año 2011, el PIB de las Instituciones sin Fines de Lucro fue de 316 mil 394 millones de pesos, representando el 2.29% del PIB Nacional¹.

Por su parte, el estudio sobre la Cuenta Satélite de las Instituciones sin Fines de Lucro de México Año base 2008 Resultados de la encuesta 2014² elaborado también por el INEGI, señala que para 2014, la aportación de las organizaciones sociales a la economía nacional ascendió a 490 mil 900 millones de pesos, equivalente al 3.0 % del PIB nacional.

De acuerdo al Índice CIVICUS de la Sociedad Civil en México, presentado en agosto de 2011, la segunda fuente de ingresos para las organizaciones civiles son las provenientes de recursos que otorga el Gobierno, representando el 22% contra el 23% que generan por el concepto de servicios.

¹http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/satelite/sin_fines_lucro/2008_2011/CSISFLM08_11.pdf

²http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825084769.pdf

Desafortunadamente este proceso no ha sido igual a nivel subnacional, ya que en muchos estados no se cuenta con un marco legal que fomente la labor de la sociedad civil organizada ni que cuente con un registro documental sistematizado que permita analizar la realidad que viven las organizaciones y los gobiernos locales.

Actualmente, 17 estados de la República Mexicana cuentan con una Ley Estatal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. La mayoría de los estados que cuentan ya con una legislación en materia de sociedad civil contemplan apoyos y estímulos económicos y fiscales para las organizaciones, la participación de éstas en la formulación de políticas públicas, así como asesoría y capacitación. Además, contemplan una autoridad responsable para el cumplimiento de la ley, mayoritariamente de consulta.

Como se puede observar, el Estado de Sonora no cuenta con un marco normativo que fomente las actividades de las organizaciones, ni les garantice el acceso a apoyos y estímulos, ni mucho menos su participación en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Tampoco se cuenta con un registro oficial de organizaciones que trabajan en la entidad.

De acuerdo con el Directorio de Instituciones Filantrópicas del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi)³, el número de instituciones registradas en el país formalmente constituidas es de 25,796 organizaciones, siendo 577 del Estado de Sonora, lo que representa un 2.23% del total, ubicándonos en el décimo quinto lugar a nivel nacional, respecto del número de organizaciones sociales, por debajo de entidades como la Ciudad de México que cuenta con el 24.28 %, el Estado de México con el 7.85%,

³ <http://200.57.117.52/Directorio/Busquedas/frmBusquedaAvanzada.aspx>

Jalisco con el 5.56%, Veracruz con el 5.50%, Nuevo León con el 4.47%, Oaxaca con el 3.91%, Michoacán con el 3.74%, Baja California con el 3.59%, Chihuahua con el 3.29%, Puebla con el 3.11%, Guanajuato con el 2.95%, Coahuila con el 2.93% y Chiapas con el 2.61% de organizaciones.

Por su parte el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) tiene en su registro a 37,562 organizaciones, 706 en el Estado de Sonora⁴. En este registro nuestro estado está, también, por debajo de entidades como la Ciudad de México quien cuenta con 7,606 organizaciones, Estado de México con 3,302, Veracruz con 2,618, Oaxaca con 2,499, Chiapas con 1,685, Michoacán con 1,492, Jalisco con 1,463, Puebla con 1,401, Baja California con 1,261, Chihuahua con 1,050, Guanajuato con 1,036, Coahuila con 820 y Nuevo León con 753. Sin embargo, en cuanto a la relación de organizaciones por número de habitantes encontramos que, aproximadamente, para el D. F. existe una OSC por cada 1,181 habitantes, para el Estado de México existe una OSC por cada 9,914 habitantes, para Veracruz una OSC por cada 3,105 habitantes, para Chiapas la relación es de una OSC por cada 3,103 habitantes y para Oaxaca una OSC por cada 1,592, en comparación Sonora que la relación es de una organización por cada 4,071 habitantes.

El desarrollo y crecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en nuestro estado requiere consolidar y fortalecer constantemente su relación institucional con las instancias Ejecutivas y Legislativas, alentando la participación ciudadana en la definición de metas y caminos para el desarrollo integral de nuestra entidad.

Además, el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2021⁵ señala, desde sus primeras páginas, que sus ejes estratégicos “marcan la pauta para un desarrollo del estado con una amplia participación ciudadana y una visión municipalista que procura la transversalidad en todos los ejes, para conformar un gobierno eficiente, innovador,

⁴ <http://www.corresponsabilidad.gob.mx/?p=f8e8b1feff822753a39b21de69259fd6&>

⁵ <http://www.sonora.gob.mx/gobierno/sonora-trabaja.html>

transparente y con sentido social, asimismo promueve el respeto a los derechos humanos y la igualdad de género”.

Es por ello que la presente iniciativa propone la creación de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado de Sonora con el fin de impulsar el actuar de la sociedad civil organizada, estableciendo canales institucionales de interlocución entre el Estado y las organizaciones; garantizando el acceso a apoyos y estímulos públicos transparentes, y su participación en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. También busca la creación de un Registro Estatal de Organizaciones que permita analizar la realidad de las organizaciones sociales en nuestro estado, así como implementar mecanismos de transparencia en el uso de los recursos públicos.

Esta Ley de fomento se propone con seis capítulos, los cuales están armonizados con la Ley Federal en la materia.

De tal suerte, el Capítulo Primero “Disposiciones Generales” establece el objeto, las definiciones necesarias para su correcta interpretación, así como los sujetos de la presente Ley.

El Capítulo Segundo “De las Organizaciones de la Sociedad Civil” establece las actividades que podrán realizar las organizaciones de la sociedad civil que busquen ser beneficiadas, así como los derechos y las obligaciones de las mismas organizaciones.

El Capítulo Tercero “De las Autoridades y las Acciones de Fomento” contempla la creación de la Comisión Estatal de Fomento con el objeto de facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y medidas para el fomento de las actividades de las organizaciones. Establece su conformación y sus atribuciones.

También establece las acciones de fomento que pueden adoptar las autoridades, tanto estatales como municipales, para propiciar el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil.

Por último, se marca los lineamientos generales para la asignación de recursos públicos destinados a las organizaciones sociales para el fomento de sus actividades, así como de los reconocimientos de las organizaciones cuyas actividades son sujetas a fomento por la presente Ley.

El Capítulo Cuarto “Del Registro Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil y del Sistema de Información” contempla la creación de un registro que concentre y clasifique el acervo documental de las organizaciones, así como establecer un sistema de información que permita conocer el número real de organizaciones en la entidad, así como la naturaleza y acciones de las mismas. También permitirá visibilizar las actividades de las organizaciones a potenciales donantes y voluntarios.

El Capítulo Quinto “Del Consejo Técnico Consultivo Estatal” establece a un consejo consultivo, de carácter honorífico, que tendrá por objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto de la aplicación y cumplimiento de esta Ley, así como su integración y funciones.

Por último, se contempla un Capítulo Sexto “De las Infracciones y Sanciones” que establece los supuestos por los que se cae en infracciones a la presente Ley y las sanciones a las que son acreedoras las organizaciones, así como los servidores públicos.

En razón de lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración el siguiente proyecto de:

LEY

DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA

**Capítulo Primero
Disposiciones Generales**

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto:

I. Fomentar las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Sonora señaladas en el artículo 4 de esta Ley;

II. Establecer los derechos y las obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil que cumplan con los requisitos que esta Ley establece para que sus actividades sean objeto;

III. Establecer las facultades de las autoridades que la aplicarán y los órganos que coadyuvarán en ello;

IV. Determinar las bases sobre las cuales la Administración Pública Estatal fomentará las actividades a que se refiere el artículo 4 de la presente Ley;

V. Establecer los procedimientos de asignación y uso de fondos públicos que pudieran solicitar y/o recibir las organizaciones de la sociedad civil de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria del Gobierno del Estado;

VI. Establecer las directrices administrativas para el fomento de las actividades, con apego a la legislación aplicable en la materia y en observancia a lo establecido en el Plan Estatal o Municipal de Desarrollo, según corresponda; y

VII. Favorecer la coordinación entre las dependencias y entidades del Gobierno Estatal y Municipal y las organizaciones de la sociedad civil sujetas a ser beneficiadas con los apoyos establecidos en la presente Ley.

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Autobeneficio: Bien, utilidad o provecho que obtengan los miembros de una organización de la sociedad o sus familiares hasta cuarto grado civil, mediante la utilización de los apoyos y estímulos públicos que le hayan sido otorgados para el cumplimiento de los fines de la organización;

II. Beneficio mutuo: Bien, utilidad o provecho provenientes de apoyos y estímulos públicos que reciban, de manera conjunta, los miembros de una o varias organizaciones y los funcionarios públicos responsables y que deriven de la existencia o actividad de la misma;

III. Comisión: A la Comisión Estatal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil;

IV. Consejo: Al Consejo Técnico Consultivo Estatal;

V. Dependencias: Unidades de la Administración Pública Estatal;

VI. Entidades: A los organismos, empresas y fideicomisos de la Administración Pública Estatal, Organismos Paraestatales, Municipios y Organismos paramunicipales;

VII. Organizaciones: Son aquellas legalmente constituidas, sin fines de lucro, con autonomía interna y de gestión e independientes de la estructura de gobierno;

VIII. Redes: A las agrupaciones de organizaciones que se apoyan entre sí, prestan servicios de apoyo a otras para el cumplimiento de su objeto social y fomentan la creación y asociación de organizaciones, y

IX. Registro: Al Registro Estatal de Organizaciones en el que se inscriban las organizaciones de la sociedad civil con el fin de ser objeto de fomento.

X. Sistema de Información: Al Sistema de información establecido en el Registro Estatal de Organizaciones.

Artículo 3. Podrán acogerse y disfrutar de los apoyos y estímulos que establece esta Ley, todas las organizaciones mexicanas con domicilio en el Estado de Sonora inscritas en el Registro que, estando legalmente constituidas, realicen alguna o algunas de las actividades a que se refiere el artículo 4 de la presente Ley dentro del territorio del Estado de Sonora y no persigan fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o religioso, sin menoscabo de las obligaciones señaladas en otras disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia.

Capítulo Segundo **De las Organizaciones de la Sociedad Civil**

Artículo 4. Para efectos de esta Ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

I. Asistencia social, conforme a lo establecido en la Ley de Asistencia Social y en la Ley General de Salud;

II. Apoyo a la alimentación popular;

III. Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público;

IV. Asistencia jurídica;

V. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas;

VI. Promoción de la equidad de género;

VII. Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad;

VIII. Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural;

IX. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos;

X. Promoción del deporte;

XI. Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y cuestiones sanitarias;

XII. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales;

XIII. Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico;

XIV. Fomento de acciones para mejorar la economía popular;

XV. Participación en acciones de protección civil;

XVI. Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades objeto de fomento por esta Ley;

XVII. Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana; y

XVIII. Las que determinen otras leyes estatales y municipales.

Artículo 5. Las organizaciones, para el ejercicio de sus actividades se sujetarán conjuntamente a las normas establecidas en la Legislación Estatal y Municipal vigente, atendiendo los Planes de Desarrollo.

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, las organizaciones de la sociedad civil tienen los siguientes derechos:

I. Inscribirse en el Registro, así como solicitar su baja del mismo, en los términos establecidos en el Reglamento de la presente Ley;

II. Integrarse a los órganos de participación y consulta instaurados por la Administración Pública Estatal y Municipal, en las áreas vinculadas con las actividades a que se refiere el artículo 4 de la presente Ley;

III. Participar en la consulta para la elaboración, actualización y ejecución de los planes estatales y municipales de desarrollo, así como de los planes y proyectos que deriven de estos en términos de las disposiciones legales aplicables a la materia;

IV. Participar en la planeación, elaboración, promoción y ejecución de las políticas tanto en el ámbito estatal como municipal en los términos que establezcan las leyes aplicables en la materia;

V. Participar en los mecanismos de contraloría y vigilancia social que establezcan u operen dependencias y entidades, de conformidad con la normatividad jurídica y administrativa aplicable;

VI. Acceder a los apoyos y estímulos públicos que para fomento de las actividades previstas en el artículo 4 de esta Ley, establezcan las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;

VII. Gozar de los incentivos fiscales y demás apoyos económicos y administrativos, que establezcan las disposiciones jurídicas en la materia;

VIII. Recibir donativos y aportaciones, en términos de las disposiciones fiscales y demás ordenamientos aplicables;

IX. Coadyuvar con las autoridades competentes, en los términos de los convenios que al efecto se celebren, en la prestación de servicios públicos relacionados con las actividades previstas en el artículo 4 de esta Ley;

X. Acceder a los beneficios para las organizaciones que se deriven de los convenios o tratados internacionales y que estén relacionados con las actividades y finalidades previstas en esta Ley, en los términos de dichos instrumentos;

XI. Recibir asesoría, capacitación y colaboración por parte de dependencias y entidades para el mejor cumplimiento de su objeto y actividades, en el marco de los programas que al efecto formulen dichas dependencias y entidades; y

XIII. Ser respetadas en la toma de las decisiones relacionadas con sus asuntos internos.

Artículo 7. Para acceder a los apoyos y estímulos que otorgue la Administración Pública Estatal y Municipal, dirigidos al fomento de las actividades que esta Ley establece, las organizaciones de la sociedad civil tienen, además de las previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables, las siguientes obligaciones:

I. Estar inscritas en el Registro;

II. Haber constituido en forma legal, sus órganos de dirección y de representación;

III. Contar con un sistema de contabilidad de acuerdo con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados;

IV. Proporcionar la información que les sea requerida por autoridad competente sobre sus fines, estatutos, programas, actividades, beneficiarios, fuentes de financiamiento nacionales o extranjeras o de ambas, patrimonio, operación administrativa y financiera, y uso de los apoyos y estímulos públicos que reciban;

V. Informar anualmente a la Comisión sobre las actividades realizadas y el cumplimiento de sus propósitos, así como el balance de su situación financiera, contable y patrimonial, que reflejen en forma clara su situación y, especialmente, el uso y resultados derivados de los apoyos y estímulos públicos otorgados con fines de fomento, para mantener actualizado el Sistema de Información y garantizar así la transparencia de sus actividades;

VI. Presentar los informes establecidos en el artículo 19 de la presente Ley, según corresponda;

VII. Notificar al Registro de las modificaciones a su acta constitutiva, así como los cambios en sus órganos de gobierno, dirección y representación en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la modificación respectiva;

VIII. Inscribir en el Registro la denominación de las Redes de las que forme parte, así como informarle cuando deje de pertenecer a las mismas;

IX. En caso de disolución, transmitir los bienes que haya adquirido con apoyos y estímulos públicos, a otra u otras organizaciones que realicen actividades objeto de fomento y que estén inscritas en el Registro.

La organización que se disuelva o se dé de baja en el Registro, tendrá la facultad de elegir a quién transmitirá dichos bienes observando las disposiciones legales aplicables en la materia e informar a la Comisión a través del formato que disponga para tal efecto;

X. Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de su objeto social;

XI. Promover la profesionalización y capacitación de sus integrantes;

XII. No realizar actividades de proselitismo partidista o electoral;

XIII. No realizar proselitismo o propaganda con fines religiosos; y

XIV. Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de beneficiarios.

Artículo 8. Las organizaciones de la sociedad civil no podrán recibir los apoyos y estímulos públicos previstos en esta Ley cuando incurran en alguno de los siguientes supuestos:

I. Forme parte de sus órganos de administración y/o representación un servidor público, de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 64 de la Ley General de Desarrollo Social, y demás disposiciones aplicables;

II. Exista entre sus directivos y los servidores públicos, encargados de otorgar o autorizar los apoyos y estímulos públicos, relaciones de interés o nexos de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado, o sean cónyuges; y

III. Contraten, con recursos públicos, a personas con nexos de parentesco con los directivos de la organización, ya sea por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado.

Capítulo Tercero **De las Autoridades y las Acciones de Fomento**

Sección Primera **De las Autoridades**

Artículo 9. El Ejecutivo Estatal constituirá a la Comisión con el objeto de facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y medidas para el fomento de las actividades establecidas en el artículo 4 de esta Ley.

La Comisión se conformará por:

- I. El Secretario de Gobierno, quien la presidirá;
- II. El Secretario de Desarrollo Social;
- III. El Secretario de Hacienda;
- IV. Un representante de los municipios por cada región en la que se divide el Estado; y
- IV. Dos representantes del Poder Legislativo del Estado, quienes contarán únicamente con voz, los cuales serán la diputada o el diputado que presida las Comisiones Legislativas de Desarrollo Social y Asistencia Pública y de Anticorrupción.

Las demás dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal podrán participar a invitación de la Comisión, cuando se traten asuntos de su competencia.

Los representantes de los municipios serán elegidos conforme a lo establecido en el reglamento correspondiente.

La Secretaría Técnica estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social. Esta dependencia tendrá la facultad de interpretación de esta Ley, para efectos administrativos.

Artículo 10. Para el cumplimiento de su encargo, la Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I. Definir las políticas públicas, a nivel estatal y municipal, para el fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil;

II. Realizar la evaluación de las políticas y acciones de fomento de las actividades que señala la presente Ley;

III. Promover el diálogo continuo entre los sectores público, social y privado para mejorar las políticas públicas relacionadas con las actividades señaladas en el artículo 4 de esta Ley;

IV. Proveer lo necesario para la operación del Registro;

V. Publicar en forma anual en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y en una de los diarios de mayor circulación en la entidad, el listado de organizaciones que se encuentren inscritas en el Registro;

VI. Promover las medidas de simplificación administrativa, que faciliten la realización de las actividades de las organizaciones a que se refiere la presente Ley;

VII. Coordinar la correcta fiscalización de la aplicación de los recursos públicos que con motivo de esta Ley reciban las organizaciones, en los términos y condiciones que señale el Reglamento de la presente Ley;

VIII. Extender reconocimientos a las organizaciones de la sociedad civil que se hayan distinguido por el cumplimiento permanentemente de las actividades a que se refiere el artículo 4 de esta Ley;

IX. Conocer, a propuesta de la Secretaría Técnica, de las infracciones e imponer sanciones correspondientes a las organizaciones de la sociedad civil, conforme a lo dispuesto en el Capítulo Sexto de esta Ley;

X. Expedir su reglamento interno; y

XI. Las demás que le señale la Ley.

Artículo 11. La Comisión sesionará cuando menos una vez cada tres meses, con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes; y las decisiones sólo tendrán validez cuando sean tomadas por la mayoría de los asistentes a la sesión, en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 12. La Secretaría de Desarrollo Social será la encargada de coordinar a las dependencias y entidades para la realización de las actividades de fomento a que se refiere la presente Ley, sin perjuicio de las atribuciones que las demás leyes otorguen a otras autoridades.

Sección Segunda De las Acciones de Fomento

Artículo 13. El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos fomentarán el derecho de la sociedad a participar de manera activa y corresponsable en la planeación, ejecución y seguimiento de las políticas públicas que resulten de su interés.

Artículo 14. Las dependencias y las entidades, estatales y municipales, para garantizar el ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 6, fomentarán las actividades de las organizaciones mediante alguna o varias de las siguientes acciones:

I. Otorgamiento de apoyos, estímulos y reconocimientos para los fines de fomento que correspondan, conforme a lo previsto por esta Ley y las demás disposiciones legales y administrativas aplicables;

II. Promoción de la participación de las organizaciones en los órganos, instrumentos y mecanismos de consulta que establezca la normatividad correspondiente, para la planeación, ejecución y seguimiento de políticas públicas;

III. Establecimiento de medidas, instrumentos de información, incentivos y apoyos en favor de las actividades de las organizaciones previstas en el artículo 4 de esta Ley, conforme a su asignación presupuestal;

IV. Diseño y ejecución de instrumentos y mecanismos que contribuyan a que las organizaciones accedan al ejercicio pleno de sus derechos y cumplan con las obligaciones que esta Ley establece;

V. Realización de estudios e investigaciones que permitan apoyar a las organizaciones en el desarrollo de sus actividades;

VI. Celebración de convenios de coordinación entre ámbitos de gobierno, a efecto de que éstos contribuyan al fomento de las actividades objeto de esta Ley; y

VII. Otorgamiento de los incentivos fiscales previstos en las leyes de la materia.

Artículo 15. La Comisión, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, deberá elaborar y publicar un Informe Anual de las acciones de fomento y de los apoyos y estímulos otorgados a favor de las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil que se acojan a esta Ley.

El informe respectivo, consolidado por la Secretaría de Hacienda, se incluirá como un apartado específico del Informe Anual que rinde el Ejecutivo al Congreso del Estado y de la Cuenta Pública, con base en las leyes aplicables.

Sección Tercera

De los Recursos Públicos que se otorguen a las Organizaciones de la Sociedad Civil para el Fomento de sus Actividades

Artículo 16. Las Organizaciones de la Sociedad Civil podrán recibir recursos o fondos públicos para operar programas que persigan las actividades a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, quedando sujetas a la supervisión, control y vigilancia de las dependencias y entidades de la administración pública, estatal o municipal, que otorgue los recursos en coordinación con la Comisión, así como a las disposiciones establecidas en la presente Ley, sin perjuicio de lo que establezcan las leyes respectivas para el uso de fondos públicos en el estado.

Artículo 17. El Gobernador del Estado proveerá, a través de las dependencias y entidades correspondientes, de los recursos destinados a fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil previstas en el artículo 4 de la presente Ley.

Para efectos del párrafo anterior, deberá destinar en el Presupuesto de Egresos del Estado un apartado específico y su anexo respecto a las provisiones de gasto que corresponden al fomento de las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil, a que se refiere la presente Ley.

Artículo 18. Las entidades y dependencias estatales o municipales deberán publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, a más tardar en el mes de febrero de cada año, las Reglas de Operación de los programas que se implementen a efecto de otorgar los recursos a que hace referencia la presente sección.

Artículo 19. Las organizaciones de la sociedad civil que resulten beneficiadas con recursos públicos deberán remitir un informe semestral y uno final sobre la aplicación de los recursos, así como del avance en el proyecto presentado, conforme a lo dispuesto en las Reglas de Operación y en el Reglamento de la presente Ley.

La implementación de los proyectos y la ejecución de los recursos deberá hacerse dentro del ejercicio fiscal correspondiente.

Sección Cuarta

De los Reconocimientos a las Organizaciones de la Sociedad Civil

Artículo 20. La Comisión otorgará un reconocimiento público a aquellas organizaciones de la sociedad civil cuyas actividades fueron sujetas de fomento por esta Ley.

Artículo 21. Anualmente la Comisión hará una evaluación de las organizaciones de la sociedad civil, brindando un reconocimiento público a aquellas que cumplan cabalmente con las obligaciones impuestas por las disposiciones de esta Ley. La Comisión establecerá los criterios a través del reglamento que para el fin expida.

Artículo 22. La Comisión, de acuerdo a lo previsto en el artículo anterior, fomentará las actividades efectuadas por las organizaciones de la sociedad civil haciendo entrega de menciones especiales a las que hubieren superado sus objetivos trazados en dicha anualidad

y diplomas de reconocimiento a todas las demás que hayan realizado sus tareas en cumplimiento a sus estatutos y a lo previsto en esta Ley, y las demás que la misma Comisión disponga.

Capítulo Cuarto

Del Registro Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil y del Sistema de Información

Artículo 23. Se crea el Registro que estará a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión, y se auxiliará por el Consejo. El Registro dispondrá para su operación de los recursos asignados para tal efecto por las dependencias que integran la Comisión.

Artículo 24. El Registro tendrá las funciones siguientes:

I. Inscribir a las organizaciones, siempre que cumplan con los requisitos que establece esta Ley, una vez inscritas, otorgarles constancia de inscripción al Registro;

II. Administrar, concentrar y clasificar el acervo documental en donde se hagan constar los trámites de las organizaciones ante el Registro, conforme a la normatividad en la materia.

III. Establecer un Sistema de Información que identifique, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de esta Ley, las actividades que las organizaciones de la sociedad civil realicen, así como los requisitos a que se refiere el artículo 26 de la presente Ley, con el objeto de garantizar que las dependencias, las entidades y los Municipios cuenten con los elementos necesarios para dar cumplimiento a la misma;

IV. Ofrecer a las dependencias y entidades estatales y municipales, a los municipios y a la ciudadanía en general, información que les permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta Ley por parte de las Organizaciones;

V. Mantener actualizada la información relativa a las organizaciones a que se refiere esta Ley;

VI. Conservar constancias del proceso de registro respecto de aquellos casos en los que la inscripción de alguna organización haya sido objeto de rechazo, suspensión o cancelación, en los términos de esta Ley;

VII. Permitir, conforme a las disposiciones legales vigentes, el acceso a la información que el Registro tenga;

VIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que le correspondan y que estén establecidas en la presente Ley;

IX. Hacer del conocimiento de la Comisión, la existencia de actos o hechos que puedan ser constitutivos de delito;

X. Llevar registro, mediante el Sistema de Información, de aquellas sanciones que imponga la Comisión a las organizaciones de la sociedad civil;

XI. Compartir la información de manera recíproca con el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, conforme los mecanismos establecidos en el Reglamento correspondiente; y

XII. Los demás que establezca el Reglamento de esta Ley, el Reglamento Interno del Registro y otras disposiciones legales.

Artículo 25. El Registro coordinará la operación y funcionamiento de las áreas administrativas establecidas para la atención de los trámites de las organizaciones.

Artículo 26. Para ser inscritas en el Registro, las organizaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Presentar una solicitud de inscripción al Registro;

II. Exhibir su acta constitutiva en la que conste que tienen por objeto social, realizar alguna de las actividades consideradas objeto de fomento, conforme a lo dispuesto por el artículo 4 de esta Ley;

III. Prever en su acta constitutiva o en sus estatutos vigentes, que destinarán los apoyos y estímulos públicos que reciban al cumplimiento de su objeto social;

IV. Estipular en su acta constitutiva o en sus estatutos, que no distribuirán entre sus asociados remanentes de los apoyos y estímulos públicos que reciban y que, en caso de disolución, transmitirán los bienes obtenidos con dichos apoyos y estímulos, a otra u otras organizaciones cuya inscripción en el Registro se encuentre vigente, de acuerdo con lo previsto en la fracción IX del artículo 7 de esta Ley;

V. Señalar su domicilio fiscal;

VI. Informar al Registro la denominación de las Redes de las que formen parte, así como cuando deje de pertenecer a las mismas;

VII. Presentar testimonio notarial que acredite la personalidad y ciudadanía de su representante legal, en su caso;

VIII. Presentar identificación oficial vigente del o los representantes legales.

IX. Exhibir Cédula de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes;

X. Exhibir actas protocolizadas ante notario público en las que consten las modificaciones realizadas a su acta constitutiva.

Los formatos para el trámite de inscripción deberán ser administrados únicamente por la Secretaría Técnica.

Artículo 27. El Registro deberá negar la inscripción a las organizaciones que quisieran acogerse a esta Ley sólo cuando:

I. No acredite que su objeto social consiste en realizar alguna de las actividades señaladas en el artículo 4 de esta Ley;

II. Exista evidencia de que no realiza cuando menos alguna actividad listada en el artículo 4 de la presente Ley;

III. Tenga por objeto alguna de las acciones prohibidas en los términos del artículo 3 de la presente Ley;

IV. La documentación exhibida presente alguna irregularidad; y

V. Exista constancia de que haya cometido infracciones graves o reiteradas a esta Ley u otras disposiciones jurídicas en el desarrollo de sus actividades.

Artículo 28. El Registro resolverá sobre la procedencia de la inscripción en un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir de que reciba la solicitud.

En caso de insuficiencia en la información que consta en la solicitud, deberá abstenerse de inscribir a la organización y le notificará dicha circunstancia otorgándole un plazo de treinta días hábiles para que las subsane. Vencido el plazo, si no lo hiciera, se desechará la solicitud.

Artículo 29. La administración y el funcionamiento del Registro se organizarán conforme al Reglamento interno que expida la Comisión.

Artículo 30. El Sistema de Información del Registro contendrá los datos de las organizaciones que hayan solicitado su inscripción ante el Registro y estarán disponibles para consulta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipios.

Artículo 31. En el Registro concentrará toda la información que forme parte o se derive de los trámites de las organizaciones en el mismo. Dicha información incluirá todas las acciones de fomento que las dependencias o entidades emprendan con relación a las organizaciones inscritas en el Registro.

Artículo 32. Todas las dependencias, entidades y municipios, así como las organizaciones inscritas, tendrán acceso a la información existente en el Registro, con el fin de estar enteradas del estado que guardan los procedimientos del mismo.

Aquellas personas que deseen allegarse de información establecida en el Registro, deberán sujetarse a las disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Artículo 33. Las dependencias y entidades, estatales y municipales, y los municipios que otorguen apoyos y estímulos a las organizaciones con inscripción vigente en el Registro, deberán reportar a la Secretaría Técnica, para su inclusión en el Sistema de Información, lo relativo al tipo, monto y asignación de los mismos.

Capítulo Quinto **Del Consejo Técnico Consultivo Estatal**

Artículo 34.- El Consejo es un órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto de la aplicación y cumplimiento de esta Ley.

El Consejo concurrirá anualmente con la Comisión para realizar una evaluación conjunta de las políticas y acciones de fomento de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y de los Municipios.

Artículo 35. El Consejo estará integrado de la siguiente forma:

I. El Secretario de Desarrollo Social, quien lo presidirá;

II. Seis representantes de organizaciones, cuya presencia en el Consejo será por tres años, renovándose dos cada año. La Comisión emitirá la convocatoria para elegir a los representantes de las organizaciones inscritas en el Registro, en la cual deberán señalarse los requisitos de elegibilidad, atendiendo a criterios de representatividad, antigüedad, membresía y desempeño de las organizaciones;

III. Tres representantes de los sectores académico, profesional, científico y cultural; la Comisión emitirá las bases para la selección de estos representantes;

IV. Un representante del Poder Legislativo Estatal, que será la diputada o el diputado que presida la Comisión Legislativa de Anticorrupción;

V. El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Sonora; y

VI. Un Secretario Ejecutivo, designado por el Presidente del Consejo con base en la terna propuesta por los integrantes del mismo.

Los consejeros propietarios deberán contar con un suplente el cual será electo bajo el mismo procedimiento que sus propietarios, tendrán la misma duración respecto a la temporalidad que les corresponda a estos últimos y serán renovados de la misma manera.

Artículo 36. El Consejo sesionará ordinariamente en pleno cada tres meses, y extraordinariamente cuando sea convocado por su Presidente o por un tercio de los miembros del Consejo. La Secretaría Técnica proveerá de lo necesario a todos los integrantes del Consejo para apoyar su participación en las reuniones del mismo.

Artículo 37. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las funciones siguientes:

I. Analizar las políticas de la Administración Pública Estatal y de los Municipios relacionadas con el fomento a las actividades señaladas en el artículo 4 de esta Ley, así como formular opiniones y propuestas sobre su aplicación y correcto funcionamiento;

II. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones en el seguimiento, operación y evaluación de las políticas de la Administración Pública Estatal y de los Municipios señaladas en la anterior fracción;

III. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones;

IV. Sugerir la adopción de medidas administrativas y operativas que permitan el cumplimiento de sus objetivos y el desarrollo eficiente de sus funciones;

V. Coadyuvar en la aplicación de la presente Ley;

VI. Emitir recomendaciones para la determinación de infracciones y su correspondiente sanción, en los términos de esta Ley;

VII. Expedir el Manual de Operación conforme al cual regulará su organización y funcionamiento; y

VIII. Las demás que le otorguen la presente Ley y su Reglamento.

Capítulo Sexto **De las Infracciones y Sanciones**

Artículo 38. Constituyen infracciones a la presente Ley, por parte de las organizaciones que se acojan ella:

I. Realizar actividades de autobeneficio o de beneficio mutuo;

II. Distribuir remanentes financieros o materiales provenientes de los apoyos o estímulos públicos entre sus integrantes;

III. Aplicar los apoyos y estímulos públicos Estatales o Municipales que reciban a fines distintos para los que fueron autorizados;

IV. Una vez recibidos los apoyos y estímulos públicos, dejar de realizar la actividad o actividades previstas en el artículo 4 de esta Ley;

V. Realizar cualquier tipo de actividad que pudiera generar resultados que impliquen proselitismo político, a favor o en contra, de algún partido o candidato a cargo de elección popular;

VI. Llevar a cabo proselitismo religioso;

VII. No destinar sus bienes, recursos, intereses y productos a los fines y actividades para los que fueron constituidas;

VIII. Abstenerse de entregar los informes que les solicite la dependencia o entidad competente;

IX. No mantener a disposición de las autoridades competentes, y del público en general, la información de las actividades que realicen con la aplicación de los apoyos y estímulos públicos que hubiesen utilizado;

X. Omitir información o incluir datos falsos en los informes;

XI. No informar al Registro dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles, contados a partir de la decisión respectiva, sobre cualquier modificación a su acta constitutiva o estatutos, o sobre cualquier cambio relevante en la información proporcionada al solicitar su inscripción en el mismo, y

XII. Presentar documentación o información falsa a la autoridad competente, y

XIII. No cumplir con cualquier otra obligación que le corresponda en los términos de la presente Ley.

Artículo 39. Cuando una organización de la sociedad civil con registro vigente cometa alguna de las infracciones a que hace referencia el artículo anterior, la Comisión, a través de la Secretaría Técnica, impondrá a la organización, según sea el caso, las siguientes sanciones:

I. **Apercibimiento:** en el caso de que la organización haya incurrido por primera vez en alguna de las conductas que constituyen infracciones conforme a lo dispuesto por el artículo anterior, se le apercibirá para que, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de la notificación respectiva, subsane la irregularidad;

II. **Multa:** en caso de no cumplir con el apercibimiento en el término a que se refiere la fracción anterior o en los casos de incumplimiento de los supuestos a que se refieren las infracciones VII, VIII, IX, X, XI y XII del artículo 38 de esta Ley; se sancionará con multa de cincuenta hasta trescientos días de salario mínimo general de la zona. En los casos en los que la infracción estuviese ligada al acceso de apoyos y estímulos públicos, se podrá imponer un monto adicional de multa de hasta el doble del máximo establecido.

III. Suspensión: por un año de su inscripción en el Registro, contado a partir de la notificación, en el caso de reincidencia con respecto a la violación de una obligación establecida por esta Ley, que hubiere dado origen ya a una multa a la organización, y

IV. Cancelación definitiva de su inscripción en el Registro: en el caso de infracción reiterada o causa grave. Se considera infracción reiterada el que una misma organización que hubiese sido previamente suspendida, se hiciera acreedora a una nueva suspensión, sin importar cuáles hayan sido las disposiciones de esta ley cuya observancia hubiere violado. Se considera como causa grave incurrir en cualquiera de los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo 38 de la presente Ley.

Las sanciones a que se refiere este artículo, se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que haya lugar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

En caso de que una organización sea sancionada con suspensión o cancelación definitiva de la inscripción, la Comisión, por conducto de la Secretaría Técnica, deberá dar aviso, dentro de los quince días hábiles posteriores a la notificación de la sanción, a la autoridad fiscal correspondiente, a efecto de que ésta conozca y resuelva de acuerdo con la normatividad vigente, respecto de los beneficios fiscales que se hubiesen otorgado en el marco de esta Ley.

Artículo 40. Las multas deberán cubrirse dentro del término de cinco días hábiles a partir de la notificación oficial en la Secretaría de Hacienda. Los recursos recaudados por este concepto deberán ser destinados al cumplimiento del objeto de la presente Ley.

Artículo 41. Los servidores públicos encargados de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de la presente Ley, en caso de incumplimiento, serán sancionados de acuerdo a las disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades y demás legislación que resulte aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que pudiesen incurrir.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

SEGUNDO.- El Ejecutivo Estatal deberá expedir el Reglamento de la presente Ley dentro de los 90 días hábiles posteriores a la fecha de entrada en vigor de esta Ley.

TERCERO.- La Comisión deberá quedar integrada dentro de los 120 días hábiles posteriores a la fecha de entrada en vigor de esta Ley y entrará en funciones de manera inmediata.

CUARTO.- La integración e instalación del Consejo deberá llevarse a cabo por la Comisión dentro de los 60 días hábiles posteriores a la fecha de integración de la Comisión.

QUINTO.- Para efectos de la inscripción de las organizaciones a que se refiere el Capítulo Cuarto de la presente Ley, el Registro deberá conformarse e iniciar su operación a los 120 días hábiles posteriores a la fecha de integración de la Comisión.

SEXTO.- El Gobierno del Estado deberá contemplar los recursos necesarios para la implementación de la presente Ley.

ATENTAMENTE
Hermosillo, Sonora a 31 de Octubre de 2017

C. DIP. LINA ACOSTA CID

C. DIP LISETTE LÓPEZ GODÍNEZ

C. DIP. CÉLIDA LÓPEZ CÁRDENAS

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La suscrita, diputada integrante del Partido de Acción Nacional de esta Sexagésima Primera Legislatura, en ejercicio de mi derecho de iniciativa consagrado por los artículos 53, fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, comparezco ante esta Honorable Asamblea, con la finalidad de someter a su consideración la presente iniciativa con punto de Acuerdo, con el objeto de exhortar, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Hacienda, para que en el próximo presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, se incluya una partida presupuestal suficiente para apoyar e impulsar el desarrollo de la preparatoria municipal Omar Osvaldo Romo Covarrubias en la ciudad de Nogales, Sonora y con ello garantizar la continuidad y permanencia de la paramunicipal, dado el impacto social y económico que representa la misma para la población nogalense.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La preparatoria municipal Omar Osvaldo Romo Covarrubias en la ciudad de Nogales, Sonora, fue creada mediante Acuerdo del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, publicado el 23 de agosto de 2012, como un organismo Paramunicipal, cuyos objetivos son por mencionar algunos, constituirse en una opción educativa para la juventud Nogalenses, que facilite su integración al estudio con un alto sentido de formación para la vida, para la convivencia familiar y social para la vida productiva y la solidaridad con un alto compromiso con la comunidad, así como ser una institución que contribuya a formar cuadros de jóvenes que no solamente se alejen y liberen de dependencias, vicios y ocios, sino que se conviertan en activistas comunitarios que contribuyan en la formación de una sociedad cada vez más sana, pacífica, productiva y solidaria.

La preparatoria actualmente cuenta con instalaciones propias, infraestructura tecnológica, dos campus, uno en la colonia Colosio y otro en la colonia La Mesa, cuenta con una plantilla de maestros capacitados con mínimo nivel licenciatura, en

donde más del 50% de los docentes cuenta con un posgrado y por último, cuenta con centro de cómputo con 20 equipos.

A pesar de las dificultades presupuestarias que atraviesa la preparatoria, ha podido obtener algunos logros importantes de destacar y que a continuación detallo:

- *Se han graduado 12 generaciones que representa a más de dos mil estudiantes.*
- *Se ha implementado un Programa de Preparatoria en las empresas (Modelo híbrido semi presencial con la Universidad de Sonora)*
- *La implementación de Google Apps For Education, la cual constituye una aplicación para la administración escolar y de contenidos académicos vía internet.*
- *Gestión para la construcción de 3 aulas y un edificio de artes.*
- *La reducción del rezago financiero por más de 3 millones de pesos.*

Como podemos advertir en el poco tiempo que tiene funcionando la preparatoria, se han obtenido resultados muy positivos y significativos en el rubro de la educación para los nogalenses; sin embargo, se requiere realizar más esfuerzos para que sean cada vez más los estudiantes que egresen de esta preparatoria y convertirla en una de las principales opciones de estudios en dicha ciudad fronteriza.

El municipio de Nogales, Sonora, como toda ciudad fronteriza, es muy susceptible de tener problemas de seguridad por los motivos que ya todos conocemos y que no necesito de enumerar, por lo que apoyar a instituciones educativas como dicha preparatoria, constituye una acción de prevención en el tema de seguridad y de impulso a la competitividad regional, de ahí la importancia de elevar y mantener el nivel académico - educativo de la preparatoria.

Pero para lograr lo anterior, se requiere de un presupuesto suficiente, ya que el presupuesto que le otorga el Municipio de Nogales a la paramunicipal no alcanza a cumplir con todos los objetivos trazados año con año y a pesar de ello como ya lo mencioné en párrafo anteriores, la preparatoria ha tenido resultado positivos.

En ese contexto, he decidido exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda, para que en el próximo presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018, se incluya una partida presupuestal suficiente para apoyar e impulsar el desarrollo de la preparatoria y con ello garantizar la continuidad y permanencia de la paramunicipal, dado el impacto social y económico que representa la misma para la población Nogalense.

En virtud de lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con punto de:

ACUERDO

ÚNICO. - El Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Hacienda, para que en el próximo presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, se incluya una partida presupuestal suficiente para apoyar e impulsar el desarrollo de la preparatoria municipal Omar Osvaldo Romo Covarrubias en la ciudad de Nogales, Sonora y con ello garantizar la continuidad y permanencia de la paramunicipal, dado el impacto social y económico que representa la misma para la población nogalense.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124, fracción III de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sonora, solicitamos se considere el presente asunto como de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido en su caso, en esta misma sesión.

ATENTAMENTE

Hermosillo, Sonora a 31 de octubre de 2017.

DIP. SANDRA MERCEDES HERNÁNDEZ BARAJAS

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

DIPUTADOS INTEGRANTES:

CÉLIDA TERESA LÓPEZ CÁRDENAS

JAVIER DAGNINO ESCOBOSA

LINA ACOSTA CID

BRENDA ELIZABETH JAIME MONTOYA

OMAR ALBERTO GUILLEN PARTIDA

IRIS FERNANDA SÁNCHEZ CHIU

CARLOS ALBERTO LEÓN GARCÍA

HONORABLE ASAMBLEA:

A los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de ésta Sexagésima Primera Legislatura, nos fue turnado para estudio y dictamen por la Presidencia de éste Poder Legislativo, diversos escritos presentados por los diputados Jesús Epifanio Salido Pavlovich y Carlos Alberto León García, integrantes de ésta LXI Legislatura, con el cual presentan, respectivamente, **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SONORA** e **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL DE SONORA.**

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 92, 94, fracciones I y IV, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, presentamos para su discusión y aprobación, en su caso, el presente dictamen al tenor de la siguiente:

PARTE EXPOSITIVA:

El Diputado Jesús Epifanio Salido Pavlovich, presentó su iniciativa el día 19 de septiembre de 2017, con sustento en la siguiente exposición de motivos:

“ El Código Penal del Estado ha sido objeto de importantes reformas a fin de adecuar sus disposiciones para atender diversos fenómenos delincuenciales frente a los cuales, se exige, legítimamente, mayor castigo y mejores formas de protección social.

El derecho penal como ciencia y ordenamiento sancionador de la conducta de los hombres debe revisarse permanentemente para asegurar la vigencia de sus principios y la eficacia social de su observancia y aplicación.

La modernización del derecho punitivo condensado y expresado en el Código Penal asegura la correspondencia de sus normas con la realidad y circunstancias sociales que lo nutren y a la que regula.

No obstante lo anterior, debe reconocerse que, si bien se ha avanzado en materia de procuración y administración de justicia, la realidad social es que debe ajustarse en cuanto a las punibilidades, porque conductas antisociales permanentes y reiteradas ponen en riesgo, con mayor crueldad, la vida, la integridad física y psicológica, el patrimonio de las personas y con ello atentan, en general, contra la seguridad pública de nuestro Estado y, por ende, la tranquilidad de los habitantes del mismo.

En nuestro Estado, como en el de otras entidades federativas, durante los dos últimos años han aparecido de manera reiterada formas de delincuencia que ponen en riesgo a nuestra comunidad, tal es el caso de la conducta típica de PORTACION DE ARMAS PROHIBIDAS, prevista en los artículos 140 y 141 del Código Penal para el Estado, la cual consiste en portar un arma de las consideradas como prohibidas en lugares públicos, misma que lamentablemente ha aumentado hasta llegar a índices alarmantes, acrecentado la amenaza al orden y a la seguridad pública, ya que se han integrado un número significativo de carpetas de investigación por parte de la Fiscalía de nuestra Entidad, por la portación de instrumentos de los denominados “machetes”, poniendo en un estado de riesgo y temor a nuestra sociedad.

De ahí, que sea preciso revisar y actualizar el tipo penal y la punibilidad del artículo 141 del Código Penal de Sonora.

Dicha modificación al artículo 141 del Código Penal del Estado, que se presenta a consideración, es el resultado de una profunda y exhaustiva revisión a la conducta típica que se han venido presentando de manera reiterada y que trajo como resultado un número elevado de causas penales que se han judicializado por este delito, que atenta contra la seguridad pública de nuestro Estado y pone en riesgo inminente a nuestra sociedad.

Por ello, en este orden de ideas, se propone la inclusión al tipo penal de nuevas modalidades de la conducta, que no solamente contemplen la conducta de portación del arma prohibida, sino también el acopio y la fabricación de una de las armas consideradas como prohibidas especificadas en el artículo 140 del Código Penal de Sonora.

Tal y como lo contemplan la mayoría de las legislaciones de otras entidades Federativas, como Sinaloa, el Estado de México, Campeche, Baja California, a fin de no solo castigar al que porte un arma prohibida, sino también a quien las fabrique y acopie.

Además, conforme a la necesidad de una reacción penal más severa para conductas de gravedad incuestionable, se propone modificar en el primer párrafo, la punibilidad del artículo 141 del Código Penal del Estado, en el cual se establece la pena alternativa de 1 mes a 1 año de prisión o de 40 a 250 días de multa, para efectos de que, se elimine la “pena alternativa” y el Ministerio Público esté en posibilidades de solicitar a petición de parte, la prisión preventiva oficiosa, en tratándose de dicho delito.

Además, respecto de la agravante prevista en el segundo párrafo del mencionado artículo, relativa a la portación de armas prohibidas en las instituciones de educación básica, media superior o superior, o sus inmediaciones, se propone, en el mismo sentido que el planteado en el párrafo que antecedió, elevar las penas de prisión, todo esto, tomando en cuenta la reiteración y la frecuencia con la cual se está consumando esta conducta delictiva de portación de arma prohibida en el Estado.

En este sentido, según la base de datos de estadística proporcionada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, desde el año 2016 al 10 de Agosto del 2017, un total de 344 causas penales por el delito de portación de armas prohibidas, han llegado a judicializarse por la Fiscalía General de Justicia del Estado.

De dicho universo de causas penales, tan sólo en esta ciudad capital, se presentaron 278, lo que representa el 80.8 % del total de ellas en el Estado.

Ahora bien, por lo que hace al Distrito Judicial de Cajeme, se presentaron 40, lo que constituye el 11.6% del total estatal. Sumando así, en estos dos municipios el 92.4% del total de las causas penales judicializadas por portación de arma prohibidas en el Estado.

En consecuencia de lo anterior, buscando efectos de prevención general y especial propios de la pena, se propone que se reforme el artículo 87, fracción I, inciso a) del Código Penal para el Estado de Sonora, para efectos de incluir una limitante en la procedencia de los beneficios de suspensión de la pena de prisión para quien “porte”, además de quien utilice un arma prohibida o explosivo, en la comisión del hecho que la ley señale como delito. “

Por su parte, el Diputado Carlos Alberto León García presentó su iniciativa ante esta Soberanía, en la sesión celebrada el día 17 de mayo de 2017 sustentando su propuesta en la siguiente exposición de motivos:

“Uno de los factores que se ha sumado a la impunidad del delito de portación ilegal y utilización de armas blancas en Sonora es la ausencia de un debido marco jurídico, que ha permitido que la delincuencia tenga secuestrada nuestras calles y lugares públicos, con la perpetración de robos, lesiones personales incluso la comisión de homicidios.

Es innegable que somos muchos los responsables del alto índice de delitos cometidos en Sonora, toda vez que no podemos soslayar que el problema de inseguridad pública intervienen diversos factores como el desempleo, la pobreza, las adicciones, la falta

programas de prevención del delito, la lentitud en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, entre muchos otros factores que han incidido para que esta problemática vayan en aumento, y que entre los sonorenses tenga el más alto repudio, pues la integridad de nuestras familias está en riesgo, y la impunidad va en aumento.

Según el Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX 2016) realizado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla, nos dice:

- *La impunidad es multidimensional. Es decir, la impunidad debe ser entendida como un fenómeno que surge de varias dimensiones del quehacer de un Estado como es la responsabilidad de la seguridad ciudadana, la procuración y administración de justicia, el buen funcionamiento del sistema penitenciario así como la protección de los derechos humanos.*

- *La impunidad es multicausal porque encuentra sus orígenes durante el proceso que inicia con la comisión de un delito, hasta que este es castigado y sus víctimas reciben la reparación por el daño causado. La impunidad mantiene correlación estadística con los niveles de corrupción y desigualdad socioeconómica.*

- *La impunidad surge a partir del mal funcionamiento de las dimensiones de seguridad, justicia y derechos humanos en el ámbito nacional y local de los países.*

- *Existe corresponsabilidad de todos los poderes de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) y en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) para atender el problema de la impunidad.*

- *La impunidad es un problema de gobernanza. En otras palabras, es un asunto que ya rebasó a todas las instancias de gobierno que claramente no pueden atender este problema de manera aislada. Por lo anterior, se necesita la atención y participación urgente de otros actores no gubernamentales como la sociedad civil, sector privado, academia, medios de comunicación y organizaciones internacionales.*

- *México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayores niveles de impunidad que mide el IGI.*

- *La impunidad es uno de los diez principales problemas que aqueja a la sociedad mexicana según encuestas nacionales del INEGI (ENVIPE).*

Sonora se ubica con nivel 2 en la escala de impunidad con otras cinco entidades, es decir, es de aquellos estados que cuentan con impunidad media.

En nuestra entidad se registran 1,209.6 presuntos delitos por cada 100 mil habitantes. Esto se acerca al promedio del país el cual es de 1,444.9 presuntos delitos por cada 100 mil habitantes.

Con base en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014, los cinco delitos del fuero común más recurrentes en Sonora son: 1. Robo

de vehículo 2. Otros robos 3. Incumplimiento de asistencia familiar 4. Lesiones 5. Daño a la propiedad.

Compañeros diputados, en nosotros esta la responsabilidad de proporcionar a la ciudadanía las herramientas jurídicas suficientes y necesarias para abatir la impunidad y que este tipo de conductas delictivas tenga una debida sanción a quien porte y utilice instrumentos que por su lesividad puedan ser utilizados para agredir, en la inteligencia que el bien jurídico tutelado o protegido, es la seguridad colectiva, y la intención es reprimir las conductas que entrañen un peligro para esa seguridad.

Según el Observatorio Sonora por la Seguridad señala en su reporte de incidencia de los delitos de alto impacto 2016.

- *Sonora vive una crisis de robo con violencia. La tasa de casos de robos con violencia reportada para 2016 fue de 251.53 por cada 100 mil habitantes, superando la tasa nacional por 69.28%*
- *La violencia también posicionó a Sonora como el año con más homicidios dolosos de los últimos 6 años, los municipios con más índice de homicidios dolosos desde el 2011 fueron Cajeme y en segunda posición Hermosillo.*
- *En materia de robo a casa habitación, Sonora ocupa el octavo lugar en el ranking nacional en tasas por cada 100 mil habitantes.*

En ese orden de ideas, no debe pasar por desapercibido que la venta libre de elementos corto-punzantes es un factor determinante para que los delincuentes accedan fácilmente a la adquisición de una navaja, machete o cualquier otra clase de elemento que le permita cometer sus ilícitos y esto contribuye a los fines perseguidos por ellos, pues para un delincuente es más fácil de acceder incluso fabricar este tipo de arma blanca que a un arma de fuego por el costo que la misma tiene, sino que además el delincuente sabe que la penalización para quien porte un arma de fuego le representa la privación de su libertad; es por esta razón que el arma blanca se convierte en la alternativa que le facilita su acto delictivo y es por esta misma razón que para la ciudadanía es común ver al delincuente de la esquina de su casa sacar una “una navaja” en plena calle y a plena luz del día, por el conocimiento que se tiene que no hay normas que lo castiguen severamente, lo cual permite en muchos casos la impunidad.

Para mayor sustento de la presente iniciativa, se transcribe ejecutoria con carácter de jurisprudencia, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los siguientes términos:

PORTACIÓN DE ARMA PROHIBIDA. PARA VERIFICAR LA CONFIGURACIÓN DE ESE DELITO DEBE ATENDERSE A LAS CIRCUNSTANCIAS Y A LOS HECHOS QUE REVELEN LA FINALIDAD DEL SUJETO ACTIVO, INDEPENDIEMENTE DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 106/2007-PS. NATURALEZA DEL INSTRUMENTO QUE

SE PORTE (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE QUERÉTARO Y MORELOS).-En estricto acatamiento al principio de exacta aplicación de la ley penal contenido en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los artículos 219 y 245 de los Códigos Penales para los Estados de Querétaro y Morelos, respectivamente, al prever, entre otros, el delito de portación de arma prohibida, contienen los mismos elementos del tipo penal en tanto que ambos sancionan "a quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas". Así, la descripción típica exige un elemento subjetivo específico consistente en que la conducta se realice "sin un fin lícito"; de ahí que para determinar cuándo un instrumento sólo puede utilizarse para agredir, debe atenderse a la finalidad ilícita de quien lo porta, es decir, a la intención de usarlo para agredir. En ese tenor, se concluye que para verificar la configuración del delito de portación de arma prohibida debe atenderse a los hechos y a las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión que revelen la finalidad del sujeto activo, independientemente de la naturaleza objetiva y funcional del mencionado instrumento. Lo anterior es así, porque cuando el tipo penal señala que los instrumentos no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, se refiere a la forma en que se utilizan y no a la materialidad y al objetivo con que fueron creados, pues independientemente de sus características y de que hayan sido hechos para una actividad laboral o recreativa, pueden portarse con la finalidad de utilizarlos para agredir, por lo que resulta relevante la aplicación que el sujeto activo del delito les dé, lo cual ha de desprenderse de las circunstancias y de los hechos que rodean la conducta desplegada."

Expuesto lo anterior, esta Comisión procede a resolver el fondo de las iniciativas en estudio, para lo cual nos fundamentamos bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA.- Es facultad constitucional y de orden legal de los diputados al Congreso del Estado, iniciar ante este Órgano Legislativo las leyes, decretos o acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito jurisdiccional del Estado, atento lo dispuesto por los artículos 53, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

SEGUNDA.- Conforme al orden jurídico local, es potestad constitucional exclusiva de este Poder Legislativo discutir, aprobar y expedir toda clase de leyes, decretos y acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito territorial del Estado, siendo materia de ley toda resolución que afecte a las personas en general, de decreto la que otorgue derechos o imponga obligaciones a personas determinadas, y de acuerdo en los

demás casos, según lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Además, es importante señalar que, en la interpretación, reforma o abrogación de leyes, deberán observarse los mismos trámites establecidos para su formación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política del Estado de Sonora.

TERCERA.- El Poder Legislativo del Estado tiene la atribución de velar por la conservación de los derechos de los ciudadanos y habitantes del Estado y proveer, por cuantos medios estén a su alcance, a su prosperidad general de conformidad con el artículo 64, fracción VII de la Constitución Política del Estado de Sonora.

CUARTA.- Los integrantes de esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos, hemos determinado que deben ser resueltas de manera conjunta, las iniciativas presentadas por los diputados Epifanio Salido Pavlovich y Carlos Alberto León García, a las que se hace referencia en el proemio del presente escrito, en virtud de que tratan sobre el mismo tema, es decir, el endurecimiento de las penas por la portación, utilización, fabricación o por hacer acopio de armas prohibidas.

En nuestro país, la portación y utilización de armas se encuentra regulada por el artículo 10 de la Constitución Política Mexicana, así como por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, mismos ordenamientos que imponen una serie de requisitos a las armas que pueden ser portadas y utilizadas por los particulares.

Estas restricciones no son implementadas por el capricho de nuestra Carta Magna y la norma secundaria, sino que tienen la finalidad de evitar la proliferación de armas peligrosas que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas en lo general, al ser utilizadas en la comisión de delitos o por parte de personas que no encuentran debidamente capacitadas para su uso.

En los tiempos que corren, es cada vez más frecuente la utilización de todo tipo de armas, en la comisión de diversos delitos, principalmente, el de Robo; lo que, a su vez, implica que dichos actos ilícitos son cometidos con todo lujo de violencia, siempre amenazando la seguridad de las víctimas, así como, la de quienes tengan la mala suerte de encontrarse en los alrededores, al alcance de la acción de esas armas, que no necesariamente deben de ser de fuego, sino simplemente, contar con las características que la hagan representar un peligro para la víctima y la sociedad.

Recientemente, los medios de comunicación han dado cuenta de varios delitos cometidos con el uso de armas prohibidas, siendo la más peculiar, el conocido Machete, provocándose enfrentamientos entre presuntos delincuentes y agentes de policía, terminando con saldos rojos, al tener estos últimos que responder con fuerza letal, precisamente, para evitar lo más rápido posible, el uso inadecuado de las armas que se encuentran en manos de los delincuentes que pretenden detener.

La frecuencia y peculiaridad de la utilización de un machete como arma para la comisión de delitos, causaron polémica entre la sociedad, ya que este instrumento es visto en nuestro Estado, como una herramienta de trabajo y no como un arma, ya que es utilizada en las labores del campo, así como, en la ciudad, donde podemos ver a los clásicos vendedores de agua de coco y a los jardineros, portar machetes para desarrollar sus labores cotidianas; sin embargo, las características que presenta dicho instrumento lo hacen ideal para ser utilizado como un arma blanca muy peligrosa, que puede ser utilizada para la comisión de delitos. No obstante, cuando una persona porte un machete o cualquier otro instrumento, queda a criterio de la autoridad si se trata de una herramienta de trabajo o una potencial arma con riesgo de utilizarse para delinquir.

El caso es que la regulación actual ha impedido que se castigue adecuadamente a los delincuentes armados y, por lo mismo, no es suficiente para inhibir la portación y utilización de armas prohibidas, por lo que, para atacar este problema, las iniciativas en estudio proponen diversas modificaciones al Código Penal local, de manera congruente y fortaleciéndose entre sí, siendo las siguientes:

En el artículo 87, se propone limitar la suspensión condicional de la pena, para que no pueda otorgarse este beneficio a aquellas personas que en la comisión del delito que se les imputa, no hayan portado armas prohibidas, precisando cuales son las "armas" a que se refiere este precepto legal.

En el artículo 140, se amplía el concepto de armas prohibidas en la fracción IV, que es la que prohíbe todas aquellas que, independientemente de su denominación, por sus características físicas, puedan ser utilizadas para lesionar a otra persona de manera grave, al grado de poner en riesgo su vida, lo que las hace especialmente peligrosas en la comisión de un delito.

Es lo anterior que, en el artículo 141, adicionalmente, se aumentan las penas por el delito de portación de armas prohibidas, aumentando los alcances de esa conducta ilícita para que alcance a quien haga acopio o fabrique alguno de esos instrumentos en lugares donde se consuman bebidas embriagantes, en centros de diversión, o en cualquier otro lugar público, agravando la pena privativa de la libertad y pecuniaria, cuando la portación se realice en el interior de las instituciones de desarrollo infantil, preescolar, de educación básica, media superior o superior, o en sus inmediaciones, por ser donde se encuentran las personas más vulnerables e importantes de toda sociedad, nuestros niños y jóvenes.

En razón de las anteriores consideraciones, los diputados que integramos esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos, aprobamos las iniciativas que nos fueron turnadas para su análisis y dictaminación, y recomendamos su aprobación al Pleno de esta Soberanía, ya que con su entrada en vigor, otorgaremos herramientas jurídicas más eficaces al Estado, para combatir e inhibir la portación y fabricación de armas, así como la utilización de las mismas en la comisión de delitos.

Por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora, sometemos a consideración del Pleno, el siguiente proyecto de:

DECRETO

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SONORA

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículo 87, fracción I, inciso a), 140, párrafo segundo, 141, párrafos primero y segundo y se adiciona un párrafo sexto al artículo 141, todos del Código Penal del Estado de Sonora, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 87.- ...

I.- ...

a) Que sea la primera vez que delinque el sentenciado y que no haya portado o utilizado cualquier tipo de arma prohibida o explosivos en la comisión del hecho que la ley señala como delito que se le atribuye;

b) al f) ...

II a la VI.- ...

ARTICULO 140.- ...

I a la III. ...

IV. Aquéllas que por sus características, conformación o dimensiones, entrañen un riesgo en razón de sus potencialidades lesivas, y que puedan emplearse en la comisión de hechos que pongan en peligro la vida y la integridad personal o el patrimonio de las personas. También se consideraran armas prohibidas las que otras leyes o el Ejecutivo designe como tales.

ARTÍCULO 141.- Se aplicará prisión de seis meses a seis años y multa de cincuenta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, a quien porte, haga acopio o fabrique alguna de las armas a que se refiere el artículo anterior, en lugares donde se consuman bebidas embriagantes, en centros de diversión, o en cualquier otro lugar público.

Cuando las armas señaladas en el párrafo anterior se porten en el interior de las instituciones de desarrollo infantil, preescolar, de educación básica, media superior o superior, o en sus inmediaciones, la sanción será de dos a seis años de prisión y multa de ochenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización.

...

...

...

El presente delito será oficioso, sin perjuicio de la aplicación de las reglas del concurso previstas en este Código.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

En tal sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder legislativo, se solicita que el presente dictamen sea considerado como obvia resolución y se dispense el trámite de segunda lectura, para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión.

SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO "CONSTITUYENTES SONORENSES DE 1917"

Hermosillo, Sonora, a 17 de octubre de 2017.

C. DIP. CÉLIDA TERESA LÓPEZ CÁRDENAS

C. DIP. JAVIER DAGNINO ESCOBOSA

C. DIP. LINA ACOSTA CID

C. DIP. BRENDA ELIZABETH JAIME MONTOYA

C. DIP. OMAR ALBERTO GUILLEN PARTIDA

C. DIP. IRIS FERNANDA SÁNCHEZ CHIU

C. DIP. CARLOS ALBERTO LEÓN GARCÍA

NOTA DEL EDITOR: Las iniciativas y posicionamientos de los diputados se publican en los precisos términos en los que son enviados por quienes los suscriben.